



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**“Análisis del delito de la posesión de dos o más tipos de drogas en la ley
Penal Peruana”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA.

AUTORA:

Gamboa Gonzales, Karen Estepfani

ASESOR:

Dr. Guisseppi Paul Morales Cauti

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2017

Página del Jurado

Jorge Rodríguez Figueroa

Presidente

Ricardo Salvatierra Yi

Secretario

Morales CautiGuisseppe Paul

Vocal

Dedicatoria

A mis padres Elizabeth Gonzales Bedoya y Pedro Alejandro Gamboa Basilio, quienes han sido la guía y el motivo para poder llegar a este punto de mi carrera, que con su ejemplo y palabras de aliento hicieron posible que hoy continúe alcanzando mis propósitos.

Agradecimiento

A mi asesor, Guisseppi Paul Morales
Cauti por hacer posible el confín de mi
tesis.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Karen Estepfani, Gamboa Gonzales, con DNI N° 47136347, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han sido falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio de 2017

Karen Estepfani Gamboa Gonzales
DNI N° 47136347

Presentación

Señores miembros del Jurado:

Pongo a su disposición la presente investigación realizada que está dirigida a mejorar el estudio jurídico de la norma penal de manera que se dé un enfoque reflexivo sobre el análisis del artículo 299° del código penal y su eficacia en la provincia constitucional del callao, para lo cual se analizara también legislación comparada, en tanto la aplicación de nuestra norma a la realidad concreta y poder determinar el nexo entre la exclusión de punibilidad por la posesión de 2 o más drogas contenido que encontramos en el segundo del artículo 299° del código penal y su eficacia en el ordenamiento jurídico penal peruano.

Así mismo, para la realización de esta investigación, se optó por seguir algunos métodos técnicos de investigación científica que estructuren la investigación a través de entrevistas a fiscales especialistas en derecho penal, en general para conocer su opinión del tema de investigación.

Además de tenerse presente que el artículo 298° contenido en el Código Penal como bien sanciona la comercialización de drogas en cantidades pequeñas dado que es subsidiario del tipo base del artículo 296°, el cual sanciona la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico, de manera que la sanción destinada a aquella persona que consuma este delito determinado en el artículo 298°, resulta necesario que el sujeto sea intervenido cuando ejerce la posesión de la droga con la sola finalidad de comercializarla, siendo este requisito la relevancia que importa el tipo base. Es así que una interpretación adecuada del artículo 298°, significa una regla atenuante del tráfico de drogas que sanciona el tener en posesión estupefacientes en reducidas cantidades teniendo esta como destino la comercialización y por tal careciendo de autonomía para tipificarse como un delito aparte del tipo base.

La autora

Índice

	Página
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I.INTRODUCCIÓN	xi
Aproximación Temática	1
Trabajos Previos	- 3 -
Teorías relacionadas al tema	- 7 -
Formulación del Problema	- 21 -
Justificación del estudio	- 23 -
Objetivo	- 23 -
Supuesto Jurídico	- 24 -
II. MÉTODO	- 26 -
2.1 Tipo de Investigación	- 27 -
2.2 Diseño de investigación	- 28 -
2.3 Caracterización de sujetos	- 28 -
2.4 Población y Muestra	- 29 -
2.5 Técnicas e Instrumento de recolección de datos, validez	- 29 -
2.6 Método de análisis de datos	- 30 -
2.7 Tratamiento de la Información: unidades temáticas, categorización	- 31 -
2.7 Aspectos éticos	- 31 -
III. RESULTADOS	- 32 -
3.1 Presentación de resultados: Técnica Análisis de documental	- 33 -
3.2 Presentación de resultados: Técnica Entrevista.	- 35 -
IV. DISCUSIÓN	- 43 -
VI. CONCLUSIONES	- 49 -
VII. RECOMENDACIONES	- 51 -

VIII. REFERENCIAS

- 53 -

IX. ANEXOS

9.1 Anexo 1 Matriz de Consistencia	73	
9.2 Anexo 2 Ficha de entrevista		75
9.3 Anexo 3 Ficha de Validación de preguntas	77	
9.4 Anexo 4 Ficha de Validación de entrevista	80	

RESUMEN

La investigación que en adelante tengo a bien presentar, tiene como meta principal precisar de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana, que para obtener nuestras conclusiones, se ha utilizado en la presente investigación un enfoque cualitativo, para lo cual se tomó de muestra algunos casos que se archivaron en la etapa preliminar, utilizando como instrumentos de recolección de datos, la guía de análisis documental y de entrevista durante el año 2017, de los cuales se obtuvo que en el distrito judicial del Callao no habido sentencia respecto de la aplicación de la figura contenida en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal, refiriéndome en otras palabras, a la micro posesión de dos o más tipos de drogas de las cantidades consideradas no punibles, esto determinó que la regulación de dicho delito resulte siendo atípico en el sentido que esta norma jurídica no sea parte del tráfico ilícito por el solo hecho de encontrársele a cierto individuo en el ejercicio de la posesión de estupefacientes que superen lo estipulado por la norma antes mencionada, pues la misma debe cumplir los requisitos mínimos que argumenten razonablemente la existencia de los elementos del delito y la desestimación de la presunción de inocencia que permita su próxima acusación.

Palabras claves: Tráfico Ilícito de drogas, Micro Posesión de drogas, Posesión, presunción de inocencia.

ABSTRACT

The investigation that I am going forward to present, has as its main goal to specify how the crime of possession of two or more types of drugs is regulated in the Peruvian Criminal Law, which to obtain our conclusions, has been used in the present investigation a qualitative approach, for which some cases that were archived in the preliminary stage were taken, using as data collection instruments, the document analysis and interview guide during the year 2017, from which it was obtained that in the judicial district of Callao there was no ruling regarding the application of the figure contained in the second paragraph of article 299 of the criminal code, referring in other words, to the micro possession of two or more types of drugs of the amounts considered not punishable, this determined that the regulation of said crime turns out to be atypical in the sense that this legal norm is not part of the illicit traffic by the The fact of finding a certain individual in the exercise of possession of narcotics that exceed the stipulations of the aforementioned norm, since it must meet the minimum requirements that reasonably argue the existence of the elements of the crime and the dismissal of the presumption of innocence that allows his next accusation.

Keywords: Illicit drug trafficking, Micro Possession of drugs, Possession, presumption of innocence.

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación Temática

Actualmente el delito de tráfico ilícito de drogas regulado en el capítulo III, Sección II del código penal vigente, regula todas sus modalidades intentando penalizar el beneficio económico que se busca obtener al ser comercializadas estas sustancias las cuales están prohibidas y comprendidas como una afrenta a la salud y bienestar social por ser perjudiciales para el que opta adquirir y consumir las mismas.

En nuestro país, se advierte una excesiva carga procesal, que excede la capacidad funcional de los fiscales penales; que tiene como actividad principal, la de recabar todos los elementos de convicción para determinar la responsabilidad o falta de responsabilidad del investigado; ello por supuesto, demanda una enorme concentración y despliegue de dicho operador de justicia acorde al modelo procesal.

Así mismo, la disimilitud sustancial entre la norma anterior con la que se encuentra vigente a la fecha, es la búsqueda de la penalización de aquellas drogas que tienen como destino la comercialización, por ello, conforme al artículo 299 del código penal determina que el límite entre el consumo propio e inmediato, yace en que la cantidad supere los 05 gr. de PBC, 02 gr. de clorhidrato de cocaína, 08 gr. de marihuana o 02 gr. de sus derivados, pero es que el problema se encuentra en aquellas personas que son consumidores, en otras palabras, aquellas personas que hacen uso de estos estupefacientes para su propio consumo.

Hay que tener en cuenta que esta brecha impuesta por la legislación nacional, es llevada a la Provincia Constitucional del Callao, en el cual, no hay caso alguno bajo estos márgenes que haya ameritado sentencia, dado como bien se ha señalado líneas arriba nuestra legislación solo penaliza la posesión de drogas destinadas a la comercialización.

De manera que en la práctica resulta complejo demostrar cuando aquella droga en cantidades pequeñas está destinada al tráfico, dado que el fiscal toma entre

otros los siguientes criterios que le ayudaran a decidir si la droga encontrada tiene fines comerciales o no: 1) Que la posesión de droga sea una cantidad considerable, la cual será valorada según su clase, que el poseedor no sea un consumidor habitual o un adicto, que dicho estupefaciente encontrado esté listo para ser enviado a su distribución, que la droga este siendo ocultada, que exista carencia de en la adquisición por parte de dicho poseedor con relación al precio que tiene la droga en el mercado, la actitud que muestra el individuo en relación a la presencia policial, que dicho estupefaciente sea de pureza alta, que se halle con objetos que permitan pesar dicho estupefaciente y que se encuentre en dominio de importantes sumas de dinero.

Sin bien estos indicios pueden apoyar al descubrimiento de la comercialización de la droga poseída, sin embargo, se ha denotar que algunos de los mencionados son discutibles, como es de verse en la cantidad de la droga encontrada, entonces se debe tomar renuente atención a saber la cantidad que debe ser destinada al propio consumo desestimando su comercialización.

Como es el caso de quien es consumidor de marihuana que tiene en su poder diversas cantidades de estupefacientes que sumados dan un peso que supera los 08 gr. Permitidos para el consumo personal sin que esto indique a ciencia cierta que va ser destinado a su inmediata comercialización; También puede pasar que se detenga a esta persona sin saber que era la primera que vez que adquiriría estupefacientes para consumirlo y experimentar sus efectos a fin de satisfacer su propia curiosidad.

Así posiciones similares son tomadas para que el caso se llegue archivar o incluso aun formalizándose denuncia, en la etapa instructiva ni se llegue apertura, dado que no se llega a cumplir los indicios suficientes para que apoyen la acusación, como bien podemos denotar una deficiencia en nuestra norma al no ser específico la descripción del tipo penal.

Trabajos Previos

En el presente trabajo consta de antecedentes que permiten conocer por intermedio de otros trabajos la realidad problemática, así como el tema en

concreto, por el que se ha citado algunos autores metodológicos que han aportado pautas importantes para la elaboración del presente trabajo; entre los que tenemos a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 28) los que al hablar de lo que significa para ellos trabajos previos dicen que antes de entrar de lleno a un tema en específico se debe hacer previos estudios e investigaciones que surgen a su vez de trabajos anteriores al de uno mismo.

Estos autores nos hacen una importante mención diciéndonos que los antecedentes son base importante y necesaria para iniciar una investigación, en tanto parafraseando a Balestrini (2001, p.16) se puede extraer de su aporte al tema que los antecedentes son estudios previos del tema al que nosotros como investigadores queremos abordar, se observa de la presente que el autor relaciona los antecedentes con los objetivos del estudio de investigación, del cual se desprende la real importancia de estos estudios previos para ayudarnos a sustentar los propios trabajos de investigación.

Conforme a ello, en la presente investigación, se mencionan algunas investigaciones nacionales e internacionales a fin de estructurar formalmente la idea de la presente investigación.

Trabajos Previos Internacionales

Es así que, a nivel internacional, está Torres (2014), en su investigación titulada “El sistema internacional de regulación de drogas: las políticas antinarcóticos en Colombia”, con motivo de obtener el grado de Doctor en Ciencias Políticas y sociología, en el año 2014, en la ciudad de Madrid – España, expone acerca de que las políticas antidrogas tiene como fin erradicar el consumo y comercialización de las drogas y por tanto debe formar parte importante en las agendas políticas de las instituciones internacionales, concluyendo que:

EL consumismo y la producción de las de las drogas, a pesar de su tipificación normativa que limita y prohíbe su consumo, no ha surtido los efectos esperados por el legislador dado que la modificación de este comportamiento obedece a normas morales y culturales.(p. 322)

Así también, a nivel internacional está León (2005), en su investigación titulada “Entre la Interdicción y el desarrollo alternativo, el problema de las drogas ilícitas desde una perspectiva internacional”, con motivo de obtener el título de grado en Ciencias Políticas, en el año 2005, en la ciudad de Bogotá - Colombia, expone acerca de los efectos negativos que trae la inestabilidad gubernamental que se ve reflejada en los conflictos políticos, concluyendo que:

[...]En contraste con los nefastos efectos observados por la implementación de la estrategia de interdicción, se advierte que por su alto contenido social y sus buenos resultados, el componente de Desarrollo Alternativo se perfila, en cambio, como la estrategia más idónea para ser implementada en Bolivia, de preferencia sin la parte de interdicción y dejando de constituirse en un simple programa de apaciguamiento social que contiene ineficientemente los efectos negativos producto de la interdicción. (p. 60).

La tesis de Narvaez C. (2010) titulada “Revisión y análisis de criterios judiciales aplicados en la interpretación de la expresión pequeñas cantidades del artículo 4° de la ley 20.000 en la región de Coquimbo entre los años 2005 y 2009”, con motivo de obtener el grado de Magister en Derecho penal concluye lo siguiente:

Que si bien es cierto, la legislación nacional es la que establece los parámetros y lineamientos respecto a que considera como una cantidad mínima que regule y acepte su consumo sin extenderse de tal manera que desproporcione la figura del consumo personal, se debe otorgar al juez el elemento suficiente que permita valorar si sucede así; Es el juez quien tiene aquella labor de dar a conocer lo más conveniente mediante su veredicto. (p.109-110).

Trabajos Previos Nacionales

Ruda (2016), en su investigación titulada “Tráfico Ilícito de drogas en el Perú: una aproximación internacional”, con motivo de obtener su título de grado en Derecho Penal, en el año 2016, en la ciudad de Lima – Perú; manifestando en su segunda conclusión que:

El tráfico de estos estupefacientes es una actividad amenazante que está estrechamente vinculada a actividades delictivas (p. 41).

Claramente se evidencia un grave problema a consecuencia de la comercialización de drogas, de manera que la comunidad internacional ha creado un conjunto de mecanismos con el fin de acrecentar la cooperación contra el tráfico ilícito de drogas y cumplir con aquellos compromisos concordados por los estados.

Respecto de la lucha contra las drogas, está **Perea (2004)**, en su investigación Tesis - La Concertación Multisectorial en la lucha contra las drogas, con motivo de obtener su título de grado en Derecho Penal, en el año 2004, en la ciudad de Lima – Perú, manifestando en su segunda conclusión que:

De acuerdo a la concertación multisectorial, sus peritos en psicología se encuentran aptos para crear estrategias que permitan atacar aquellos flancos débiles frente al consumo y otros problemas de aspecto social dado su trabajo en la capacitación. (p. 56).

Como bien la intervención de estos profesionales apoyaría en la optimización de la organización multisectorial de lucha contra las drogas haciendo más notorio el problema de comercialización de estupefacientes, que permitirá sea agendado de manera importante este asunto para así prepararlos de acuerdo a la problemática y participar con el fin de obtener resultados deseados.

De otro lado acerca del consumo de drogas tenemos a **Cosco(2013)**, en su investigación titulada “La Dosis mínima en el consumo de Drogas”, con motivo de obtener el grado de Doctor en Derecho Penal, al año 2013, en la ciudad de Lima – Perú, nos dice acerca de la dosis mínima concluye que:

[...] La Dosis personal tal como está regulado en el artículo 299° del Código Penal es una puerta abierta para el tráfico ilícito de drogas, toda vez que su aplicación no está limitada a adictos, sino que puede ser invocado incluso por micro comercializadores (p. 128).

El autor comenta entonces respecto de la dosis personal conforme lo regulado en el art. 299° que penaliza al poseedor encontrado con drogas mayores a lo

establecido en el párrafo precedente, pero que, por sus condiciones personales de adicción respecto a la droga, necesita la cantidad que tenía en posesión.

Teorías relacionadas al tema

El presente trabajo, además de estructurar formalmente la idea de investigación con los antecedentes nacionales e internacionales, también compone un marco teórico referencial que ayudará a difundir cierto conocimiento sobre los temas de referencia en la investigación, y así parafraseando a **Ander** (1993), tenemos que en el marco teórico o referencial se hace expresiva las proposiciones dadas en la teoría.

El autor, refiere como es que debería reconocer al marco teórico y su funcionalidad en el conocimiento de la investigación sobretodo con el problema; empero, se tiene parafraseando a Vara (2012, p. 104) tenemos que la base teórica es un conjunto de las teorías que dan respuesta a la investigación. Por tanto, de tenerse en cuenta se desprende lo siguiente: que una buena base teórica, la misma versa sobre el estudio de libros, revistas, jurisprudencia, consultas a especialistas en la materia y saber las actualizaciones respecto de los últimos acontecimientos sobre el tema, para de esta manera lograr un correcto dominio del marco teórico.

Es por ello, que para la presente investigación resulta significativo conocer algunos términos que apoyaran en la comprensión del problema incorporando conocimientos previos relativos al mismo, por lo expuesto es importante conocer el concepto, teorías o clasificaciones referente al tema.

Derecho Procesal Penal

Para Neyra (2010) el Derecho Procesal Penal comprende un compendio de la normatividad legal permitiendo la aplicación de las consecuencias jurídicas establecidas en el Derecho Penal material, de manera que regula la actividad procesal para determinar en concreto la responsabilidad penal y la imposición de las penas (p.267).

En tanto nuestro Derecho Procesal Penal es el único instrumento que permitirá desarrollar la actividad procesal de manera ordenada.

Ministerio Público

El Ministerio Público es el persecutor del delito y el que acciona el aparato estatal al ejercitar la acción penal junto con la Policía Nacional participa en la investigación del delito, gozando de autonomía funcional tanto como administrativa en cumplimiento de sus atribuciones con el fin de hacer respetar los derechos vulnerados.

Eficacia

La eficacia de la norma responde a la validez de una norma tanto del aspecto formal como sustancial.

Para Castro (2004) expresa que la eficacia de la norma es de obligatoriedad general y deberán ser cumplidas por la comunidad y los poderes públicos, por tanto, la norma prevé consecuencias jurídicas ante su incumplimiento (p. 1)

Tráfico Ilícito de Drogas:

Según la Real Academia de la Lengua Española (2016), Tráfico de drogas tiene como definición el cultivo y/o elaboración de drogas tóxicas con un fin comercial evadiendo el control legal que ejerce el estado.

Como bien el estado denomina ilícita la comercialización de drogas con fines de lucro. Sin duda este tipo de criminalidad adquiere una gran importancia por los aspectos que involucra, tanto como su vinculación con una serie de aspectos político jurídico- estatal y en mérito a las repercusiones que aquella acción ilegal genera en nuestra sociedad, que además determina la política internacional del Perú con el resto de países del mundo, primero con aquellos donde se advierte la producción de las drogas ilegales y, segundo con los calificados países consumidores.

Según el autor Peña C. (2009, p. 79) refiere: "Que el Perú está muy lejos de poder adoptar una política criminal despenalizadora del tráfico de drogas; por lo que resulta aún necesaria la criminalización de los más graves

comportamientos, que en su quehacer delictivo provocan perjuicios significativos al interés jurídico penalmente tutelado, en mérito al crecimiento del consumo de drogas y al emergente mercado internacional de consumo, que determina la aparición de una criminalidad muy sangrienta en su accionar que requiere ser frenada por la política criminal del Estado”.

Tipo de Droga

Entre los tipos de droga de acuerdo a los efectos se clasifican en las siguientes; las sedantes, estimulantes, alucinógenas y afrodisiacas. Así se encuentran las que a continuación detallaré:

Cannabis; (droga conocida como hachís, hierba, costo, chocolate), este tipo de droga es una planta de origen natural que tiene tres usos distintos, entre los cuales el más común es hacer resina de este el cual es presentado en bloques solidos oscurecidos, siendo de esta planta lo menos usado sus tallos conocidos como maría, así también está el aceite de cannabis. Como bien se conoce la planta cannabis no solo puede usarse para fumar sino también puede dársele el uso para cocinar y comer.

En Irlanda es considerada la droga más común después del alcohol.

Riesgos: De acuerdo a investigación se determina que los consumidores de este tipo de droga a largo plazo terminan generando adicción a este estupefaciente, aumentando el riesgo de cáncer y problemas cardiacos como también ocasionar daños irreparables al pulmón que es principal víctima de su consumo.

Éxtasis; (droga conocida como Eva, adán, Mitsubishi, Supermanes), este tipo de droga se fabrica en laboratorios clandestinos de aquellos países europeos, que son vendidos en pastillas con diversos logotipos, que, por la condición en su producción, estas pueden contener otras drogas.

Riesgos: tras investigaciones se ha determinado que en los consumidores recurrentes de este tipo de droga suelen experimentar una crisis a mitad de semana que los termina por dejar deprimidos y cansados, a largo plazo terminan por desarrollar problemas de salud mental, es muy poco de verse

muertes por causa de éxtasis, no descartando la posibilidad de infartos o crisis de asma.

Heroína; (droga conocida como burro, jaco, nieve blanca, caballo), este tipo de droga se crea de la morfina, droga que proviene de la adormidera del opio, se suele consumir inyectándose o fumándose.

Riesgos: Este tipo de droga si se inyecta suele generar coágulos de sangre, gangrena, puede facilitar el contagio del SIDA, la hepatitis B y C, así la metadona suele ser utilizada como sustitución para sustituir la dependencia de la heroína.

Cocaína; (droga conocida como coca, nieve, farlopa), este tipo de droga es transformada a partir de las hojas de coca, una planta que proviene de Sudamérica, que suele ser consumida inhalándose el polvo por la nariz, es un potente estimulante, los efectos duran hasta veinte minutos luego de cada toma.

Riesgos: Este tipo de droga genera un daño permanente al interior de la nariz, incluso al corazón y los pulmones, así ingerir dosis grandes podría provocar coágulos de sangre y por consecuencia la muerte.

Anfetaminas (Droga conocida como speed, espid, anfeta), este tipo de droga es de efecto estimulante, antiguamente se utilizaba como pastillas de adelgazamiento, normalmente es un polvo blanco grisáceo que es comercializada en paquete de papel envueltos, de nombre “papelina”, se ingiere por vía oral, o también se inyecta o esnifar.

Riesgos: Este tipo de droga puede generar paranoia, alucinaciones y a un largo plazo puede desarrollar la enfermedad conocida como “psicosis anfetamínica”, con síntomas similares a la esquizofrenia.

Disolvente: (Droga conocida como esnifar pegamento), este tipo de droga se encuentran en los pegamentos, disolventes para pinturas, laca para uñas, combustibles ligeros, que suele ser inhalado con un trapo húmedo o directamente del envase, que provoca una sensación similar a la de estar borracho, los efectos pasan normalmente después de media hora.

Riesgos: Este tipo de droga puede provocar el ahogamiento por la acción del disolvente, así como también causa insuficiencia cardíaca.

LSD: (Droga conocida como lentejas o tripis), este tipo de droga se presenta en pastillas pequeñas., es una droga alucinógena, los efectos duran doce horas aproximadamente, en el que puedes tener visiones, escuchar voces, sentir que el tiempo va lento.

Riesgo: Este tipo de droga puede ocasionar enfermedad mental a causa de las alucinaciones que no necesariamente tendrán que ser bonitas, dado que podría experimentar alucinaciones aterradoras.

Poseción Punible

Parafraseando al autor Prado. S. (2016, p. 148), quien señala; que la posesión de estupefacientes que son comercializados se encuentran implícitos en el art. 296° en su segundo párrafo, indicando que la hipótesis de la doctrina manejada en España es que en ese país no se criminaliza el consumo personal o la posesión de dichos estupefacientes cuando el fin de estos no está dirigido a su comercialización ilegal, por lo que la relevancia penal en la normatividad española de esta actividad, carece de tipificación ya que la droga que es usada con fines distintos a su consumo no puede ser perseguido como delito.

Asimismo, parafraseando a Jubert (2006, p. 92), tenemos que no se puede considerar como típico la posesión que es autorizada por la norma, ni la que autorizada a su vez la del consumo personal.

En tanto, de acuerdo con la postura del autor ha de entenderse que necesariamente para que la posesión deba ser sancionada necesariamente tiene que demostrarse que la misma tiene un fin de ser comercializada, por tanto, nos enfocamos no en el tipo de dos o más droga, sino de la cantidad de droga, sumado a ello las circunstancias en que fue intervenido, entre otros criterios que en base a prueba se apoya para el sustento de la acusación.

Así también el autor Prado S. (2016), cita al jurista Barbero S. (2001, p.20), quien señala:

Que, la fuente de donde nace el art. 296° de nuestro código penal es el art. 344 del código penal español el cual ya se encuentra derogado pero que observa la figura de este delito y la considera atípica dado que va ser usado para consumo propio siempre que no se comercialice. Esto en crítica al segundo párrafo del 299° de la ley peruana que se trata de buscar un sustento para tratar de justificar la postura de este segundo párrafo antes mencionado pues para colmo trata de excluir la atipicidad del consumo propio, para los que tengan en su poder dos o incluso una cantidad de drogas en mayor cantidad o de diferente tipo (p. 148).

Asimismo, parafraseando a Prado S. (2016), se señala que:

El supuesto delictivo que se ha comentado tiene que contener, para que se configure como tal, es suficiente que la persona tenga en su poder el estupefaciente, el tipo, calidad o cantidad no afecta su tipificación como tal (p. 148).

A su vez como el autor Peña C. (2009) señala que;

La posesión de droga no es punible cuando su único fin es la del consumo personal, y por el contrario, es punible cuando estas sustancias son distribuidas a otras personas por lo que en ambas situaciones resulta de suma importancia el tipo de valoración de la prueba que permita dilucidar la tenencia de dicha sustancia. Esto es pocas palabras, se tendrá que valorar con un conjunto de elementos de convicción para determinar el fin de estas sustancias. (p.86).

Imputación Objetiva

Villavicencio T. (2006, p.16) decía que la teoría de la imputación objetiva está dirigida a convertirse en una teoría general de la conducta típica dado que al autor de la acción se le atribuye todos los elementos del tipo penal objetivo.

Por su parte para Hurtado P. y Prado S. (2011, p. 18) considera que la importancia de la valoración de los elementos y su imputación penal es la que determinará la responsabilidad penal del autor del delito en base a la comprobación de que su conducta ha realizado un resultado típico.

Por tanto, en base a estas opiniones es que la imputación objetiva constituye los mecanismos necesarios para asegurar el respeto a las normas de conducta.

como decía Villa S. (2014, p. 18) “la imputación objetiva viene a satisfacer la insuficiencia del dato fáctico, elemento esencial de la teoría de la causalidad, con la implementación del dato “valorativo-jurídico”, el cual permite determinar si la relación causal tiene relevancia jurídica-penal para los fines del derecho penal”

Es decir que necesariamente tendrá que constituirse la verificación de que un comportamiento ha realizado un resultado típico lo que determinará la imputación objetiva.

Elemento de Tipicidad Subjetiva

El elemento de tipicidad subjetiva son aquellas conductas dolosas o culposas del sujeto, desde un ámbito interno para luego realizarla en el mundo externo, por intermedio de actos preparatorios y ejecutivos hasta llegar a la consumación del delito.

En tanto para Salinas S. (2010, p.12) sostiene que en la redacción del tipo penal refiere a un delito de comisión dolosa, no cabe la comisión imprudente, el delito por su naturaleza configurándose el dolo por el conocimiento que iniciada la acción del individuo está comprendido en pleno conocimiento de su desenlace delictivo, por ejemplo de la minoría de edad de la menor de edad y voluntariamente le practica el acceso carnal, en cambio el dolo eventual se presentará cuando se presenta la probabilidad de disponerse a realizar la comisión del delito.

Presunción de Inocencia

La presunción de inocencia para Puccio (2017, p.80) establece que;

La presunción de inocencia es un principio rector en materia penal que tiene sus fundamentos en la materia constitucional, y que parte de la premisa de que una acusación fiscal necesariamente requiere

el aporte de pruebas concluyentes sobre la realización de un delito y de la participación del acusado.

De acuerdo a esto, la sustentación de la persecución penal y la acción del fiscal deberá estar basada en legítimos y contundentes elementos de convicción que demuestren la ocurrencia del delito y la participación indubitable del delincuente.

Como bien señala Sánchez (2015, p.2) que a partir de las concepciones del tribunal constitucional (STC1934-2003-HC/TC), quien ha señalado; “que, por el Principio de Presunción de Inocencia, se obliga al órgano jurisdiccional a desarrollar una actividad probatoria suficiente, que desvirtúe el estado de inocencia del imputado” (p.1).

De aquí que establece una obligación estatal el no restringir la libertad del detenido muy aparte de los límites necesarios, para así asegurar que no se impedirá el desarrollo de las investigaciones, no obstante, la prisión preventiva es una medida cautelas, no punitiva.

Así también para la Corte Interamericana, este principio exige que; “una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena entiéndase prueba suficiente y pertinente) de su responsabilidad penal” (p.1), en tanto si obra prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.

Políticas de Estado

A lo largo del tiempo se han venido desarrollando diversas políticas criminales contra el Tráfico de Drogas.

En efecto el Dr. Prado S. (2016, p. 202) señala que los estados deban cumplir los siguientes parámetros para una mejor estrategia de política criminal.

- Enfocar el enigma de la droga desde un plano económico.
- Localizar y confiscar los capitales de aquellas organizaciones delincuenciales que impulsan el movimiento del narcotráfico.

- Controlar el tráfico y abastecimiento de sustancias que son precedentes para la elaboración de las drogas.
- La contribución judicial internacional de manera imprescindible para obtener efectividad del sistema penal contra este tipo de crimen organizado.
- Amplificar nuevas estrategias de pesquisa criminal.

Así también de acuerdo al reciente informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, encargada en Investigar la Influencia del narcotráfico en los partidos políticos, movimientos regionales y locales: “El Perú considerado un país productor en hojas de coca, su cultivo un máximo de seis cosechas al año, es una actividad con mayor rentabilidad frente a los cultivos alternativos; como el arroz, café, cacao, frutales, entre otros. Así los pagos garantizados de las cosechas, la ausencia de fiscalización, entre otros aspectos, ha terminado siendo aquello que necesitaban los narcotraficantes para seguir generando cada día más y más cosechas. Generando así que nuestro país se encuentre entre los países con mayor riesgo y vulnerabilidad ante estas personas o grupos criminales, como consecuencia de la proliferación de la elaboración y consumo de drogas en la sociedad, problemática que ha sido y es objeto de diversos estudios.

Si bien la situación respecto al Perú no ha sido modificada de modo relevante en el siglo XXI pues sus tres componentes: droga, tráfico ilícito y consumo indebido sigue marcando indicadores en crecimiento a pesar de los continuos planes y estrategias diseñados para su control y prevención e implementado cíclicamente el Estado Peruano, a través de los organismos especializados como DEVIDA. Sentado a esto las consecuencias que viene del denominado drogo problema en nuestro país a la actualidad continúa siendo alto y significativo en todos los aspectos para nuestro país, además que desde una perspectiva psicosocial se denota que la población parece haber asimilado ya que esta situación se torna irreversible.

Ahora bien, el artículo 296° de nuestro código nacional ha sido considerado para la jurisprudencia y sobre todo la doctrina nacional como el tipo base de la cual nace el tráfico ilícito de drogas,

ENACO

ENACO fue creado por medio del Decreto Ley 22370 el 05 de diciembre de 1978, la cual por sus siglas significa Empresa Nacional de la Coca S.A; Es un organismo público descentralizado, en la modalidad de sociedad anónima, así, es reconocida como única en el mundo, por ser la empresa única empresa autorizada en nuestro país que ha monopolizado el comercio de la hoja de coca, además tiene como objetivo hacer uso de manera lícita la hoja de coca como su industrialización, comercialización y/o producción de derivados originados de esta planta.

Funciones Principales de ENACO

- Poner en ejecución el comercio de la hoja de coca y sus derivados dentro de nuestro país.
- Poner en ejecución el comercio de la hoja de coca y sus derivados fuera de nuestro país.
- Industrializar el uso de la hoja de coca para beneficio medicinal y otros.

Principales Normas que regulan lo relacionado contra la Lucha del Narcotráfico:

Tratados Internacionales:

- A. Convención Única sobre Estupefacientes, del año 1961.
- B. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, del año 1971.
- C. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000.

Decisiones de la Comunidad Andina en Materia de Tráfico Ilícito de Drogas:

- A. Plan andino de cooperación para la lucha contra las drogas Ilícitas y delitos conexos.
- B. Norma andina para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Artículos de nuestro Código Penal que regulan el Tráfico Ilícito de Drogas:

A. Parte Especial

Contra la Seguridad Pública

Contra la Tranquilidad Pública

Contra la Administración de Justicia

Disposiciones Finales y Transitorias

Normas Procesales Penales emitidas por el Estado que regulan el Tráfico Ilícito de Drogas;

a. Código de Procedimientos Penales.

b. Código Procesal Penal.

c. Nuevo Código Procesal Penal.

Normas que Prohíben el Tráfico Ilícito de Drogas

A. Decreto Ley N°22096, “Ley de represión del tráfico ilícito de drogas”.

B. Decreto Ley N°22926, “Extenderán sanciones a los infractores de las normas de erradicación y sustitución de cultivos de coca”.

C. Decreto Legislativo N°122, “Ley sobre tráfico ilícito de drogas”.

D. Decreto Legislativo N°824, “Ley de lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas”.

E. Decreto Ley N°26600, “Ley que sustituye el vocablo narcotráfico por tráfico ilícito de drogas en diversas leyes y decretos legislativos”.

F. Decreto Ley N° 27634, Ley de modificación de los artículos 41 y 68 del Decreto Ley N° 22095 “Represión al Tráfico Ilícito de Drogas”.

Expedientes y Casos que resuelven casos concernientes a Microcomercialización.

1. Expediente 1456-2016, Callao de fecha 14 de setiembre, la cual resolvió:

No ha lugar Abrir Instrucción por el Delito de Salud Pública – Micro comercialización de drogas contra los denunciados, bajo el tercer fundamento que indica lo siguiente; en cuanto al delito de microcomercialización de drogas los resultados de análisis preliminares de análisis de drogas concluyeron que la droga incautada a los denunciados resultó ser cannabis sativa (marihuana) y pasta básica de cocaína, no solo con el hecho de habersele encontrado en posesión prueba que se dediquen a la microcomercialización, por lo tanto no se estaría dentro de una figura del 298° del código penal.

Como bien el presente es un reflejo de los casos que no llegan ni aperturarse en la etapa instructiva, por motivos de los que señala el mismo.

Del cual se ha podido apreciar que el delito tipificado en el art. 299°, segundo párrafo, del código materia de estudio, no se encuentra sentencia alguna en la provincia constitucional del Callao, dado que no se cumple con los elementos de convicción que sustenten que el delito ha sido cometido.

2. Caso N° 792-2016, de fecha 17 de enero del 2017, mediante la cual se dio cuenta:

El mismo que da cuenta, que, habiendo culminado la etapa de investigación Preliminar, referida a la imputación formulada contra 3 procesados por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas – Microcomercialización, al habersele intervenido a cada uno con dos tipos de droga dentro de los márgenes que el artículo 299° en su primer párrafo determina como no punibles y al no habersele encontrado suficientes elementos de prueba que demuestren que la droga se encontraba destinada al tráfico, resuelve: No haber mérito para ejercitar acción penal contra los tres denunciados.

Así para efectos de sustentar una denuncia penal no es suficiente basarse en meras suposiciones subjetivas, sino que para ello resulta necesario contar con elementos idóneos o elementos probatorios en la persona que demuestren su responsabilidad al delito que se le imputa.

3. Acuerdo Plenario N°03-2008/JC-116; Asunto: Correo de drogas, delito de TID y la circunstancia agravante del artículo 297°, 6 del Código Penal. Fecha 18 de julio del año 2008.

El Pleno en referencia a las Ejecutorias Supremas que meditan y resuelven la figura del comercio de estupefacientes que en nuestro país se ha materializado en los aeropuertos con el sobrenombre de “burriers”, en el tráfico ilícito de drogas, se analiza el tipo base, art. 296° y su agravante tipificada en el art. 297° del código materia de análisis.

Como bien el presente acuerdo analiza si la figura de los “burriers” calificaría en el tipo penal base o en la tipificación de su agravante que se encuentra comprendida en el artículo 297° inciso 6 del código penal, como bien las circunstancias agravadas comprende primero cuando se ha suscitado el delito cometiéndose por dos o más individuos y en segundo lugar cuando la acción se comete por individuo que forma parte de una organización dedicada al crimen organizado para el comercio de estupefacientes o sus derivados de manera ilícita.

En tanto el presente acuerdo del 2008, en palabras resumidas, indica lo siguiente:

La manera de determinar la punibilidad de la comercialización de los estupefacientes, es que se debe apreciar que la conducta propia sea con intención, esta conducta ha de ser dolosa y que la conducta misma, este incitando a su consumo ilegal, conforme a la agravante encontrada en el artículo 297, más aún debe haber un acuerdo de voluntades, lo cual determina que resulta absolutamente necesario que en dicho delito se encuentre a más de tres personas al momento de que se ejecute dicha acción dolosa de comercialización, entonces

se configuraría si hay más de tres personas y que se pueda acreditar con elementos de convicción suficientes, en tanto de ser así su conducta será subsumida en la agravante que encontramos, valga la redundancia, en el artículo 297 inciso 6.

En tanto el Pleno Jurisdiccional establece lo siguiente: “El “correo de drogas”, de acuerdo a los lineamientos expuesto es ajeno al inciso 6 del artículo 297° del código penal salvo que se demuestre el concierto de tres o más burriers”.

Legislación Comparada

Brasil

Sanciona penalmente la posesión para el consumo (Artículo 16 de la Ley N° 6368).

España

Sanciona penalmente la posesión o tenencia de drogas destinadas a la comercialización ilegal (Artículo 368 del Código Penal Español).

Venezuela

Desarrolla una reacción penal amplia que comprende tanto la posesión para el consumo propio como para el tráfico ilícito (Artículo 36° de la Ley Orgánica sobre sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

Argentina

Sanciona la posesión para el consumo con pena privativa de libertad (Artículo 14 de la Ley 23737).

Panamá

Sanciona al que posee para el consumo con pena privativa de libertad (Artículo 255 del Código Penal Panameño).

Guatemala

Sanciona la posesión para el consumo con pena privativa de libertad (Artículo 39 del Decreto 48-92 o Ley Contra la Narcoactividad).

Bolivia

Sanciona la posesión para el consumo de droga con medidas de seguridad (Artículo 49 de la Ley 1008).

Ecuador

Sanciona la posesión para el consumo de droga con medidas de seguridad (Artículo 105 de la Ley 108 introducido por R.O. 173-2S).

México

Dispone la no punibilidad de del que posee la droga para su consumo personal cuando la cantidad no exceda a la dosis personal (Artículo 195 del Código Penal Mexicano).

Uruguay

Dispone la no punibilidad de la posesión de droga para el consumo personal cuando la cantidad no exceda a la dosis personal (Artículo 31 del D.L. 14-294, modificado por la Ley 17-343 DEL 25-02-2001).

Chile

Dispone la no punibilidad de la posesión de droga para el consumo personal cuando la cantidad no exceda a la dosis personal (Artículo 14 y 8 de la Ley 20.000 del 02-02-2005).

Formulación del Problema

En el presente capítulo el proyecto de investigación tiene como fin, establecer el problema de investigación, así como los objetivos y la hipótesis; por ello, el problema de investigación, conforme lo señala Bono (2002, p.56):

[...]Es una situación sin una solución satisfactoria. Los problemas de investigación pueden surgir de diferentes maneras; de investigación

previas a las que se pretende dar continuidad y avance, la observación de la realidad circundante, los cambios tecnológicos, innovaciones educativas, revisión de literatura sobre un tema y/o la experiencia del investigador. Lo importante realmente es considerar la existencia de una situación susceptible de ser investigada con el fin de obtener una solución y una mejora respecto a la situación inicial.

Referido esto por el autor, se podría adelantar que el problema radica en la realidad y de la necesidad de una solución o de ser un estudio que contribuya al conocimiento del mismo.

En tanto a bordo de la formulación del problema de investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que es “estructurar formalmente la idea de investigación”.

De otro lado para Arias (2006, p.41), expone que la formulación del problema es:” La concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población”.

De acuerdo a este criterio, el problema de la presente investigación es:

Problema General

¿De qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana?

Problema Específico 1.-

¿De qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia?

Problema Específico 2.-

¿Cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

Justificación del estudio

Para Sánchez (2011, p. 30) la justificación es: “exponer las razones por las cuales se quiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido, debiéndose explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido”.

En mérito a ello, el presente trabajo se justifica en base a tres criterios:

Justificación Teórica: El presente trabajo tiene como fin a través de la aplicación de las teorías y los conceptos bases del delito de posesión, comercialización de drogas, tipos de drogas, eficacia en el proceso penal, etc.; encontrar explicaciones a la situación problemática que afecta a la eficacia del proceso.

Justificación Práctica: La investigación en la práctica busca establecer un soporte a los que estudian el derecho y que puedan ver en el presente trabajo una base de conocimiento y estudio que los llevará a profundizar más sobre los hechos investigados verificando si en la realidad están siendo afectados derechos y contraviniendo las normas que nuestra Constitución regula.

Justificación Metodológica: La justificación Metodológica hará uso de la investigación científica que se ciñe a los alcances de un estudio más elaborado de un tema. Así es que, se usarán instrumentos investigativos como las entrevistas realizados a Fiscales empapados en el tema y quienes realizan la practica la denuncia formalizada en la realidad, esto por la necesidad de saber cuál es su posición respecto a la norma y a lo constatado con los hechos que están sucediendo actualmente.

Objetivo

Los objetivos de acuerdo a Bernal (2000, p. 93) “Son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse y por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orienta a lograr estos objetivos”.

Objetivo General:

Determinar de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.

Objetivo Específico 1:

Establecer de qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Objetivo Específico 2:

Determinar, cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.

Supuesto Jurídico

En cuestión a la hipótesis, Pardinas (1974, p. 132) establece que: “La hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema”.

Para la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis general:

Supuesto Jurídico General. -

El delito de la posesión de dos o más tipos de droga se regula en la norma penal en el sentido que esta figura penal pase a contemplarse como parte de la micro comercialización.

Supuesto Jurídico Específico 1.-

La regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal peruano incide negativamente en el derecho de presunción de inocencia dado que la norma sanciona la tenencia del producto sin determinar efectivamente su condición de consumidor.

Supuesto Jurídico Específico 2.-

Los criterios que utiliza el Fiscal para calificar un caso son; la cantidad de droga, que el poseedor no sea adicto o consumidor habitual, que la droga este oculta y/o preparada para su distribución, las circunstancias en que fue intervenido.

II. MÉTODO

La Metodología de acuerdo a Giner (1972, p. 29) es “el estudio sistemático de los métodos utilizados por una ciencia en su investigación de la realidad”.

El presente trabajo se basa en un enfoque cualitativo, es por ello que para entender este enfoque se propone a Sandín (2003, p. 78):

[...] la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la forma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento.

Así también Del Rincón y Latorre (1992, p. 64), establecen algunas características de este enfoque como su dinamismo, comprensión, interpretación, etc.

De este modo como bien menciona el autor, estas características son las que diferencian a un enfoque de otro, el enfoque cualitativo del cuantitativo.

2.1 Tipo de Investigación

La investigación cualitativa entonces, comprende de un conjunto de investigaciones, todas ellas con características similares, aunque no con el mismo fin. De acuerdo a esta postura, Canales (2006, p. 53), nos dice que “Hay diferentes tipos de investigación, las cuales se clasifican según distintos criterios...”. Siendo que se establecen dos principales orientaciones en la investigación cualitativa y son:

La orienta a la comprensión, y la orienta al cambio y toma de decisiones

El presente trabajo estará orientada a la comprensión

Conforme a Hernández y Baptista (2010, p.37) quienes señalan que; “la investigación cualitativa orientada a la comprensión tiene como objetivo describir e interpretar la realidad social desde adentro”.

En tanto, el tipo de estudio orientado a la comprensión, se orienta a observar sin intención de generar un cambio o tomar alguna decisión aplicable en la realidad, netamente enfocado a comprender el fenómeno, de tal manera que

en este sentido se puede determinar que éste tipo será de ayuda para obtener los resultados que se esperan en el presente trabajo.

2.2 Diseño de investigación

En esta parte de la investigación, se propondrá la estructura del trabajo científico, la cual brinda dirección y sistematiza la investigación.

De acuerdo a Palella y Martins (2010, p. 85), “el diseño es el conjunto de estrategias procedimentales, metodológicas y técnicas, que regula la formulación del problema, darles respuestas y verificar las hipótesis, de acuerdo al tipo de investigación que se estudia”.

Así también de la investigación cualitativa según Polit y Hungler (2000, p. 78) “es probablemente el más flexible de todas las técnicas experimentales, ya que abarca una variedad de métodos y estructuras aceptadas”.

La información cualitativa no puede ser analizada matemáticamente de la misma manera integral como los resultados cuantitativos; sólo puede brindar una guía a las tendencias generales. Está mucho más abierta a la opinión y juicio personal, por lo que sólo podrá brindar observaciones en vez de resultados.

De esta manera se tiene que los tipos de diseño para una investigación cualitativa son: Biográfico, Fenomenológico, Teoría Fundamentada, Etnográfico, Estudio de casos e investigación acción.

En la presente investigación, se utilizará la Teoría Fundamentada; dado que está orientado a investigar las circunstancias tal como están identificando el problema, formulando el supuesto y concluyendo en los aspectos corroborados y recolectados.

2.3 Caracterización de sujetos

Los partícipes de la presente investigación que es materia de desarrollo, son los fiscales del Ministerio Público del Callao, quienes son los facultados aplicar la norma jurídica para formular acusación.

Nombres y Apellidos	Sexo	Cargo	Lugar donde labora
Carlos Alberto Anglas Lostaunau	M	Fiscal Provincial Titular	Ministerio Público
Giovanna Ríos Candio	F	Fiscal Adjunta Provincial	Ministerio Público
Paola Lizbeth Velarde Flores	F	Fiscal Adjunta Provincial	Ministerio Público

(Autoría propia)

2.4 Población y Muestra

Esta se realizará en la provincia constitucional del Callao, teniendo en cuenta que se analizará respecto a los casos donde se ha versado el problema, en tanto que han sido localizados de esta manera y delimitados a fin de ser punto de partida para el estudio y elaboración del presente.

2.5 Técnicas e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad

En el presente trabajo se utilizaron tres técnicas con sus respectivos instrumentos que son:

Como Técnicas:

Técnica 1: Entrevista

Técnica 2: Análisis Legislativa

Técnica 3: Análisis de documentos

Como Instrumentos:

Instrumento 1: Guía de Entrevista

Instrumento 2: Guía de Análisis Legislativa

Instrumento 3: Guía de Análisis Documental

Como se sabe, los requisitos que debe reunir todo instrumento de medición son la validez, confiabilidad y objetividad.

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo cumplen el criterio de validez dado que al utilizarlos se ha obtenido los resultados esperados, así también con el criterio de confiabilidad dado que han conducido a resultados consistentes y por último los instrumentos son objetivos ya que cumplen con el requisito de confiabilidad dado que está basado netamente a los resultados que se evacúen de la investigación formulando una teoría consecuencia de la propia realidad.

2.6 Método de análisis de datos

Para analizar los datos que se obtendrán de la presente investigación, resulta necesario contar con métodos de análisis que permita dar respuesta a nuestro objetivo.

Entre los métodos existentes en una investigación se encuentra los métodos inductivos, deductivo, de los cuales según Pérez y Merino (2008), “forman parte del método científico, siendo que, en el caso del primero, se obtiene conclusiones generales en base a premisas particulares, y en el caso del segundo de los mencionados se obtiene conclusiones particulares en base a lo general”, en la presente tesis se ha utilizado el método inductivo – exegético Interpretativo.

2.7 Tratamiento de la Información: unidades temáticas, categorización

De acuerdo a Murdock (1994, p.43), “La categorización consiste en la extracción de elementos similares desde la percepción del investigador, con el fin de propiciar una importante simplificación y entender mejor los resultados”, siendo por ello que en la presente investigación luego de utilizar los instrumentos se ha determinado las categorías y sub categorías que apoyaran a comprender el fenómeno estudiado.

Categoría 1	DELITO DE POSESIÓN
Subcategorías	Por el daño causado, Por la acción, Por la ejecución, Por la calidad del sujeto, Por la consecuencia de la acción
Categoría 2	TIPOS DE DROGAS
Subcategorías	Cannabis Satiba, Éxtasis, Heroína, Cocaína, Anfetaminas, LSD

(Autoría propia)

Aspectos éticos

El presente trabajo se ha realizado conforme a criterios éticos y respetando los parámetros determinado por la ley y las buenas costumbres, es así que la presente tesis es resultado de una investigación fidedigna, en procura del cumplimiento a los establecido por las reglas APA para la redacción y estructura de la misma, además guarda estricto respecto por el Derecho de Propiedad y las normas de derecho público en concordancia a la propiedad intelectual y derecho de autor, ha sido revisada por un asesor de la línea de investigación y por un asesor metodológico, además de haber pasado por filtros anti plagios como el Turnitin y ha contado con el consentimiento de los entrevistado.

III. RESULTADOS

Descripción de los resultados

Los resultados de la presente investigación, se ordenaron de la siguiente manera: primero con los hallazgos obtenidos mediante la técnica de análisis de documentos, como segundo, los hallazgos obtenidos mediante la técnica de entrevista. En ambos casos, se ha propuesto el vaciado de resultados de acuerdo al orden establecido en la presente investigación conforme a los objetivos del estudio.

Presentación de resultados:

Técnica Análisis de documental

Para iniciar a explicar los resultados; primero se tendrá en cuenta nuestro **objetivo general**; el cual busca determinar de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.

A efectos de sustentar esta parte de los resultados es pertinente citar el Expediente 1456-2016, la cual resolvió:

No ha lugar Abrir Instrucción por el Delito de Salud Pública – Micro comercialización de drogas contra los denunciados, bajo el tercer fundamento que indica lo siguiente; en cuanto al delito de microcomercialización de drogas los resultados de análisis preliminares de análisis de drogas concluyeron que la droga incautada a los denunciados resultó ser cannabis sativa (marihuana) y pasta básica de cocaína, no solo con el hecho de habersele encontrado en posesión prueba que se dediquen a la microcomercialización, por lo tanto no se estaría dentro de una figura del 298° del código penal.

Como bien el presente es un reflejo de los casos que no llegan ni aperturarse en la etapa instructiva, por motivos de los que señala el mismo.

Del cual se ha podido observar que bajo el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal no hay sentencia alguna en la provincia constitucional del Callao, dado que no se cumple con Los elementos de convicción suficiente que demuestren la materialidad del delito.

Por otro lado, la investigación ha utilizado la presente técnica con el fin de obtener una respuesta al **objetivo específico 1**, el cual busca establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal incide en el derecho de presunción de inocencia.

De los casos analizados se tiene que el fiscal al momento de calificar una denuncia, realiza una evaluación de la cantidad de droga, así como de las circunstancias que rodean a la intervención de la persona que la poseía, las drogas halladas en su poder que puedan evidenciar que dicha sustancia estaba o no destinada al tráfico.

Por último, para determinar el **objetivo específico 2**, es necesario determinar, cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.

Del análisis de los casos, se ha podido observar que el juzgador no solo basta ver que al inculpado se le haya encontrado en posesión de dos o más tipos de droga, sino que se pueda demostrar que dicha sustancia está destinada al tráfico.

Por lo que resulta necesario citar el siguiente caso que refleja bajos los criterios que el fiscal debe tener en cuenta y que resulta complejo recabar pruebas ante una circunstancia como la describe el artículo 299° y que en la mayoría de casos que se presenten el fiscal termina archivando como se puede observar en el siguiente caso:

Con Ingreso N° 792-2016, de fecha¹⁷ de enero del 2017, da cuenta, que, habiendo culminado la etapa de investigación Preliminar, referida a la imputación formulada contra 3 procesados por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas – Microcomercialización, al

habérsele intervenido a cada uno con dos tipos de droga dentro de los márgenes que el artículo 299° en su primer párrafo determina como no punibles y al no habérsele encontrado suficientes elementos de prueba que demuestren que la droga se encontraba destinada al tráfico, resuelve: No haber mérito para ejercitar acción penal contra los tres denunciados.

Así para efectos de sustentar una denuncia penal no es suficiente basarse en meras suposiciones subjetivas, sino que para ello resulta necesario contar con elementos idóneos o elementos probatorios en la persona que demuestren su responsabilidad al delito que se le imputa.

Por tanto, concluyo que en los casos vistos en la dependencia del distrito judicial del Callao, se ha podido observar que los casos ingresados a las fiscalías no cumplen con los suficientes elementos para que el fiscal pueda apoyar en formalizar una denuncia, por lo que en la mayoría de casos terminan siendo archivados o bien muchos de ellos llegan a la etapa instructiva en el que resuelven no ha lugar.

Técnica Análisis de Legislativa:

Para iniciar a exponer los resultados, primero se tendrá en cuenta el **Objetivo General, el cual busca determinar de quemanera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.**

Para el autor **Cosco** (2013), en su investigación titulada “La Dosis mínima en el consumo de Drogas”, con motivo de obtener el grado de Doctor en Derecho Penal, en el año 2013, en la ciudad de Lima – Perú, nos dice acerca de la dosis mínima concluye que:

[...] La Dosis personal tal como está regulado en el artículo 299° del Código Penal es una puerta abierta para el tráfico ilícito de drogas, toda vez que su aplicación no está limitada a adictos, sino que puede ser invocado incluso por micro comercializadores (p. 128).

Comentario

El autor comenta entonces respecto de la dosis personal conforme lo regulado en el artículo 299° del Código Penal penaliza al poseedor que es encontrado con drogas mayores a lo establecido en el párrafo precedente, pero que, por sus condiciones personales de adicción respecto a la droga, necesita la cantidad que tenía en posesión.

En tanto coincido con el autor en el sentido que resulta necesario las cantidades objetivas especificadas en la norma, que permite hacer una distinción entre la posesión para el consumo y la posesión para la comercialización.

Para el autor Torres (2014), en su investigación titulada “El sistema internacional de regulación de drogas: las políticas antinarcóticos en Colombia”, con motivo de optar por el grado de doctor en ciencias políticas y sociología, en el año 2014, en la ciudad de Madrid – España, habla acerca de que las políticas antidrogas tiene como fin erradicar el consumo y comercialización de las drogas y por tanto debe formar parte importante en las agendas políticas de las instituciones internacionales, concluyendo que:

[...]Tanto en el consumo de drogas ilegales como en su producción, existe una enorme brecha entre ley, moralidad y cultura. Aunque exista legislación que prohíba el consumo de drogas, puede haber normas sociales y morales que lo acepten, igualmente ocurre con la producción y venta. Las leyes que prohíben el consumo de drogas no han resultado efectivas porque están alejadas de las normas morales y culturales de la población que consume sustancias psicotrópicas. El intento por modificar los comportamientos y reglas sociales que incentivan el consumo a través de la prohibición ha sido fallido.(p. 322)

Comentario

El autor comenta acerca de que el consumo de drogas de acuerdo a la moralidad y cultura de cada país no resulta efectivo si se penaliza, dado que para cada país tienen culturas diferentes donde el consumo de ciertos estupefacientes es lo más normal.

Por tanto, concuerdo con el autor en el sentido que, si bien la penalización del consumo de droga depende mucho de la cultura de cada país, la tasa de riesgo con respecto al control del consumo de la droga.

Para León (2005), en su investigación titulada “Entre la Interdicción y el desarrollo alternativo, el problema de las drogas ilícitas desde una perspectiva internacional”, con motivo de optar por el título de grado en ciencias políticas, en el año 2005, en la ciudad de Bogotá - Colombia, habla acerca de los efectos negativos que trae la inestabilidad gubernamental que se ve reflejada en los conflictos políticos, concluyendo que:

[...]En contraste con los nefastos efectos observados por la implementación de la estratégica de interdicción, se advierte que por su alto contenido social y sus buenos resultados, el componente de Desarrollo Alternativo se perfila, en cambio, como la estrategia más idónea para ser implementada en Bolivia, de preferencia sin la parte de interdicción y dejando de constituirse en un simple programa de apaciguamiento social que contiene ineficientemente los efectos negativos producto de la interdicción. (p. 60).

Comentario

El autor comenta acerca de su política de interdicción en Bolivia por mandato norteamericano no resulta útil para combatir la guerra contra las drogas, en tanto mientras se insista con invertir ello se continuará desmoronando la paz social.

Si bien el plan de lucha contra las drogas resultaría efectivo si se tomara desde una perspectiva internacional, teniendo relación directa con el contexto endógeno.

Objetivo específico 1

Establecer de qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

El autor Prado S. (2016), cita al jurista Barbero S. (2001, p.20), destacaba que la fórmula que contenía el artículo 344 del Código Español derogado, fuente legal del artículo 296° del Código Penal Peruano, hace atípica, no solo la posesión de droga en una cantidad equivalente a una dosis personal, sino, también, la posesión de droga en cantidades ingentes, siempre, que aquella no esté destinada al tráfico ilícito.

Ello demuestra lo absurdo e innecesario de la previsión del artículo 299 del texto legal nacional, cuya versión actual reitera el error dogmático de regular una causa de justificación para un comportamiento de posesión para consumo atípico, llegando, incluso, a excluir de sus alcances a quien posea dos o más tipos de drogas. Lamentablemente, ni la Ley N° 28002, ni el Decreto Legislativo N° 982 asimilaron la recomendación técnica que hizo la Comisión de Expertos de 2001 y que propuso suprimir el texto del artículo 299°.

Comentario

El autor comenta partiendo como tipo base del artículo 296° del código penal que, si bien el mismo determina que solo será sancionada la posesión de droga destinada al tráfico, aclarando así que el texto legal descrito en el artículo 299° del Código Penal resulta atípico.

Concuerdo con el autor en toda su postura dado que resulta innecesario el artículo 299° en su segundo párrafo cuando no cuenda con la finalidad del tipo base de la norma por los delitos contra el tráfico Ilícito de drogas y que resultaría negativamente en el derecho de presunción de inocencia sancionando a un sujeto sin determinar su condición de consumidor.

Para el autor Narváez C. (2010) titulada “Revisión y análisis de criterios judiciales aplicados en la interpretación de la expresión pequeñas cantidades del artículo 4° de la ley 20.000 en la región de Coquimbo entre los años 2005 y 2009”, con motivo de obtener el grado de Magister en Derecho penal concluye lo siguiente:

Entendemos que el sistema de establecer por la ley las cantidades mínimas o máximas que regulen el concepto pequeña cantidad del delito, como ocurre en

algunas legislaciones comparadas no aparece como una solución político criminal justa y equitativa, pues importa entregar al juez un elemento rígido o abstracto que le impediría o le dificultaría valorar ciertas circunstancias del hecho, especialmente cuando la sustancia está destinada a un tratamiento médico o a su uso o consumo personal. Por lo tanto, este sistema excluye toda labor de apreciación judicial, reduciendo el asunto a una mera verificación matemática de cumplimiento del límite impuesto, llevando necesariamente a 110 la imposición mecánica de la pena y perdiendo de vista la “proporcionalidad” que se busca con la introducción de esta modalidad del tráfico ilícito de drogas.

Comentario

El autor comenta partiendo como tipo base del artículo 296° del código penal que, si bien el mismo determina que solo será sancionada la posesión de droga destinada al tráfico, aclarando así que el texto legal descrito en el artículo 299° del Código Penal resulta atípico.

Concuerdo con el autor en el sentido que no resulta útil la aplicación del artículo 299° del Código Penal dado que no concuerda con la finalidad del tipo base descrita en el 296 ° que sanciona la posesión destinada al tráfico ilícito de drogas.

Objetivo Específico 2

Determinar, cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.

El autor Peña C. (2009, p. 86) que la tenencia de droga resulta impune cuando está destinada únicamente al autoconsumo y delictiva cuando, al contrario, se preordena a fines de distribución de la sustancia a otras personas, determinar cuál de esas dos intenciones animaba en cada caso al poseedor de la droga va a resultar crucial en múltiples Procesos penales, en los que se encuentra probada la tenencia de la sustancia, pero sin acreditación directa de ningún acto de tráfico de la misma. Ha de realizarse entonces una valoración judicial

del conjunto de pruebas disponibles para inferir el destino final de la droga poseída.

Comentario

El autor comenta acerca de la tenencia, la misma que será impune cuando esta tiene como fin el consumo propio y delictivo cuando tenga como fin el tráfico ilícito de droga.

Concuerdo con el autor de precisar que la posesión para el consumo propio será impune de acuerdo a nuestra normativa y la posesión para el tráfico será sancionada, por tanto, no habría que desvirtuar una figura de consumo propio pretendiéndola encajar como punible.

Técnica de Análisis de Entrevista:

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el mes de junio del presente año, al Fiscal Provincial Titular, Fiscal Adjunto Superior, Fiscal Adjunta Superior, Fiscal Adjunta Provincial del Ministerio Público del distrito Judicial del Callao; se ha podido obtener los siguientes resultados:

Para comprender el caso, corresponde exponer los resultados concernientes al **objetivo general**, para lo cual se debe determinar de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.

En palabras del entrevistado Anglas (2017):

La posesión de dos o más tipos de droga no es punible salvo que sea posesión para tráfico, en cuyo caso resulta irrelevante que sean varios tipos de droga, además de considerar que dicha regulación contenida en el segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal no reduce, ni controla el consumo y que su expulsión no generaría consecuencia alguna.

Así mismo la entrevistada Giovanna (2017), sostiene que:

la punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga no cumple su eficacia, dado que la sanción de posesión no está dada a la cantidad

de dos o más tipos de droga sino deberá establecerse que la misma este destinada al tráfico.

Así por su lado la entrevistada Paola (2017), no concuerda con las anteriores sosteniendo lo siguiente:

El artículo 299° si cumple su eficacia, sin embargo, se debe tener en consideración la circunstancia del agente, es decir si está presente un certificado de tratamiento de drogodependiente que demuestre si condición no podrá configurar el delito, de esta manera considera de dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes por un lado la impunidad de autolesión y por otro lado el castigo del poseedor de droga.

De esta manera para comprender el **Objetivo Específico 1**, se determinará de qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

En palabras del entrevistado Anglas (2017), sostiene que:

de la interpretación del artículo 299° del Código Penal, determina que el consumo de droga no es punible en el Perú, por tanto, ha de considerar que en el artículo en mención no hay un tipo penal.

Así mismo la entrevistada Rios (2017), sostiene que:

El artículo 299° del Código Penal hace referencia a que el consumo personal sería evidenciado de la pequeña cantidad de una sola sustancia encontrada en poder de una persona, siempre que no existan sustancias circundantes que permitan ver que aquella iba ser traficada.

Por su lado la entrevistada Paola (2017), no concuerda con las anteriores sosteniendo:

Aquella cantidad de droga que diariamente puede ingerir una persona por cualquier vía, si la posesión excede de dichas dosis

genera una duda respecto al destino (consumo o tráfico), la dosis tiene que ser para el propio e inmediato consumo.

Así para comprender el **Objetivo Específico 2**, se determinará cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.

En palabras del entrevistado Anglas (2017):“...No existe un delito de la posesión de dos o más tipos de droga, el artículo 299° del Código Penal no sirve para Sentenciar a nadie...”

Así mismo la entrevistada Rios (2017), sostiene que:

se realiza una evaluación de la cantidad de droga, así como de las circunstancias que rodean a la intervención de la persona que la posee y otras cosas halladas en su poder que puedan evidenciar que dicha sustancia estaba o no destinada a ser traficada.

Por su lado la entrevistada Paola (2017), no concuerda con las anteriores sosteniendo:

El peso – pureza y aprehensión de la droga, se tiene que analizar si nos encontramos ante una tenencia de droga para el consumo o ante un tráfico de droga y establecer el grado de afección y puesta en peligro de los bienes jurídicos.

IV. DISCUSIÓN

A continuación, lo que se ha realizado por medio de los métodos de análisis de datos es discutir con los trabajos previos a esta investigación, así como se ha analizado con todos los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de datos utilizados como las guías de entrevistas, por último, se ha discutido desde mi posición personal para lograr demostrar que se han alcanzado los objetivos trazados en esta tesis.

Objetivo General

Establecer de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.

En el trabajo previo de Cosco (2013), en su investigación titulada “La Dosis mínima en el consumo de Drogas”, indica respecto de la dosis personal conforme lo regulado en el artículo 299° del Código Penal, el mismo que penaliza al poseedor que es encontrado con drogas mayores a lo establecido en el párrafo precedente, pero que, por sus condiciones personales de adicción respecto a la droga, necesita la cantidad que tenía en posesión. Resulta, considerando necesario que, de acuerdo a las cantidades objetivas especificadas en la norma, permita hacer una distinción entre la posesión para el consumo y la posesión para la comercialización.

De los expertos entrevistados quienes manejan el tema:

Los Fiscales Anglas y Giovanna (2017) sostienen que la posesión de dos o más tipos de droga no es punible salvo que sea posesión para tráfico, en cuyo caso resulta irrelevante que sean varios tipos de droga, además de considerar que dicha regulación contenida en el segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal no reduce, ni controla el consumo y que su expulsión no generaría consecuencia alguna, considerando así que la sanción de posesión no está dada a la cantidad de dos o más tipos de droga sino deberá establecerse que la misma este destinada al tráfico.

Caso distinto indica la Fiscal Paola (2017), quien sostiene que el artículo 299° si cumple su eficacia, sin embargo, se debe tener en consideración la circunstancia del agente, es decir si está presente un certificado de tratamiento

de drogodependiente que demuestre su condición no podrá configurar el delito, de esta manera considera de dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes por un lado la impunidad de autolesión y por otro lado el castigo del poseedor de droga.

Se estima conveniente recoger lo siguiente:

Expediente 1456-2016, la cual resolvió: No ha lugar Abrir Instrucción por el Delito de Salud Pública – Micro comercialización de drogas contra los denunciados, bajo el tercer fundamento que indica lo siguiente; en cuanto al delito de microcomercialización de drogas los resultados de análisis preliminares de análisis de drogas concluyeron que la droga incautada a los denunciados resultó ser cannabis sativa (marihuana) y pasta básica de cocaína, no solo con el hecho de habersele encontrado en posesión prueba que se dediquen a la microcomercialización, por lo tanto no se estaría dentro de una figura del 298° del código penal.

Primero quiero hacer mención que coincido con los primeros entrevistados quien consideran que el segundo párrafo del artículo 299° del código Penal resulta inaplicable dado que no apoyaría de manera suficiente una acusación, en tanto el artículo 298° del código Penal se aplica cuando la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada o poseída por el agente no sobre pase los márgenes que indica el mismo artículo, como bien es una infracción penal de peligro abstracto, en el que el delito se perfecciona con la mera posesión de la droga con fines de comercialización, resultando indiferente si la comercialización de la sustancia incautada se concreta o no, e incluso independientemente si se te encuentra con dos o más tipos de drogas, si son cantidades mínimas dentro del márgenes del artículo 299°, se tendrá que demostrar que las mismas tenían como fin la comercialización.

Objetivo Específico 1°:

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Por su parte el autor Prado S. (2016), cita al jurista Barbero S. (2001, p.20), quien destacaba, además, que la fórmula que contenía el artículo 344 del Código Español derogado, fuente legal del artículo 296° del Código Penal Peruano, hace atípica, no solo la posesión de droga en una cantidad equivalente a una dosis personal, sino, también, la posesión de droga en cantidades ingentes, siempre, que aquella no esté destinada al tráfico ilícito.

Ello demuestra lo absurdo e innecesario de la previsión del artículo 299° del texto legal nacional, cuya versión actual reitera el error dogmático de regular una causa de justificación para un comportamiento de posesión para consumo atípico, llegando, incluso, a excluir de sus alcances a quien posea dos o más tipos de drogas.

El supuesto delictivo que se ha comentado ha sido diseñado como una estructura de peligro abstracto. Es decir, para su consumación solo se requiere que el agente materialice, de cualquier modo, la tenencia o posesión de la droga fiscalizada. La clase o la cantidad de la droga poseída no afecta la tipicidad del acto. Sin embargo, si esta última es escasa o pequeña se configura una circunstancia atenuante, en la medida en que se cumplan los demás requisitos cuantitativos y cualitativos que precisa el artículo 298° del Código Penal.

De los expertos entrevistados se tiene que:

Los Fiscales Anglas y Ríos (2017), sostiene que: de la interpretación del artículo 299° del Código Penal, determina que el consumo de droga no es punible en el Perú, por tanto, ha de considerar que en el artículo en mención no hay un tipo penal. En tanto el artículo 299° del Código Penal hace referencia a que el consumo personal sería evidenciado de la pequeña cantidad de una sola

sustancia encontrada en poder de una persona, siempre que no existan sustancias circundantes que permitan ver que aquella iba ser traficada.

Caso distinto opina la Fiscal Paola (2017), quien no concuerda con las anteriores sosteniendo: que aquella cantidad de droga que diariamente puede ingerir una persona por cualquier vía, si la posesión excede de dichas dosis genera una duda respecto al destino (consumo o tráfico), la dosis tiene que ser para el propio e inmediato consumo.

En tanto concuerdo con los dos primeros entrevistados en el sentido que la posesión de droga será sancionada solo cuando se evidencie que su posesión tiene como destino el tráfico de droga, lo cual resulta complejo en demostrar si ya por el hecho de verse que son cantidades mínimas, el procesado podría declarar que es para su consumo propio y no demostrar con documentos que esté llevando algún tratamiento médico, lo que podría imputársele el delito sin embargo al no poder recabar más pruebas este caso simplemente caería en el proceso. Lo que demuestra que este artículo pretende sancionar la tenencia de la droga sin determinar efectivamente su condición de consumidor.

Objetivo Específico 2

Determinar cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.

Si bien el autor Peña C. (2009, p. 86) señala acerca de la tenencia, la misma que será impune cuando esta tiene como fin el consumo propio y delictiva cuando tenga como fin el tráfico ilícito de droga, en tanto concuerdo con el autor de precisar que la posesión para el consumo propio será impune de acuerdo a nuestra normativa y la posesión para el tráfico será sancionada, por tanto, no habría que desvirtuar una figura de consumo propio pretendiéndola encajar como punible.

Por otro lado los Fiscales Anglas y Rios(2017) consideran que no existe un delito de la posesión de dos o más tipos de droga, el artículo 299° del Código Penal, pues no le es de utilidad para ellos como representantes del Ministerio

Publico, dado que toman ciertos criterios como la evaluación de la cantidad de droga, las circunstancias que rodean a la intervención de la persona que la posee y otras cosas halladas en su poder que puedan evidenciar que dicha sustancia estaba o no destinada a ser traficada.

Así mismo la Fiscal Paola (2017), opina que el peso y pureza y aprehensión de la droga, se tiene que analizar si nos encontramos ante una tenencia de droga para el consumo o ante un tráfico de droga y establecer el grado de afección y puesta en peligro de los bienes jurídicos

Considerando los criterios que los fiscales utilizan para calificar un caso, los mismo que apoyaran la acusación al momento de sustentarla, de manera que de no tenerse en cuenta ciertos criterios el caso carecería de apoyo jurídico.

Como bien para efectos de sustentar una denuncia penal no es suficiente basarse en meras suposiciones subjetivas, sino que para ello resulta necesario o imprescindible contar con elementos idóneos que infieran indicios o elementos probatorios de responsabilidad en la persona que se va denunciar, por tanto considero necesario que las imputaciones de los denunciante sean corroboradas con pruebas objetivas suficientes que lleven a la convicción que efectivamente se han realizado los hechos que se denuncian, y a efectos de determinar la comisión de un ilícito penal, es necesario que las imputaciones de la denunciante sean corroboradas con indicios de criminalidad suficientes que lleven a la convicción que efectivamente se habrían realizado los hechos que se denuncian.

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo investigado y de lo expuesto en la presente tesis, se ha logrado alcanzar los objetivos planteados dando como resultado los supuestos jurídicos esperados, por lo que se concluye lo siguiente:

Primero.

Se determinó que la regulación del delito de posesión de dos o más tipos de drogas en la ley penal peruana resulta atípica en el sentido que aquella no esté destinada al tráfico ilícito de drogas por el hecho de solo encontrársele en posesión de dos o más tipos de droga.

Segundo.

Se estableció que la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia en el sentido que la norma pretende sancionar al sujeto que posee la droga sin determinar efectivamente su condición de consumidor.

Tercero.

Se determinó que los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso concreto de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal, resulta imprescindible para sustentar una acusación, en tanto entre las principales están; cantidad de droga, que el poseedor no sea adicto o consumidor habitual, que la droga este oculta y/o preparada para su distribución, las circunstancias en que el sujeto fue intervenido, la pureza de la droga, la posesión de importantes sumas de dinero, entre otros que demuestren el destino de esa droga.

VII. RECOMENDACIONES

Primero.

Que el congreso de la república, mediante una ley o el ejecutivo mediante un decreto legislativo modifique el segundo párrafo del artículo 299 del código penal en el sentido que no debe excluirse de los alcances de lo establecido en el primer párrafo del mismo artículo en relación a la posesión de dos o más tipos de drogas, es decir que no debe ser considerado delito cuando a una persona se le interviene teniendo la posesión de dos o más tipos de drogas, siempre y cuando no superen el peso establecido por el primer párrafo para cada tipo de droga.

Segundo.

Que, mediante un acuerdo plenario emitido por los jueces supremos en lo penal, se establezca el criterio que, para determinar la posesión de droga como delito, el fiscal al emitir la disposición de apertura de la investigación preliminar debe verificar que haya fundadas sospechas que existe dolo para comercializar o distribuir la droga.

Tercero.

Que, mediante un acuerdo plenario emitido por los jueces supremos en lo penal, se establezca el criterio que el fiscal dentro de las 48 horas de la detención de un imputado en plena flagrancia del delito de posesión de drogas, cumpla con ordenar la práctica exhaustiva del examen toxicológico del procesado, como también la realización de otras diligencias con el objeto de verificar si es o no consumidor.

VIII. REFERENCIAS

7.1 Fuentes Primarias:

7.1.1 Entrevistas;

Dr. Carlos Alberto Anglas Lostanau, Fiscal Provincial Titular del Ministerio Público del Callao.

Dra. Giovanna Ríos Candio, Fiscal Adjunta Provincial del Ministerio Público del Callao.

Dra. Paola Lizbeth Velarde Flores, Fiscal Adjunta Provincial del Ministerio Público del Callao.

Fuentes Secundarias:

Argimon, J. y Jiménez, J. (2000). *Métodos de investigación clínica y epidemiológica* (2° ed.). Madrid: Harcourt.

Arias, F., G. (1999). *El Proyecto de Investigación*. (3° ed.) Caracas: Episteme

Arias, M. y Giraldo, C. (diciembre, 2011). El rigor científico en la investigación cualitativa. *InvestEducEnferm*, 29(3): 500-514.

Arnal J., Del Rincón D., y Latorre A. (1992). *Investigación educativa: fundamentos y metodologías*. (2.° ed.). Madrid: Labor.

Balestrini, M. (2001) *Cómo se elabora el proyecto de investigación*. (5° ed.). Caracas: Consultores Asociados BL.

Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación*. (3° ed.) Bogotá: Prentice Hall.

Bono, L, M. (2002). *Normas para la elaboración de tesinas y tesis de grado en Ciencias Penales*. (1° ed.). México, D.F.: Taller abierto.

Calderón, S. y Bono L. (2003). *Manual para la elaboración de Tesis*. (2° ed.). México, D.F.: Talles abierto

Canales, C., M. (2006). *Metodologías de Investigación Social*. (1° ed.) Santiago de Chile: Lom.

Domingo, R., A. (2008). *La práctica reflexiva en la formación inicial de maestros* (Tesis de Doctorado). Recuperada de http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/93/Tesis_Angels_Domingo.pdf;jsessionid=34562E6C0CBE37B8F215303.tdx1?sequence=1

Galeano M. (2004), *Diseño de proyectos de la investigación cualitativa*.

Heidegger, M. (2006). *Introducción a la fenomenología*. (2° ed.) México: Fondo de Cultura Económica.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5° ed.). México: Mc Graw Hill

Hernández, S., R. (2007). *Metodología de la Investigación*. (4.° ed.). México: Mac Graw Hill.

Jaramillo, Ramírez, Darío (2006), *Método y conocimiento: Metodología de la investigación*. De: <https://books.google.com.pe/books?isbn=9588281113>

Urbano, Ariel, (2014), *Técnicas para investigar: Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*. <https://books.google.com.pe/books?isbn=9875910201>

Sánchez, (2011), *Metodología de la investigación científica y tecnológica*.

Tamayo, (2002), *Metodología formal de la investigación científica*.

Exp.N°90-91-Lima, de 12-08-1992. Sala Penal: Texto completo: Frisancho, JPenal.

Exp. °2161-2009, 1 Sala Penal del Callao.

www.contralinea.com- *El Imperio de la Droga*- Jorge Torres.

Fuentes Normativas:

Código Penal

Código Procesal Penal

Código Penal de España

Código de Procedimiento Penal de Colombia

Fuentes Jurisprudencial:

Alexy, “*Teoría de los derechos fundamentales*”, 2da ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pág. 13.

Binder M. (2010), *Introducción al Derecho Procesal Penal*, (primera edición) Lima –, Cita p. 207.

Busto R., (1989), *La Imputación Objetiva* (Temis), Bogota.

Balladares A., (2010), *El delito de Tráfico Ilícito de Drogas*, (Idemsa). Lima.

Caro, J. (2016). *Posesión no punible. Summa Penal* (1, pp. 533). Lima: Editorial Nomos &Thesis EIRL.

Caro, J., Huamán Castellares, D. (2014). *Sistema Penal en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional* [Versión de Editores del Centro E.I.R.L.]. Recuperado de ISBN 978-612-46781-0-3.

Caro J. (2016). *Summa Penal*, Jurisprudencia Vinculante, ISBN 978-612-45486-7-3.

Cabrera F., A. (2010). *Derecho Penal Parte Especial*. Recuperado ISBN 978-612-4037-12-2.

Elky V. P. (2015), *La Prueba en el Proceso Penal* (Primera edición), Lima – Perú (p. 28, 29 30).

Felipe V. T. (Grijley) *Derecho Penal Parte General*, Lima 2006, pp.321.

Gunther J. (Primera edición) *Imputación Objetiva en el Derecho Penal*, España – Madrid, ISBN 84-470-0658-1.

García D., (2009), Tráfico Ilícito de Drogas. *Derecho Penal Parte Especial II*, (Ediciones Legales), San Marcos. Lima.

Jaime C. V. (2013), *Los Derechos del imputado y la tutela de derechos en el nuevo Código Procesal Penal* (primera edición), pp.17-20. Lima 18 – Perú.

Muñoz C., (1981), *Derecho Penal Parte Especial*, (8tava Edición). Valencia.

Ministerio Público, (2009), *Normativa Peruana en Materia de Tráfico Ilícito de Drogas*, (Editorial del Ministerio Público). Lima.

Prado S. – Dominguez. C. – Vernal V. ((2015), *Determinación Judicial de la Penal* (Primera edición) Lima – Perú- ISBN 978-612-4265-16-7.

Peña C., (2010), *Derecho Penal. Parte Especial*, (Tercera Edición, Tomo IV – Editorial Idemsa), Lima.

Prado S., (2010), *Política Criminal Peruana*, (Idemsa). Lima.

Prada A. (2015) *Imputación Objetiva* (primera edición) Lima – Perú ISBN 978-612-4265-17-4

Rojas V., (2010), *Estudios de Derecho Penal*. Doctrina y Jurisprudencia, (Jurista Editores). Lima.

Rios C., (2008), *Precisiones Interpretativas en el Tipo Base del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas*, (Actualidad Jurídica) 177. Pag. 131-137. Lima.

Sequeros S., (2000), *Tráfico Ilícito de Drogas ante el Ordenamiento Jurídico*. Madrid.

Tentalean, “*El control difuso como método de control constitucional*”, Derecho y Cambio Social. Recuperado de: <http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/control.htm>

Urquiza O., J. (2012). *Derecho Constitucional Penal*. Recuperado de ISBN 978-612-4037-53-5.

Urquiza O., (2005), *Jurisprudencia Penal* (Jurista Editores). Lima.

Villavicencio T., (2009), *Derecho Penal Parte General*, (Editorial Grijley), Lima.

Vives A., (2007), *Comentarios al Código Penal*, (Volumen III), Tirant Lo Blanch. Valencia.

Zaffaroni, (1991), *Tratado de Derecho Penal*, (Tomos II y IV), Buenos Aires.

Código Penal [Versión de Juristas editores E.I.R.L.]. (2017). Recuperado de ISBN 9972-229-10-6.

García, (2009). “*Derecho Penal Parte General*” Fundamentos (1ra ed.) Lima.

Neyra F., (2017), *Código Procesal Penal*, Lima, Perú, Jurista Editores E.I.R.L., recuperado de ISBN: 978-612-4366-14-7.

Rodriguez A., (2015), *Manual del Proceso Penal*, Lima, Perú, Instituto Pacífico, Edición.

Reátegui Sánchez, J. (2014). *Manual de Derecho Penal Parte General* [Versión de Actualidad Penal], Recuperado de ISBN 978-612-4243-04-2.

Saldarriaga, V. (2011). *Manual de Derecho Penal* [Versión de IDEMSA]. Recuperado de ISBN 978-612-4037-40-5.

Saldarriaga, v. (2007). *El Tipo Básico en el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas*. Revista de Derecho de la PUCP.

ANEXOS

ANEXO 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Gamboa Gonzales, Karen Estepfani

FACULTAD / ESCUELA: DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Análisis del delito de la posesión de dos o más tipos de drogas en la ley Penal Peruana
PROBLEMA GENERAL	¿De qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	<ol style="list-style-type: none">1. ¿De qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia?2. ¿Cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?
OBJETIVO GENERAL	Determinar de qué manera se regula el delito de posesión de dos o más tipos de droga en la Ley Penal Peruana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	<ol style="list-style-type: none">1. Establecer de qué manera la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.2. Determinar, cuáles son los criterios que aplica el Fiscal para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal.
SUPUESTO GENERAL	El delito de la posesión de dos o más tipos de droga, se regula como un tipo penal, que jurídicamente existen ciertos parámetros para formular acusación penal como, la cantidad de droga, que el poseedor no sea adicto o consumidor habitual, que la droga este oculta y/o preparada para su distribución; y estos presupuestos no se

	cumplen.
SUPUESTOS ESPECÍFICOS	<p>1. la regulación de punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas tipificada en el segundo párrafo del artículo 299 del código penal peruano incide negativamente en el derecho de presunción de inocencia dado que la norma sanciona la tenencia del producto sin determinar efectivamente su condición de consumidor.</p> <p>2.- Los criterios que aplican los fiscales para calificar un caso son; la cantidad de droga, que el poseedor no sea adicto o consumidor habitual, que la droga este oculta y/o preparada para su distribución, las circunstancias en que el sujeto fue intervenido.</p>
DISEÑO DEL ESTUDIO	CUALITATIVO Descriptivo
POBLACIÓN Y MUESTRA	Fiscales del Ministerio Público del Callao 2017.
CATEGORIZACIÓN	Delito de posesión, Tipos de drogas.
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: Inductivo	

Anexo 02

Validaciones Instrumentales



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Morales Guisti Guiseppe Paul
 1.2. Cargo e institución donde labora: Area de Investigación
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías del supuesto											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos, categorías.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

98 %

Lima, 26 del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° _____ Telf: _____



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: GALARRETA ZGARRA, OMAR
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente y Secretario Académico de la UCV - Lima Norte
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: KAREN ESTEFANIE GAMBA GONZALEZ

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													✓
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías del Supuesto.													✓
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos, categorías e indicadores.													✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.													✓
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													✓

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

--

Lima, del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 4376162 Telf: _____

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: VILDOZO CABRERA ERICK
 1.2. Cargo e institución donde labora: OTC
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:.....
 1.4. Autor(A) de Instrumento:.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías del Supuesto.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos, categorías e indicadores.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

94 %

Lima, 23 de mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 09949012 Telf: 9969 8841

Anexo 03

Ficha de entrevista

Título: Análisis del delito de la posesión de dos o más tipos de drogas en la ley Penal Peruana.

Entrevistado:

Cargo :

Institución:

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de droga en las Fiscalías Penales del Callao.

Preguntas:

1. ¿Piensa usted, que la punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal, cumple su eficacia?

2. ¿Cree Ud. que dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes?

3. ¿Cree Ud. que dicha regulación afecta derechos de la persona humana?, precise.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Preguntas:

4. ¿Cómo interpreta Usted el consumo personal regulado en el Art. 299° del Código Penal?

5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Determinar, cuáles son las consecuencias que contrae el delito de la posesión de dos o más tipos de droga.

Preguntas:

5. ¿Una vez concluida la instrucción que criterios utiliza el Fiscal para formular acusación?

6. ¿Qué criterios tienen los Jueces de la Jurisdicción para Sentenciar de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

Muchas gracias por su colaboración.

SELLO	FIRMA

ANEXO 04

Entrevistas

- Ficha de entrevista

Título: Eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de drogas en las Fiscalías Penales del Callao.

Entrevistado : Carlos Anglas Loraunav

Cargo : Fiscal Provincial

Institución : Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de droga en las Fiscalías Penales del Callao.

Preguntas:

1. ¿Piensa usted, que la punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas prevista y sancionada en el artículo 299° del código penal, cumple su eficacia?

La posesión de dos o más tipos de droga no es punible.
Salvo que sea posesión para tráfico, en cuyo caso es
irrelevante que sean varios tipos de drogas.

2. ¿Cree Ud. que dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes?

NI reduce ni controla el consumo.

3. ¿Cree Ud. que dicha regulación afecta derechos de la persona humana?, precise.

El artículo 299 es totalmente ineficaz. Su expulsión
del CP no generaría consecuencia alguna.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Preguntas:

4. ¿Cómo interpreta Usted el consumo personal regulado en el Art. 299° del Código Penal?

El consumo de drogas no es posible en el Perú.

5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

En el artículo 299 no hay un tipo penal.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Determinar, cuáles son las consecuencias que contrae el delito de la posesión de dos o más tipos de droga.

Preguntas:

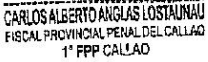
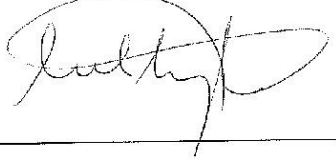
5. ¿Una vez concluida la instrucción que criterios utiliza el Fiscal para formular acusación?

No existe un "delito de la posesión de dos o más tipos de droga" como señala la pregunta.

6. ¿Qué criterios tienen los Jueces de la Jurisdicción para Sentenciar de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

Ninguno, el artículo 299° del CP no sirve para sentenciar a nadie.

Muchas gracias por su colaboración.

SELLO	FIRMA
	

Ficha de entrevista

Título: Eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de drogas en las Fiscalías Penales del Callao.

Entrevistado : Carpuanna Rios Candia

Cargo : Fiscal Adj. PGO

Institución : Fiscalía Penal del Callao

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de droga en las Fiscalías Penales del Callao.

Preguntas:

1. ¿Piensa usted, que la punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal, cumple su eficacia?

Considero que no, porque la sanción a la posesión de drogas no está dada en la cantidad de tipos de droga que se encuentran en posesión de una persona únicamente, sino que debe establecerse principalmente que la misma está destinada a su tráfico.

2. ¿Cree Ud. que dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes?

No creo que dicha regulación reduzca o controle el consumo de estupefacientes, pero considero que la regulación del art. 299 del C.P. está dirigida a establecer en qué casos la sola posesión de algunas cantidades de droga no son suficientes, clasificando al caso de posesión de 2 sustancias, es decir, bajando nivel de la regulación al tráfico.

3. ¿Cree Ud. que dicha regulación afecta derechos de la persona humana?, precise.

En la lectura del art. 299° del C.P. en su 2do párrafo podemos ver una afectación al derecho a la presunción de inocencia, previsto en el artículo 1° del inc. 24 del art. 2° de la Constitución.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Preguntas:

4. ¿Cómo interpreta Usted el consumo personal regulado en el Art. 299° del Código Penal?

El art. 299 del C.P. hace referencia a que el consumo personal solo es el uso de la pequeña cantidad de una sola sustancia en poder de una persona siempre que no existan situaciones circunstanciales que permitan ver que aquella iba a ser traficada.

5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

Se realiza una evaluación de la cantidad de droga en caso de las circunstancias que rodean a la intención de la persona que la posee u otros como el hecho de su poder que puedan evidenciar que dicha sustancia estaba o no destinada a ser traficada.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Determinar, cuáles son las consecuencias que contrae el delito de la posesión de dos o más tipos de droga.

Preguntas:


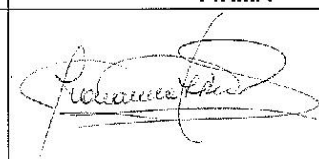
5. ¿Una vez concluida la instrucción que criterios utiliza el Fiscal para formular acusación?

Lo que se busca es establecer si la sustancia incautada, estaba o no destinada a su tráfico (comercialización), ya que esa es la conducta que sanciona el Código Penal.

6. ¿Qué criterios tienen los Jueces de la Jurisdicción para Sentenciar de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

De igual forma, a los Jueces no solo les basta ver que al inculpada se le haya incautado en poder de 2 o más tipos de drogas sino que si debe acreditar que esos tipos de droga iban a ser comercializados.

Muchas gracias por su colaboración.

SELLO	FIRMA
	

Ficha de entrevista

Título: Eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de drogas en las Fiscalías Penales del Callao.

Entrevistado: Pedro Alfredo Del Rio Cárdenas.

Cargo: Fiscal Adjunto Superior.

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de droga en las Fiscalías Penales del Callao.

Preguntas:

1. ¿Piensa usted, que la punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas prevista y sancionada en el segundo párrafo del artículo 299° del código penal, cumple su eficacia?

No, dado que la sanción a la posesión de drogas no está dada en base a la cantidad de tipos de droga, por tanto se debería establecer que la misma tenga como fin la neutralización

2. ¿Cree Ud. que dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes?

No, controla ni reduce.

3. ¿Cree Ud. que dicha regulación afecta derechos de la persona humana?, precise.

Puede notarse que afecta el derecho de presunción de inocencia

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Preguntas:

4. ¿Cómo interpreta Usted el consumo personal regulado en el Art. 299° del Código Penal?

tiene una norma que regula la posesión para el consumo siempre que no se presenten situaciones que demuestren que la misma está destinada al tráfico

5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

*las circunstancias en que se encuentre a la persona
la cantidad de la droga
lo que permita demostrar que la droga está destinada al tráfico*

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Determinar, cuáles son las consecuencias que contrae el delito de la posesión de dos o más tipos de droga.

Preguntas:


5. ¿Una vez concluida la instrucción que criterios utiliza el Fiscal para formular acusación?

Establecer que la droga está destinada al tráfico

6. ¿Qué criterios tienen los Jueces de la Jurisdicción para Sentenciar de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

que se pueda acreditar que la droga incautada tenga como fin la comercialización

Muchas gracias por su colaboración.

SELLO	FIRMA
<p>Dr. Pedro Alfredo De la Hoz Córdova Fiscal Adjunto Superior Fiscalía Superior Central del Cuzco</p>	

Ficha de entrevista

Título: Eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de drogas en las Fiscalías Penales del Callao.

Entrevistado: Paola Lizbeth Velarde Flores

Cargo: Fiscal adjunta Provincial

Institución: Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuál es la eficacia del delito de posesión de dos o más tipos de droga en las Fiscalías Penales del Callao.

Preguntas:

1. ¿Piensa usted, que la punibilidad por posesión de dos o más tipos de drogas prevista y sancionada en el artículo 299° del código penal, cumple su eficacia?

Si pero sin embargo se debe de tener en consideración las circunstancias del agente, es decir si se presenta un Certificado de tratamiento unido de droga dependiente que demuestre su condición no puede cargarse el tipo

2. ¿Cree Ud. que dicha regulación reduce y controla el consumo de estupefacientes?

Si pues por un lado la impunidad de autolesión y por otro el castigo del poseedor de droga, su capacidad de cargar un tipo y la venta de droga

3. ¿Cree Ud. que dicha regulación afecta derechos de la persona humana?, precíse.

No, pues si no se regulara, habría una discriminación de venta de drogas; generando un grave problema social.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Establecer de qué manera la regulación de Punibilidad por posesión de dos o más tipos de droga en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal Peruano incide en el derecho de presunción de inocencia.

Preguntas:

4. ¿Cómo interpreta Usted el consumo personal regulado en el Art. 299° del Código Penal?

Aquella cantidad de droga que diariamente puede ingerir una persona por cualquier vía, si la posesión excede de dicha dosis genera una duda respecto al destino final (consumo o tráfico). La dosis tiene que ser para el propio consumo.

5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los fiscales para calificar un caso de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

El Peso - pureza y apretensión de la droga, se tiene que analizar si nos encontramos ante una tenencia de drogas para el consumo o ante un tráfico de drogas y el haber el grado de afectación y puesto en peligro de los bienes jurídicos.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Determinar, cuáles son las consecuencias que contrae el delito de la posesión de dos o más tipos de droga.

Preguntas:

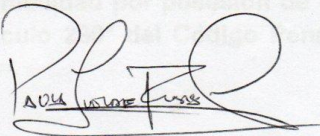
5. ¿Una vez concluida la instrucción que criterios utiliza el Fiscal para formular acusación?

La acusación es una solicitud fundamentada que realiza el Fiscal en el que contiene una especie de promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado y responsable por el delinctor son acreditados, Por la acusación se hace realidad el principio de la imputación necesaria como un manifestación del principio de legalidad y defensa procesal.

6. ¿Qué criterios tienen los Jueces de la Jurisdicción para Sentenciar de acuerdo al tipo penal descrito en el segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal?

- 1) El criterio Gramatical (Literal). (2) C. Logico conceptual.
3) criterio sistematico ; 4) criterio historico y
5) criterio teleologico.

Muchas gracias por su colaboración.

SELLO	FIRMA
PAOLA LIZBETH VELARDE FLORES Fiscal Adjunta Provincial Penal	

ANEXO 5



ENACO S.A.
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

**REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE ENACO S.A.**

AGOSTO 2016

	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

INDICE

SECCIÓN I GENERALIDADES	3
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL Y OBJETO SOCIAL	3
Artículo 101° Denominación y Régimen Legal de ENACO S.A	3
Artículo 102° Objeto Social	3
CAPÍTULO II ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ENACO S.A	4
Artículo 201° Objeto del Reglamento	4
Artículo 202° Base Legal	4
Artículo 203° Alcance	4
SECCIÓN II ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	5
CAPÍTULO III ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	5
Artículo 301° Estructura Organizacional	5
Artículo 302° Organigrama	6
CAPÍTULO IV ÓRGANOS DE DIRECCIÓN	7
Artículo 401° Junta General de Accionistas	7
Artículo 402° Funciones de Junta General de Accionistas	7
Artículo 403° Directorio	7
Artículo 404° Funciones del Directorio	7
Artículo 405° Gerencia General	8
Artículo 406° Funciones de la Gerencia General	8
CAPÍTULO V ÓRGANOS DE CONTROL	10
Artículo 501° Órgano de Control Institucional	10
Artículo 502° Funciones del Órgano de Control Institucional	10
Artículo 503° Oficina de Control Selectivo	12
Artículo 504° Funciones de la Oficina de Control Selectivo	12
CAPÍTULO VI ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO	14
Artículo 601° Oficina de Asesoría Jurídica	14
Artículo 602° Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica	14
Artículo 603° Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática	15
Artículo 604° Funciones de la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática	15
Artículo 605° Oficina de Recursos Humanos	17
Artículo 606° Funciones de la Oficina de Recursos Humanos	17
CAPÍTULO VII ÓRGANOS DE LÍNEA	19
Artículo 701° Gerencia de Administración y Finanzas	19
Artículo 702° Funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas	19
Artículo 703° Gerencia de Comercio Industrial	20
Artículo 704° Funciones de la Gerencia de Comercio Industrial	20
Artículo 705° Gerencia de Comercio Tradicional	21
Artículo 706° Funciones de la Gerencia de Comercio Tradicional	21
CAPÍTULO VIII SURCUSALES, AGENCIAS Y UNIDADES OPERATIVAS	23
Artículo 801° Sucursales	23
Artículo 802° Funciones de las Sucursales	23
Artículo 803° Agencias	24
Artículo 804° Funciones de las Agencias	24
Artículo 805° Unidades Operativas	24
Artículo 806° Funciones de las Unidades Operativas	24
SECCIÓN III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	25



ENACO S.A.	-REGlamento DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

CAPÍTULO VIII SUCURSALES, AGENCIAS Y UNIDADES OPERATIVAS

Artículo 801° Sucursales

Son órganos desconcentrados de la Gerencia de Comercio Tradicional, encargadas de coordinar y ejecutar la gestión de comercialización de hoja de coca en el ámbito de su competencia en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas asignadas.


Asimismo, son responsables de dar cumplimiento a las disposiciones que emitan los organismos de alcance nacional que se describen en el presente reglamento.

Artículo 802° Funciones de las Sucursales

- Proponer a la Gerencia de Comercio Tradicional su Plan de Operaciones y Presupuesto;
- Ejecutar el plan de operaciones y presupuesto aprobado, de acuerdo a las directivas de la Empresa;
- Administrar y ejecutar la comercialización² de la hoja de coca de acuerdo a las metas establecidas;
- Coordinar y supervisar las acciones administrativas y de comercialización a fin de lograr la correcta aplicación de las disposiciones establecidas por la Gerencia de Comercio Tradicional;
- Mantener actualizada la información del movimiento comercial, contable, financiero y presupuestal de la Sucursal, en coordinación con los órganos respectivos de alcance nacional, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes;
- Coadyuvar a la fiscalización de la comercialización ilegal de la hoja de coca en el ámbito de su competencia funcional;
- Informar periódicamente acerca de la ejecución del presupuesto de inversiones de corresponder;
- Aplicar y dar cumplimiento a las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del recurso humano vigentes en la empresa,
- Gestionar el mantenimiento de los recursos asignados;
- Otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Comercio Tradicional.



² Compra y/o venta

	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	POF 01
		Versión:	01

Artículo 803° Agencias

Órganos desconcentrados dependientes de la Gerencia de Comercio Tradicional o de las Sucursales según se encuentre definido en la estructura orgánica de la empresa mencionada en el presente en reglamento.

Son responsables de ejecutar las funciones principales de comercialización de la hoja de coca en función a las metas establecidas por la Gerencia de Comercio Tradicional, así como realizar labores de fiscalización.

Artículo 804° Funciones de las Agencias

- Coordinar con las unidades operativas a su cargo la ejecución de acciones de comercialización de la hoja de coca de acuerdo a la política, normas vigentes y metas comerciales de la agencia;
- Centralizar y procesar la información presupuestal, comercial, contable, administrativa y de control de las unidades operativas a su cargo, a fin de lograr la correcta aplicación de las disposiciones establecidas;
- Ejecutar acciones de fiscalización a la comercialización ilegal de la hoja de coca que se encuentren dentro de su ámbito funcional;
- Aplicar y dar cumplimiento a las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del recurso humano vigentes en la empresa;
- Gestionar el mantenimiento de los recursos asignados;
- Otras funciones afines que le encargue su órgano inmediato superior.

Artículo 805° Unidades Operativas

Unidades orgánicas dependientes de las Sucursales o Agencias, responsables del cumplimiento de los lineamientos relacionados a la comercialización de hoja de coca tanto a nivel de atención local como en la modalidad de compras y/o ventas móviles.

Artículo 806° Funciones de las Unidades Operativas

- Ejecutar las compras y/o ventas de acuerdo a los programas y metas establecidas;
- Informar sobre las acciones realizadas al área orgánica de la cual depende;
- Solicitar los requerimientos de recursos necesarios para su operatividad;
- Realizar y/o coordinar labores de fiscalización a productores y/o comerciantes del ámbito de su competencia funcional;
- Realizar las demás funciones que le asigne su órgano inmediato superior.

SECCIÓN III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- a. Las funciones de los puestos que conforman las diferentes Unidades Orgánicas se encuentran descritas en el Manual de Organización y Funciones.
- b. La cantidad de puestos que conforman las diferentes Unidades Orgánicas se encuentran definidas en el Cuadro de Asignación de Personal.
- c. La organización deberá responder al principio de flexibilidad, y de gestión por procesos con el fin de permitir la formación de equipos de trabajo y/o comités los mismos que no constituyen unidades orgánicas adicionales a las mencionadas en este reglamento.
- d. Para solicitar la creación de nuevas áreas, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina Planeamiento, Desarrollo e Informática evaluarán la necesidad, con la finalidad de recomendar al Gerente General, los proyectos de modificación de la organización y/o la creación de nuevos puestos de trabajo, los mismos que requieren aprobación del Directorio.
- e. Constituyen responsabilidades generales de todos los órganos de ENACO S.A., velar por el cumplimiento de:
 - (1) Los dispositivos legales;
 - (2) Los principios de Sistema de Control Interno, Sistema Efectivo de Análisis de Riesgo y del Buen Gobierno Corporativo de ENACO S.A.;
 - (3) La conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos y mobiliario asignados.




ENACO S.A.	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

CAPÍTULO VII ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 701º Gerencia de Administración y Finanzas

Es el órgano que se encarga de planificar, controlar y ejecutar las actividades propias de la gestión financiera, ejecución presupuestal, contable, tributaria, tesorería, logística, control patrimonial, seguros y archivos de la Empresa Nacional de la Coca S.A.

Artículo 702º Funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas

- a. Conducir la administración financiera a nivel empresarial con alcance nacional; emitiendo los lineamientos para asegurar el soporte financiero orientado a lograr el sostenimiento y desarrollo permanente de la empresa, acorde con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico;
- b. Conducir, ejecutar y controlar las responsabilidades y obligaciones tributarias y contables de la empresa;
- c. Administrar el control de bienes patrimoniales, seguros y archivos de la empresa.
- d. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos necesarios para el desarrollo del área;
- e. Organizar, programar y ejecutar las actividades que permitan presentar a la Gerencia General la información económica y financiera oportuna para la toma de decisiones;
- f. Administrar, supervisar y autorizar los compromisos y transferencias solicitadas por los demás órganos de la Empresa, para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones;
- g. Controlar y realizar en coordinación con las Gerencias y Oficinas pertinentes, los inventarios, registros contables y estados financieros de la Empresa;
- h. Administrar los procesos logísticos observando el cumplimiento de las normas sobre Contrataciones con el Estado que se encuentren vigentes;
- i. Administrar y proveer los recursos que requieran los diversos órganos de la Empresa;
- j. Conciliar los inventarios de activos sobre la base de los registros contables y balance proporcionados por el área contable;
- k. Evaluar permanentemente los gastos administrativos ejecutados en el ámbito nacional y cursar las comunicaciones internas que esto amerite;
- l. Gestionar ante las Entidades Financieras el financiamiento requerido para las operaciones corrientes e inversiones, de requerirse;



ENACO S.A.	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código: ROF 01 Versión: 01
------------	---	-------------------------------

- m. Disponer la formulación de los Estados Financieros de ENACO S.A., velando por la generación de información auténtica, confiable y oportuna que constituya evidencia de la gestión;
- n. Cautelar que la contabilidad de la organización se lleve de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas internacionales de contabilidad vigentes;
- o. Determinar y controlar costos de procesos y productos, así como indicadores operativos de gestión, propios de su función, complementarios a los indicadores estratégicos que se establezcan en la empresa.
- p. Emitir opinión técnica en todo lo concerniente a sus funciones y absolver las consultas que formulen los organismos de la empresa;
- q. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- r. Otras funciones propias de su competencia que le asigne el Gerente General.

Artículo 703° Gerencia de Comercio Industrial


Es el órgano que se encarga de planear, coordinar, programar, dirigir y controlar las actividades de comercialización y producción de los productos industrializados de la hoja de coca en el mercado interno y externo, utilizando la capacidad instalada en las mejores condiciones de productividad y conforme a las normas legales vigentes.



Artículo 704° Funciones de la Gerencia de Comercio Industrial

- a. Gestionar la comercialización e industrialización de productos derivados de la hoja de coca dentro del marco legal vigente;
- b. Propiciar la creación y desarrollo de nuevos mercados.
- c. Conducir y supervisar acciones de investigación y desarrollo de productos legales derivados de la hoja de coca.
- d. Planificar y ejecutar acciones de mejoramiento y modernización de la maquinaria, equipos y herramientas de ENACO, a fin de garantizar su operatividad;
- e. Conducir acciones de control técnico sobre trabajos propios y de terceros para garantizar la calidad, el cumplimiento de los presupuestos y los plazos establecidos en los proyectos y servicios proporcionados a los clientes;
- f. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes,



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

normas y procedimientos para el desarrollo del área;

- g. Establecer los sistemas y procesos técnicos y administrativos que permitan elevar la productividad, en concordancia con las disposiciones de la Gerencia General de ENACO;
- h. Proponer a la Gerencia General estrategias, planes y/o programas, presupuesto y proyectos de corto, mediano y largo plazo, para la comercialización e industrialización de la hoja de coca;
- i. Coordinar con las áreas técnicas a su cargo y elevar propuestas a la Gerencia General respecto a la ejecución de las acciones y procesos técnicos de industrialización, comercialización de la hoja de coca y derivados de acuerdo a la política y normas vigentes de la Empresa;
- j. Proponer a la Gerencia General programas, políticas, lineamientos que logren el posicionamiento de nuestros productos en el mercado y ejecutar las acciones que correspondan;
- k. Desarrollar las actividades de comercio exterior de la empresa.
- l. Proponer y desarrollar estudios de investigación científica para la obtención de nuevo conocimiento o derivados industriales de la hoja de coca, ya sea con medios propios o a través de convenios con instituciones públicas o privadas;
- m. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- n. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la Gerencia General de ENACO.



Artículo 705° Gerencia de Comercio Tradicional


Es el órgano responsable de la gestión, conducción y control del proceso de compra, almacenamiento, distribución y venta de la hoja de coca en el mercado interno.



Artículo 706° Funciones de la Gerencia de Comercio Tradicional

- a. Gestionar los procesos de compra, empaque, almacenamiento, distribución y venta de hoja de coca de acuerdo a la demanda del mercado y a los requerimientos comerciales de la empresa;
- b. Proponer a la Gerencia General las estrategias, objetivos y metas, planes y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, para el abastecimiento y comercialización de la hoja de coca;
- c. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de metas



 ENACO S.A.	— REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

comerciales que permitan la atención del giro principal del negocio.

- d. Proponer la apertura y/o cierre de unidades operativas comerciales;
- e. Organizar y mantener actualizada la información relacionada con el Padrón de Productores, Registro de Comerciantes tradicionales, así como los resultados de fiscalización en el ámbito nacional;
- f. Supervisar y evaluar la gestión comercial de la hoja de coca para uso tradicional, de las sucursales, agencias y unidades operativas comerciales, disponiendo las medidas correctivas y preventivas para su mejor desempeño;
- g. Proponer a la Gerencia General políticas de precios de productos industrializados;
- h. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- i. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por la Gerencia General de ENACO S.A.



CAPÍTULO VI ÓRGANOS DE ASESORÍA Y APOYO

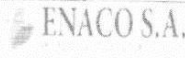
Artículo 601º Oficina de Asesoría Jurídica

Es el órgano que con alcance nacional, se encarga de asesorar a los órganos de la empresa en la interpretación y aplicación de la legislación vigente, responsable de efectuar acciones en el campo jurídico legal con la finalidad de ejercer la defensa de los intereses de la empresa en apoyo a la gestión.

Artículo 602º Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica

- a. Asesorar a los Órganos de la empresa sobre el contenido y los alcances de las disposiciones legales relacionadas con la organización, a fin de evitar posibles conflictos y/o controversias;
- b. Analizar, interpretar, concordar y opinar sobre la aplicación e implicancias de los dispositivos legales, ejecutorias y normas internas, previamente a su ejecución;
- c. Emitir opinión legal sobre las consultas que le sean formuladas por los organismos de la empresa sobre aspectos propios de las actividades operativas y administrativas de la empresa;
- d. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del área;
- e. Recopilar, clasificar, difundir, y mantener un archivo actualizado debidamente sistematizado con los dispositivos legales de aplicación e interés de ENACO S.A.;
- f. Formular las consultas de carácter legal que promueva ENACO S.A. ante Entidades y Organismos externos;
- g. Representar a la empresa y asumir la protección y tutela de los derechos e intereses de la empresa ante las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Entidades Públicas, Instancias Administrativas, ejerciendo tal protección en vía de acción y/o defensa en las etapas prejudicial, judicial y de ejecución, litigios y arbitrajes, así como en todos aquellos procesos en que participe en calidad de demandante, demandado o tercero;
- h. Efectuar la custodia física de los contratos y convenios originales suscritos por ENACO S.A., asignándoles la numeración establecida;
- i. Opinar y elaborar proyectos de resoluciones y otros documentos relacionados con el ámbito de la empresa, que sean puestos a su consideración;
- j. Visar los proyectos de resolución y otros documentos relacionados a ser



	REGlamento DE- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

suscritos por la Gerencia General, que le sean propuestos, cuando estos tengan relevancia jurídica;

- k. Adoptar las estrategias y providencias del caso, para minimizar los riesgos de índole legal que puedan derivar en conflictos con clientes u otras organizaciones derivados de la firmas de contratos o convenios;
- l. Gestionar el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad de ENACO S.A., así como de los inmuebles recibidos en calidad de donación, garantía, comodato y otros;
- m. Coordinar y supervisar la gestión de las asesorías jurídicas y estudios externos, contratados por ENACO S.A. para la defensa de sus intereses;
- n. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- o. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia General.

Artículo 603° Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática


Es el órgano encargado de liderar la planificación del desarrollo empresarial, mediante actividades de conducción del planeamiento estratégico, presupuestal, diseño organizacional y normativo mediante la formulación de documentos internos, con la finalidad de coadyuvar el cumplimiento del objeto social, y contribuir a mantener a ENACO S.A. como una organización sólida y competitiva.



Artículo 604° Funciones de la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática

- a. Asesorar a la Gerencia General en la definición de políticas, alternativas de acción, objetivos y estrategias para el cumplimiento del objeto social y desarrollo de ENACO S.A.;
- b. Proponer la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones, acorde con los requerimientos de la Empresa;
- c. Conducir y liderar la formulación, evaluación, reformulación y difusión del Plan Estratégico ;
- d. Emitir los lineamientos y conducir la formulación, sustentación, evaluación, reformulación y difusión del Plan Operativo.
- e. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del área;
- f. Liderar el proceso de formulación y evaluación del Presupuesto, estableciendo los lineamientos y criterios para la aplicación de los recursos financieros de la empresa, de acuerdo a la normativa vigente,




 ENACO S.A.	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

y emitir recomendaciones orientadas a optimizar la gestión;

- g. Consolidar el requerimiento presupuestal de las áreas, realizar el análisis correspondiente, asignar el presupuesto a cada área orgánica de la empresa, así como controlar su adecuada administración;
- h. Disponer la formulación de los Informes presupuestales para su remisión a los Organismos correspondientes;
- i. Emitir los informes de disponibilidad presupuestaria para la contratación de bienes, servicios u obras, así como otras que se requieran;
- j. Verificar y evaluar anualmente que el Plan de Inversiones de la Empresa sea concordante con los Planes Estratégico y Operativo, a fin de velar por el desarrollo de la empresa;
- k. Liderar la simplificación administrativa en la empresa propendiendo al uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el desarrollo de los procesos centrales del negocio, administrativos y de apoyo.
- l. Conducir la formulación, revisión y actualización de los documentos contemplados en el Manual de Gestión, en coordinación con las Gerencias y Oficinas de la Empresa.
- m. Conducir y liderar la formulación, implementación, operación y mantenimiento del Plan Informático;
- n. Formular la Memoria Anual en coordinación con las gerencias y jefaturas;
- o. Desarrollar y revisar el mapa de procesos y los procesos operativos de la empresa en coordinación con las áreas correspondientes para aprobación por la Gerencia General;
- p. Conducir y monitorear adecuados Indicadores de Gestión, a fin de alertar con oportunidad a la Gerencia General, Gerencias y Oficinas del desarrollo de la gestión.
- q. Identificar oportunidades de mejora y de ser pertinente proponerlas mediante proyectos que apoyen el desarrollo de la empresa.
- r. Propiciar la realización de estudios sobre ENACO S.A. y el entorno en el que opera, con la finalidad de proponer nuevas estrategias para la empresa;
- s. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- t. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia General.



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código: ROF 01
		Versión: 01


Artículo 605° Oficina de Recursos Humanos

Es el órgano que con alcance nacional se encarga de administrar la formulación y ejecución de los planes, políticas y normativas relacionadas a la gestión del recurso humano a nivel empresarial, que conduzcan a contar con una fuerza laboral competente, en cantidad suficiente y a costos razonables en beneficio de la productividad, de conformidad a la legislación y a las políticas emanadas de la Gerencia General de ENACO S.A.

Artículo 606° Funciones de la Oficina de Recursos Humanos

- a. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del recurso humano en ENACO S.A., siendo operativamente la aplicación y cumplimiento de estas disposiciones de los Jefes de Sucursales y Agencias;
- b. Normar las actividades vinculadas con la selección, contratación, inducción, asignación, traslados, evaluación, capacitación, desarrollo y bienestar de los trabajadores;
- c. Gestionar los aspectos operativos rutinarios de la administración de personal de la Empresa dentro del marco de las disposiciones legales y normativa vigente, así como los lineamientos recibidos de la Gerencia General;
- d. Aplicar las políticas, normas y procedimientos técnico-administrativos para administrar los recursos humanos de los Organismos de la Empresa, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Gerencia General;
- e. Diseñar, actualizar y coordinar la aplicación de la Clasificación de Puestos (Grupos Ocupacionales) y Administración de Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios de acuerdo a los lineamientos que se impartan para tal fin;
- f. Velar por el mantenimiento de la dotación de personal necesario en cantidad y competencia establecida, para cumplir con las necesidades de la organización;
- g. Participar en el proceso de análisis de la estructura organizacional de ENACO S.A., revisando y pronunciándose sobre los documentos en esta materia propuestos por la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática de ENACO S.A.;
- h. Liderar la revisión, formulación, evaluación de cumplimiento de los siguientes documentos:
 - i. Cuadro de Asignación de Personal de ENACO S.A.;
 - ii. Perfiles de los puestos de los Organismos de la Empresa, contenidos en el Manual de Organización y Funciones;



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código: Versión:	ROF 01 01
---	---	---------------------	--------------

- iii. Reglamento Interno de Trabajo de ENACO S.A.;
- iv. Otros documentos normativos relacionados con el proceso de gestión de recursos humanos;
- i. Proponer para aprobación el Plan de Bienestar y el Plan de Capacitación de la Empresa, siendo responsable de su ejecución y de su evaluación correspondiente;
- j. Liderar que las actividades de seguridad y salud en el trabajo estén alineadas con la normativa legal vigente y las políticas de la empresa al respecto;
- k. Elaborar y mantener estadísticas relacionadas con el proceso de gestión del recurso humano de ENACO S.A.;
- l. Emitir los lineamientos para ejecutar los programas de inducción y orientación al personal nuevo de la empresa;
- m. Emitir los lineamientos para administrar el control de asistencia, puntualidad y sobre tiempo del personal, así como las vacaciones, permisos y licencias que se soliciten;
- n. Coordinar con los responsables de las Sucursales, Agencias y Unidades Operativas los aspectos relativos a la gestión de recursos humanos;
- o. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- p. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia General.



- h. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General de la República bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de Control Institucional;
- i. Elaborar la Carpeta de Control y remita a las unidades orgánicas competente de la Contraloría General de la República para la comunicaciones de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;
- j. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la Contraloría General de la República sobre la materia;
- k. Realizar el seguimiento a las acciones que la entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;
- l. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloría General de la República para la realización de los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el Órgano de Control Institucional, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.

Asimismo, el Jefe y el personal del Órgano de Control Institucional deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la Contraloría General de la República, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del Órgano de Control Institucional, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control;

- m. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República;
- n. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;
- o. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al



presupuesto o al ROF, en lo relativo al Órgano de Control Institucional se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la Contraloría General de la República;

- p. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y personal del Órgano de Control Institucional a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras;
- q. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la República durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del Órgano de Control Institucional, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público;
- r. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República;
- s. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones;
- t. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de la entidad;
- u. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría General de la República;
- v. Otras que establezca la Contraloría General de la República.



Artículo 503º Oficina de Control Selectivo

Es el órgano encargado de liderar, organizar y coordinar las acciones necesarias para cautelar la legalidad de los actos, operaciones y resultados obtenidos por los diferentes organismos de la empresa ENACO S.A., en apoyo a la gestión de la Gerencia General.


Asimismo velar por el cumplimiento e implementación del Sistema de Control Interno, Sistema Efectivo de Control de Riesgos y del Buen Gobierno Corporativo, así como de realizar todas las funciones derivadas de la ejecución de actividades de control previo y simultáneo y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional.



Artículo 504º Funciones de la Oficina de Control Selectivo

- a. Planear, programar y dirigir a nivel empresarial con alcance nacional, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Buen Gobierno



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

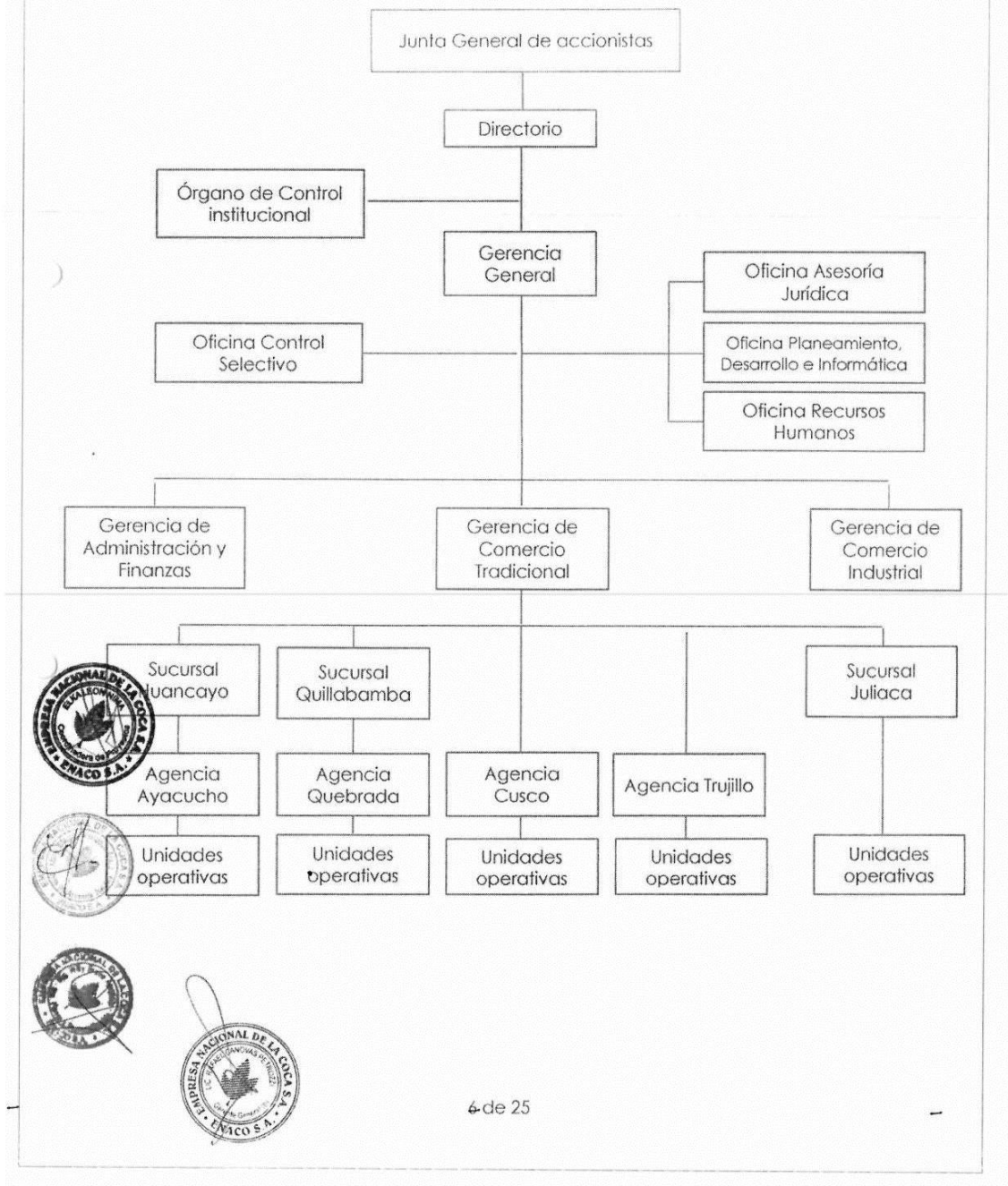
Corporativo y Sistema Efectivo de Control de Riesgos, fomentando una cultura de control y cumplimiento de los principios del buen gobierno corporativo, prevención y mitigación de riesgos que contribuyan al mejoramiento continuo.

- b. Verificar selectivamente la apropiada aplicación de controles en los procesos de las diferentes áreas de la organización, así como su cumplimiento, con la finalidad de minimizar o controlar el riesgo inherente a cada uno de las actividades;
- c. Verificar selectivamente el cumplimiento de la normativa interna de los principales procesos en base a un Plan Anual de Actividades, reportando a la Gerencia General las novedades y recomendaciones para los ajustes necesarios;
- d. Diseñar y proponer para aprobación las políticas, estrategias, planes, normas y procedimientos para el desarrollo del área;
- e. Mantener en reserva y bajo custodia los informes resultantes del Plan Anual de Actividades, efectuando la distribución para difusión de acuerdo a las instrucciones de la Gerencia General;
- f. Efectuar los encargos de la Gerencia General relativos a la evaluación de las diferentes actividades y procesos de la Empresa;
- g. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado;
- h. Realizar el seguimiento de los informes emitidos por los organismos de control y verificar la implementación efectiva, adecuada y oportuna de las medidas correctivas;
- k. Asesorar a los organismos de la empresa con la finalidad de que puedan establecer y garantizar controles internos eficientes, definiendo e implementando las actividades de control necesarias;
- l. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado;
- m. Otras funciones propias de su competencia que le asigne la Gerencia General



 ENACO S.A.	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

Artículo 302º Organigrama



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código: <u> </u>	ROF 01
		Versión: <u> </u>	01

CAPÍTULO IV ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Artículo 401º Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de ENACO S.A. es el órgano supremo de la sociedad, que goza de atribuciones plenas para la toma de decisiones sobre la conducción de esta, en los aspectos que le competen.

La representación del Estado en la Junta de Accionistas se rige por la Ley N° 27170 "Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial Del Estado", el Decreto Supremo N° 072-2000-EF Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y las directivas de FONAFE o las normas que las sustituyan.

Las facultades y responsabilidades de la Junta General de Accionistas son las establecidas en la Ley General de Sociedades, demás normas que la complementen y el Estatuto de ENACO S.A.

Artículo 402º Funciones de Junta General de Accionistas

Las funciones de la Junta General de Accionistas son las establecidas en la Ley General de Sociedades y Estatuto de ENACO S.A.

Artículo 403º Directorio

El Directorio es el órgano colegiado, máxima autoridad encargada de formular, dirigir y controlar la política a aplicarse en la administración de la sociedad, en concordancia con las políticas corporativas y plan estratégico de FONAFE.



El Directorio es designado y constituido de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Su duración será definida por la Junta General de Accionistas.

Artículo 404º Funciones del Directorio



Las funciones del Directorio, Presidente del Directorio y directores, son las establecidas en la Ley General de Sociedades, normas que promueven la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, normas emitidas por FONAFE y por el Estatuto de ENACO S.A.



Artículo 405° Gerencia General

La Gerencia General es el organismo encargado de administrar¹ y gestionar la empresa, de conformidad a la política y los acuerdos dispuestos por el Directorio de ENACO S.A., sin perjuicio de las otras funciones que este le encargue, conduciendo la empresa con eficacia, efectividad, competitividad y transparencia, conforme a los principios delineados en las Normas de Gestión de Control, Buen Gobierno Corporativo y otras normativas aplicables a la gestión.

Artículo 406° Funciones de la Gerencia General

- a. Ejecutar los Acuerdos del Directorio y las decisiones de la Junta General de Accionistas;
- b. Dar cuenta al Directorio o a la Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, del estado de los negocios sociales;
- c. Organizar el régimen interno de la Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma;
- d. Dirigir las actividades de ENACO S.A para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas, de acuerdo a las políticas de gestión establecidas por el Directorio;
- e. Proponer al Directorio la organización de ENACO S.A. y los cambios que pudieran requerirse en la estructura organizativa, así como los documentos de gestión que correspondan;
- f. Poner a consideración del Directorio los asuntos de competencia de este órgano, las cuales deberán ir acompañadas de los informes y dictámenes de los funcionarios, técnicos o asesores, a quien corresponda emitirlos;
- g. Dar los lineamientos para la contratación y/o remoción de los trabajadores cuyo nombramiento no corresponda al Directorio;
- h. Presentar para la aprobación del Directorio, el Proyecto de Presupuesto y Plan Operativo conforme a las disposiciones emitidas por FONAFE, así como controlar que su ejecución sea en función a las medidas de austeridad y concordante con las políticas de gestión establecidas por el Directorio de ENACO S.A.;
- i. Hacer cumplir las políticas del Directorio sobre administración de personal, remuneraciones, bienestar social, desarrollo profesional y técnico de los trabajadores de ENACO S.A orientadas a incrementar la competencia del personal;
- j. Presentar al Directorio de ENACO S.A., para su aprobación, el Balance

¹ Planear, organizar, dirigir, y controlar



General consolidado y demás estados financieros del ejercicio económico correspondiente y la Memoria Anual dando cuenta del desarrollo de su gestión;

- k. Proponer al Directorio el otorgamiento, ratificación y revocación de poderes generales y especiales a los funcionarios, incluso con delegaciones, con cualquiera de las facultades relacionadas con el objeto social de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Poderes;
- l. Aprobar las resoluciones de actos administrativos, así como los documentos normativos de gestión para asegurar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la organización y velar por su mantenimiento actualizado, disponiendo su revisión, evaluación y actualización permanente;
- m. Disponer las estrategias aprobadas por el Directorio de ENACO S.A., de conformidad con la normativa del Sistema de Control Interno y vigilar su eficacia, así como asegurar los recursos y medios necesarios para el logro de los objetivos;
- n. Velar por el cumplimiento de los principios y lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de ENACO S.A.;
- o. Gestionar la asignación del presupuesto que corresponde a su área, así como su adecuada administración cuando le sea asignado; y,
- p. Las demás funciones que le delegue el Directorio y las que le corresponden de acuerdo a Ley.



CAPÍTULO V ÓRGANOS DE CONTROL


Artículo 501° Órgano de Control Institucional

Es el órgano especializado responsable de llevar a cabo el control gubernamental, en ENACO S.A., el cual funcional y administrativamente depende de la Contraloría General de la República, y orgánicamente se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia, cuyo objeto principal es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la empresa, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Artículo 502° Funciones del Órgano de Control Institucional

- Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General de la República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría General de la República;
- Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación correspondiente;
- Ejercer el control interno simultaneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la República;
- Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;
- Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a cargo de Órgano de Control Institucional en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la Contraloría General de la República;
- Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría General de la República para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a la ley; conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;
- Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República;



	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ENACO S.A.

SECCIÓN I GENERALIDADES

CAPITULO I DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL Y OBJETO SOCIAL

Artículo 101° Denominación y Régimen Legal de ENACO S.A

Mediante Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978; fue creada la Empresa Nacional de la Coca S.A., como la única entidad peruana autorizada para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo N° 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Anónima (ENACO S.A.); el Decreto Legislativo N° 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es una Empresa del Estado de Accionariado Único, que realiza sus operaciones bajo el ámbito del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.


Artículo 102° Objeto Social

El objeto social de ENACO S.A. es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados. Así como, actividades vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados.

En cumplimiento del objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados; así como industrializar los sub productos, elaborar los insumos que requiera el cumplimiento de sus fines específicos y desarrollar toda otra actividad afin, conexas y complementaria a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades anónimas, individualmente o en asociación con otras entidades, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Igualmente, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su actividad y difundir y promover en el país y en el extranjero las cualidades benéficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y sus derivados.



 ENACO S.A.	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	Código:	ROF 01
		Versión:	01

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ENACO S.A

Artículo 201° Objeto del Reglamento

El presente reglamento establece la estructura orgánica, así como las funciones y responsabilidades de los órganos y unidades orgánicas que conforman la Empresa Estatal de derecho privado Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es ENACO S.A.

Artículo 202° Base Legal

- a. Decreto Ley N° 22370, Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca
- b. Ley N° 26887, Ley General de Sociedades;
- c. Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado
- d. Decreto Legislativo N° 1031 Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- e. Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- f. Estatuto de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima - ENACO S.A.



Artículo 203° Alcance

- a. Junta General de Accionistas;
- b. Directorio de ENACO S.A.;
- c. Gerencia General de ENACO S.A.;
- d. Gerencias y Oficinas ;
- e. Sucursales, Agencias y Unidades Operativas de ENACO S.A.



SECCIÓN II ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

CAPÍTULO III ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

Artículo 301° Estructura Organizacional

La Empresa Nacional de la Coca-ENACO S.A. cuenta con la siguiente estructura organizacional:

1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- 1.1 Junta General de Accionistas
- 1.2 Directorio
- 1.3 Gerencia General

2. ÓRGANOS DE CONTROL

- 2.1 Órgano de Control Institucional
- 2.2 Oficina de Control Selectivo

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

- 3.1 Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática
- 3.2 Oficina de Asesoría Jurídica
- 3.4 Oficina de Recursos Humanos



4. ÓRGANOS DE LÍNEA

- 4.1 Gerencia de Administración y Finanzas
- 4.2 Gerencia de Comercio Industrial
- 4.3 Gerencia de Comercio Tradicional



5. SUCURSALES, AGENCIAS Y UNIDADES OPERATIVAS

- 5.1 Sucursales
- 5.2 Agencias
- 5.3 Unidades Operativas





MINISTERIO PUBLICO
OCTAVA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL
CALLAO
Jr. Supe N° 544 – Urb. Santa Sur
Callao

INGRESO N° 601-2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DEFINITIVO N° 253 -2012

Callao, veintidós de noviembre
del año dos mil doce.-

DADO CUENTA

En la fecha, los actuados en relación a la investigación preliminar seguida contra **SCOTT EDUARDO ANGELDONIS SALINAS**, por la presunta comisión del delito contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas – **MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS**, en agravio de *Estado*.

I. ANTECEDENTES

1. Se tiene a la vista el Atestado N° 149-2012-REGPOL—C/DIVTER-2-CSC-DEINPOL que corre a fojas 2/24, confeccionado por Comisaría PNP Sarita Colonia en la cual se da cuenta de la posible comisión del delito contra la Salud Pública – **MICROCOMERCIALIZACIÓN** por parte de **SCOTT EDUARDO ANGELDONIS SALINAS**, en agravio del Estado.
2. Que los cargos se sustentan en que con fecha 16 de julio del 2012, a las 21:16 horas aproximadamente, en circunstancias que personal policial de la DOPE PNP se encontraba patrullando por las inmediaciones del AAHH Villa Mercedes en el Callao interviniendo a la persona de Scott Eduardo Angeldonis Salinas a quien se le halló en su registro personal cinco (05) envoltorios de papel platino de color amarillo conteniendo en su interior hierba seca al parecer marihuana.

II. ACTUACIONES

A fojas 07 obra la ocurrencia de calle común N° 214 que da cuenta de la intervención de la persona de Scott Eduardo Angeldonis Salinas en posesión de cinco envoltorios con hierba seca al parecer marihuana.

De la manifestación del investigado Scott Eduardo Angeldonis Salinas (fs. 09/10) se desprende el reconocimiento por su parte de la posesión de la sustancia incautada, señalando que había adquirido la cantidad de seis envoltorios y fue intervenido mientras estaba consumiendo el primero, razón por la cual sólo se le encontró cinco, sustancia toxica que adquiere con el producto de su trabajo como obrero en construcción civil; asimismo refiere no haber sido investigado ni intervenido o detenido por ningún delito anteriormente.

3. Obra en autos el resultado preliminar de análisis químico de drogas N° 7945/12 (fs. 18) practicada a la sustancia hallada en posesión del

Dra. Haydée O. Cuba Valeriosas
Fiscal Provincial Penal del
Callao



MINISTERIO PÚBLICO
OCTAVA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL
CALLAO
Jr. Supe N° 544 - Urb. Santa Sur
Callao

denunciado, obteniendo como resultado positivo para Cannabis Sativa (Marihuana) y un peso neto de ocho gramos (8 grs.)

4. Asimismo se aprecia de los actuados a fojas 20, el Dictamen Pericial Químico Forense N° 10092/12 practicado al denunciado con resultado positivo para análisis de drogas (cocaína y marihuana) y negativo para dosaje etílico y sarro ungueal.
5. Conforme a las impresiones de antecedentes y requisitorias a fojas 22 y 23 respectivamente se observa que el denunciado no registra antecedente alguno.

III. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO

1. La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público confieren a esta Institución un conjunto de funciones específicas radicadas en la promoción de la acción de la justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la Ley. Desde esta perspectiva, se entiende que el Ministerio Público es un órgano a través del que se reconduce el interés general en mantener o restablecer el orden jurídico y, desde la función propiamente penal, la Constitución le ha impuesto la titularidad del ejercicio de la acción penal y la conducción de la investigación del delito desde su inicio.
2. En este orden de ideas, conforme a las exigencias de un *Estado Social y Democrático de Derecho*, a efectos de que el Ministerio Público formule oportuna y debidamente una hipótesis inculpativa válida ante el Órgano Jurisdiccional se requiere de una actuación mínima de investigación que genere la convicción de la existencia de causa probable que justifique la promoción de la acción penal, con respeto de las reglas del principio del Debido Proceso; vale decir, se deberá verificar la presencia de los siguientes presupuestos de procedencia de la acción: **a)** Indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito. **b)** Individualización a los presuntos autores o partícipes. **c)** Que la acción penal se encuentre expeditiva, es decir, que no concurra ninguna causa de extinción de la acción penal. **Caso contrario, de no apreciarse la concurrencia de tales presupuestos de procedencia, el Fiscal así lo declarará**, esto conforme a lo preceptuado en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales.

Que el delito de Microcomercialización de Drogas bajo análisis se encuentra regulado dentro de los parámetros del Inc. 1 del primer párrafo del Art. 298 del C.P. que dice "La pena... cuando: 1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, **cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados** o dos gramos de éxtasis ..."

Un. Pericial Q. y Q. de Laboratorio
Fiscalía Provincial Penal del
Callao





MINISTERIO PÚBLICO
OCTAVA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL
CALLAO
Jr. Supe N° 544 – Urb. Santa Sur
Callao

10. Por último es menester hacer presente que el delito bajo análisis requiere para su configuración que la droga incautada, este destinada a la venta, debiendo concurrir el elemento subjetivo del tipo como es el dolo, entendido éste como el conocimiento y voluntad en tener la droga para su venta, elemento que no se aprecia en autos.
11. Asimismo en la sentencia recaída en el expediente N° 06177-2005-PHC/TC:
“... el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica ...”
12. Por otro lado, el Tribunal Constitucional estableció con respecto a la insuficiencia probatoria que “... este Colegiado se vea obligado a desestimar la presente demanda esencialmente por las razones de insuficiencia probatoria aquí graficadas, no significa que se esté renunciando a favor o en contra de la legitimidad en torno de la pretensión de fondo, sino únicamente subraya la necesidad de que la demanda interpuesta, en caso de que resulte replanteada, sea canalizada con mayores elementos de discernimiento que los que actualmente aparecen en el expediente”.¹

PRONUNCIAMIENTO:

Por lo anteriormente expuesto, ésta Fiscalía Provincial en lo Penal, de conformidad con el artículo 159° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 12° y 94° , inciso 2) del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público **RESUELVE: NO HABER MERITO** para promover acción penal contra **SCOTT EDUARDO ANGELDONIS SALINAS**, por la presunta comisión del delito contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas – **MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS**, en agravio de **Estado**; disponiéndose el **ARCHIVO DEFINITIVO** de los actuados. Regístrese y notifíquese. –

HCV/lrb



Haynes O. Cuba Valdegliesias
Fiscal Provincial Titular de la
Octava Fiscalía Provincial Penal del
Callao

¹ Expediente 6219-2006-PA/TC

posesión de droga alguna.

9. A fs. 66/69, obra la **manifestación preliminar de Maritza Pilar Müller Pinto**, quien en presencia del Representante del Ministerio Público expresó que el día 25 de noviembre de 2016, su hijo Jefferson se encontraba tomando cerveza en la esquina de su casa, por lo cual salió a decirle a los chicos que lo acompañaban para que coman, cuando en eso llegó un carro de los TERNAs y se pararon en la esquina pidiendo documentos, siendo que una mujer policía le pidió los documentos, luego de lo cual regresaron a la esquina y posteriormente los policías se pusieron a su costado y se la llevaron al carro, metiendo a su hijo Jefferson y a su sobrino Jorge, para luego presentarse su hermano Germán, para luego llevarlo a otro ambiente del domicilio, donde no vive, para "sembrarla", precisando que en dicho lugar vive su hermano mayor Raúl Córdoba Pinto, para luego llevarlos a la comisaría echándole una bolsa de color verde la cual se la pusieron a todos; además precisó que al ser revisada no le encontraron nada y que no se le encontró en posesión de droga, negando dedicarse a la microcomercialización, por otra parte reconoce que antes era consumidora, por lo cual estuvo internada en REMAR y que actualmente se encuentra rehabilitada.
10. A fs. 70/70-vuelta, obra la manifestación preliminar del SO3° **PNP** Jhoan Pool Calderón Zambrano, quien sin presencia del Representante del Ministerio Público expresó que unos moradores del Jr. Victoria del barrio Constanzo, le comunicaron que un varón y una mujer se dedicarían a la venta de drogas, por lo cual realizaron la intervención de los imputados, ratificándose además en el contenido y firma del Acta de registro personal.
11. A fs. 71/71-vuelta, obra la manifestación preliminar del SO3° **PNP** Wilfredo Rivas Huamaní, quien sin presencia del Representante del Ministerio Público expresó que unos moradores del barrio Constanzo, le comunicaron que unos sujetos se dedicarían a la venta de drogas, por lo cual realizaron la intervención de los imputados, quienes al verlo escondieron dentro de sus pertenencias droga, ratificándose además en el contenido y firma del Acta de registro domiciliario.
12. A fs. 72/72-vuelta, obra la manifestación preliminar de la SO3° **PNP** María López Sivrichi, quien sin presencia del Representante del Ministerio Público expresó que unos moradores del Jr. Victoria del barrio Constanzo, le comunicaron que un varón y una mujer se dedicarían a la venta de drogas, por lo cual realizaron la intervención de los imputados quienes al verlo escondieron dentro de sus pertenencias droga, ratificándose además en el contenido y firma del Acta de registro personal.
13. A fs. 73/73-vuelta, obra la manifestación preliminar del SO3° **PNP** Hanz Pedro Verón Cueva, quien sin presencia del Representante del Ministerio Público expresó que unos moradores del Jr. Victoria del barrio Constanzo, le comunicaron que un varón y una mujer se dedicarían a la venta de drogas, por lo cual realizaron la intervención de los imputados, quienes al verlo escondieron en sus prendas droga, la cual fue hallada

ratificándose además en el contenido y firma del Acta de registro personal.

14. A fs. 74/74-vuelta, obra la manifestación preliminar del SO3° **PNP** Miguel Ángel Mamani Flores, quien sin presencia del Representante del Ministerio Público expresó que unos moradores del Jr. Victoria del barrio Constanzo, le comunicaron que un varón y una mujer se dedicarían a la venta de drogas, por lo cual realizaron la intervención de los imputados, quienes al verlo escondieron en sus prendas droga, la cual fue hallada ratificándose además en el contenido y firma del Acta de registro personal.

15. A fs. 140, obra el Dictamen pericial forense de examen de toxicológico N° 20926/16, en el que se tiene como resultado de análisis de drogas practicado a **todos los imputados, positivo para marihuana.**

16. A fs. 143/144, obra el Dictamen pericial química droga N° 13818/2016, en el que luego del análisis de la droga incautada se concluyó que:

16.1. Las muestras M1 (correspondientes a la droga incautada a **Maritza Pila Müller Pinto**) corresponden a un peso neto de cuatro gramos (**4 g**) de cannabis sativa (**marihuana**) y un gramo (**1g**) de **clorhidrato de cocaína.**

16.2. Las muestras M2 (correspondientes a la droga incautada a **Jorge Enrique Müller Silva**) corresponden a un peso neto de un gramo (**1 g**) de cannabis sativa (**marihuana**) y un gramo (**1g**) de **clorhidrato de cocaína.**

16.3. Las muestras M3 (correspondientes a la droga incautada a **Germán Müller Pinto**) corresponden a un peso neto de cuatro gramos (**4 g**) de cannabis sativa (**marihuana**) y un gramo (**1g**) de **clorhidrato de cocaína.**

16.4. Las muestras M4 (correspondientes a la droga incautada en el domicilio sito **Jr. Victoria Mz. B Lt. 8 – Jr. Constanzo – Callao**) corresponden a un peso neto de treinta y un gramos (**31 g**) de cannabis sativa (**marihuana**).

ANÁLISIS DE LOS HECHOS:

17. Debe tenerse en consideración que la investigación preliminar, tiene como fin el acopiar los indicios de criminalidad necesarios para sustentar válidamente el ejercicio de la acción penal; posibilitando a través de dicha investigación el esclarecimiento de los hechos considerados delictuosos, descubrir los pormenores de su perpetración, la identificación del autor o autores, y esencialmente, la búsqueda de los elementos indiciarios para su posterior análisis judicial, sin soslayar de que una de las cuestiones básicas de dicha investigación es averiguar si se reúnen o no los presupuestos de la realización del delito.

18. Conforme a lo establece el artículo 77.6° del Código de Procedimientos Penales, para aperturar instrucción, entre otros presupuestos, se requiere haber individualizado al presunto autor o partícipe de un delito concreto, entendiéndose que su incumplimiento constituye una causal de inadmisibilidad de promoción de la acción penal.

19. Para efectos de sustentar una denuncia penal no es suficiente basarse en meras suposiciones subjetivas, sino que para ello resulta necesario o imprescindible contar con elementos idóneos que infieran indicios o elementos probatorios de responsabilidad en la persona que se va a denunciar, es necesario que las imputaciones de los denunciante sean corroboradas con pruebas objetivas suficientes que lleven a la convicción que efectivamente se han realizado los hechos que se denuncian, y a efectos de determinar la comisión de un ilícito penal, es necesario que las imputaciones de la denunciante sean corroboradas con indicios de criminalidad suficientes que lleven a la convicción que efectivamente se habrían realizado los hechos que se denuncian.

20. Que, el delito de **Trafico Ilícito de Drogas (Microcomercialización)**, se encuentra descrito en el segundo párrafo del artículo 296° (tipo base) tipificando la posesión de droga para el tráfico ilícito, en concordancia con la circunstancia atenuante específica del inciso 1) del artículo 298° del Código Penal, que se aplica cuando la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas. El cual es una infracción penal de peligro abstracto, en el que el delito ***se perfecciona con la mera posesión de la droga con fines de comercialización***, resultando indiferente si la comercialización de la sustancia incautada se concreta o no¹.

21. En cuanto a la imputación realizada contra los investigados Jorge Enrique Müller Silva, Germán Müller Pinton y Maritza Pilar Müller Pinto, se tiene que fueron intervenidos por personal policial, en circunstancias que se encontraba por las inmediaciones del Jr. Victoria Mz. B Lt. 8 – Jr. Constanzo – Callao, encontrándose a Maritza Pilar Müller Pinto con un peso neto de cuatro gramos (4 g) de cannabis sativa (marihuana) y un gramo (1g) de clorhidrato de cocaína; a Jorge Enrique Müller Silva con un peso neto de un gramo (1 g) de cannabis sativa (marihuana) y un gramo (1g) de clorhidrato de cocaína; a Germán Müller Pinto con un peso neto de cuatro gramos (4 g) de cannabis sativa (marihuana) y un gramo (1g) de clorhidrato de cocaína; y en el domicilio sito en Jr. Victoria Mz. B Lt. 8 – Jr. Constanzo – Callao se halló un peso neto de treinta y un gramos (31 g) de cannabis sativa (marihuana); de acuerdo a lo consignado en las respectivas Actas de registro personal y comiso de droga (apartados 3, 4 y 5), en el Acta de registro domiciliario, hallazgo y comiso de droga (apartado 6) y el resultado del Diktamen pericial química droga N° 13818/2016 (apartado 16).

22. Ante ello, los investigados han negado dedicarse a la venta de drogas, negando haberse encontrado en posesión de la droga consignada en las respectivas Actas de registro personal y domiciliario, debido a lo cual no suscribieron las mismas (apartados 7, 8, 9); evidenciándose que, de la revisión de los actuados, las declaraciones testimoniales de

1 Ejecutoria Suprema del 2/12/94 EXP. N° 78-93-LORETO.

los efectivos policiales intervinientes no refieren haber encontrado a los inervenidos realizando actos de tráfico, pues si bien expresaron que testigos de referencia a los que identifican como "unos moradores del barrio Constanzo" los cuales les comunicaron que los imputados se dedicarían al tráfico ilícito de drogas (apartados 10, 11, 12, 13 y 14), no se ha podido identificar a las personas que realizaron dichas imputaciones; asimismo no obra en autos otro elemento de prueba que haga presumir que la droga que tenían en su posesión tendría fines de comercialización, ni que se lea haya encontrado realizado actos de tráfico, en la modalidad de microcomercialización; más aun si en autos se encuentra acreditado que serían consumidores de marihuana (apartado 15) ante estas consideraciones y al no existir elemento que pruebe que la posesión de la droga estaría destinada al tráfico ilícito, ni testimonio que los incrimine, este Ministerio Público considera que no existen indicios de criminalidad para ejercitar la acción penal contra los investigados por la presunta comisión de Tráfico Ilícito de Drogas (Microcomercialización).

DECISIÓN:

23. En consecuencia, estando a los apartados precedentes a la presente; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º y 94º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público; la Primera Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao; **RESUELVE:** **NO HABER MÉRITO PARA EJERCITAR ACCIÓN PENAL** contra **JORGE ENRIQUE MÜLLER SILVA, GERMÁN MÜLLER PINTO Y MARITZA PILAR MÜLLER PINTO** por la presunta comisión del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas – **MICROCOMERCIALIZACIÓN** en agravio del Estado; disponiéndose el **ARCHIVO DEFINITIVO** de los actuados. **Regístrese y Notifíquese.**

CAAL/ibb



Marzo 2017 / N.º 33

DIRECTORES

José Luis Castillo Alva
Percy García Caverio
Raúl Pariona Arana
Pablo Talavera Elguera
Felipe Villavicencio Terreros

CONSEJO EDITORIAL

Mario Amoretti Pachas
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
José Neyra Flores
(Universidad de San Martín de Porres)
Víctor R. Prado Saldarriaga
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Luis E. Roy Freyre
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
César San Martín Castro
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Javier Villa Stein
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Claus Roxin
(Universidad de Múnich, Alemania)
Bernd Schünemann
(Universidad de Múnich, Alemania)
Luis Gracia Martín
(Universidad de Zaragoza, España)
José M. Zugaldía Espinar
(Universidad de Granada, España)
José M. Asencio Mellado
(Universidad de Alicante, España)
Manuel Cancio Meliá
(Universidad Autónoma de Madrid, España)
Laura Zúñiga Rodríguez
(Universidad de Salamanca, España)
Olga Fuentes Soriano
(Universidad Miguel Hernández de Elche, España)
Mercedes Fernández L.
(Universidad de Alicante, España)
Diego-Manuel Luzón Peña
(Universidad de Alcalá, España)



INSTITUTO PACÍFICO
Actualidad Penal
Al día con el Derecho

PENAL • PROCESAL PENAL • PENITENCIARIO • CRIMINOLOGÍA

Especial

Decretos Legislativos N.ºs 1298, 1307 y 1352.
Comentarios a las últimas modificaciones

CONTENIDO

DERECHO PENAL - PARTE GENERAL

La pena de inhabilitación en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos
La naturaleza jurídica del delito continuado

DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL

El crimen organizado transnacional
Atentado a la integridad de sistemas informáticos

DERECHO PROCESAL PENAL

Flagrancia delictiva y actuaciones policiales
Flagrancia delictual desde la perspectiva del tercero
El proceso inmediato en el Código Procesal Penal peruano

DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL

El principio de la dignidad humana
El antejuiicio político y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria

DERECHO PENITENCIARIO

Principios inspiradores de la potestad disciplinaria penitenciaria

CRIMINOLOGÍA / POLÍTICA CRIMINAL

Delito de financiamiento y uso ilegal de recursos y aportes de los partidos políticos

CONSULTAS • ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL •
ACTUALIDAD LEGAL • JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Indexada en:

latindex

Sobre la
revisión
Caso Nivel internacional

NORMAS PARA LOS COLABORADORES

La revista *Actualidad Penal* acepta artículos y comentarios de jurisprudencia inéditos.

Las temáticas que abordamos están vinculadas con: derecho penal (parte general y especial), derecho procesal penal, derecho penal constitucional, litigación estratégica, derecho penitenciario, criminología y política criminal.

Artículo. Estudio que presenta de manera detallada los resultados de una investigación sobre una institución o una materia jurídica. El texto se presenta desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, recurriendo a fuentes originales (doctrinaria, jurisprudencial y legislativa).

Comentario de jurisprudencia. Estudio que presenta el análisis de una sentencia desde una perspectiva interpretativa o crítica, recurriendo a fuentes originales (doctrinaria, jurisprudencial y legislativa).

Forma de presentación de los artículos o comentarios

Los artículos deben ajustarse a las siguientes características:

- En la primera página de los manuscritos enviados para publicar debe aparecer el título conciso del trabajo, el subtítulo (si lo tuviera) y el nombre completo del autor; al pie de la página, sus grados académicos y procedencia universitaria, cargo e institución a la que pertenece y dirección electrónica.
- Deben acompañarse de un resumen breve y global que sintetice el trabajo realizado (aprox. 50 palabras); además, deben señalarse tres o cuatro palabras clave que identifiquen el campo y el área en que se enmarca el artículo. El resumen, título y palabras clave también debe enviarse en el idioma inglés (*abstract, title and keywords*).
- Los manuscritos tendrán una extensión de 10 páginas en promedio, fuente *Times New Roman* de 12 puntos e interlineado sencillo. En el caso de los comentarios de jurisprudencia se debe adjuntar la resolución objeto del comentario.
- Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final del texto, ordenado alfabéticamente. Estas serán únicamente las citadas en el texto, y con los datos completos.
- Los subtítulos deben clasificarse en números arábigos (como el modelo de las siguientes páginas).
- El contenido del manuscrito debe ser original y no haber sido copiado. El plagio, en todas sus manifestaciones, constituye falta grave de ética, además de configurar un delito, el cual se considera fraude científico. Se deben usar las comillas para indicar las palabras de otro, o cuando se parafrasee, se debe dar crédito al autor de la fuente.

Estructuración del manuscrito

Elementos de la responsabilidad civil extracontractual

1. El hecho causante del daño
2. El daño o perjuicio
 - 2.1. El objeto del daño
 - 2.2. Sujetos del daño
 - 2.2.1. El agente causante del daño o sujeto activo
 - 2.2.2. Sujeto pasivo o víctima del daño
 - 2.3. Entidad y magnitud del daño
 - 2.4. Tipos de daños
 - 2.4.1. Daños resarcibles
 - 2.4.2. Daños no resarcibles
 - A. Daños autorizados o justificados
 - a. Daños ocasionados en ejercicio legítimo de un derecho

Referencias bibliográficas

- Libros con un autor
CASTILLO ALVA, José Luis, *El delito de negociación incompatible*, Lima: Instituto Pacífico, 2015.
- Libros con varios autores
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALEJANDRO ALAGIA y ALEJANDRO SLOKAR, *Manual de derecho penal. Parte general*, Buenos Aires: Ediar, 2005.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio; LUIS ARROYO ZAPATERO; NICOLÁS GARCÍA RIVAS; JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ y JOSÉ RAMÓN SERRANO PIEDECASAS, *Lecciones de derecho penal. Parte general*, 2.ª ed., Barcelona: Praxis, 1999.
- Libros traducidos
JESCHECK, Hans-Heinrich y THOMAS WEIGEND, *Tratado de derecho penal. Parte general*, vol. I, traducción de la 5.ª edición alemana (1996), renovada y ampliada por Miguel Olmedo Cardenete, Lima: Instituto Pacífico, 2014.
- Artículos en libros colectivos
HÖRNLE, Tatjana, "Responsabilidad democrática y participación de legos en los procesos penales", en REYNA ALFARO, Luis (coord.), *El proceso penal acusatorio*, Lima: Instituto Pacífico, 2015, pp. 197-218.
- Artículos en revistas
MUÑOZ LORENTE, José, "La 'venta' de influencias reales o simuladas en el Código Penal peruano y su relación con el ejercicio legítimo de la profesión de abogado. La derogación de facto del delito efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la República", en *Actualidad Penal*, vol. 19, Lima: enero del 2016, pp. 66-86.

Revisión

Los art
bitrado
se ocul
En la e
Los tra

- **Artículos online**

NIEVA FENOLL, Jordi, "La razón de ser de la presunción de inocencia", en *Indret*, N.º 1/2016, Barcelona: enero del 2016. Recuperado de <http://www.indret.com/pdf/1203_es.pdf>.

- **Tesis**

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino, *El resarcimiento del daño en el proceso penal*, tesis para optar el grado académico de magíster con mención en Ciencias Penales, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999.

- **Resoluciones**

SALA PENAL PERMANENTE (ponente: Sr. Juez Josué PARIONA), *Recurso de Nulidad N.º 1843-2014 Ucayali*, Lima: 4 de junio del 2015.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, *Expediente N.º 01170-2012-PA/TC*, Lima: 31 de marzo del 2015.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso *Usón Ramírez vs. Venezuela*, San José: 20 de noviembre del 2009.

- **Leyes**

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, *Ley N.º 29647: Ley que proroga el plazo legal y restituye beneficios tributarios en el departamento de Loreto*, Lima: 1 de enero del 2011.

Revisión de los artículos y comentarios

Los artículos y comentarios recibidos, antes de su publicación y de manera anónima, serán arbitrados por los evaluadores externos a la revista (la identidad de los autores de los manuscritos se oculta a los revisores durante el proceso de revisión).

En la etapa de revisión, el autor no podrá enviar el manuscrito a otras revistas.

Los trabajos pueden remitirse a: actualidadpenal@institutopacifico.com.pe



vulneró, en tal virtud, el artículo 139, apartado 3, segundo párrafo, de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado 1, literal a del Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal d, del aludido Código. Ello determina a su vez que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso 2 del artículo 429 del Código citado.

La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Como no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones —que, por lo demás, ha de ser interpuesto en la instancia respectiva—; y, dado que la pretensión impugnativa está dirigida contra todo el procedimiento y, señaladamente, contra las sentencias de mérito, lo que único que se exige es que se plantee adecuadamente como un motivo impugnativo puntual —que es lo que se ha hecho—. Por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes.

Séptimo: Que, de otro lado, en los mareos de la petición impugnativa se solicita que la nulidad alcance al mandato de prisión preventiva y, por tanto, que se dicte la inmediata libertad del imputado Benites Rodríguez. Sobre el particular es de rigor puntualizar lo que estableció el *Acuerdo Plenario N.° 2-2016/CJ-116*, f. j. n.° 23-D, del uno de junio del dos mil dieciséis. La desestimación de la incoación del proceso inmediato no trae consigo necesariamente la anulación de la prisión preventiva; y, la modificación de esta medida de coerción personal, requiere petición de parte, unida a un debate sobre los presupuestos materiales correspondientes. Empero, lo que es singular en el presente caso es el tiempo de privación procesal de la libertad: ya alcanza cerca de los catorce meses. Como el plazo ordinario de la prisión preventiva, en estos casos, es de nueve meses (artículo 272, apartado 1 del Código Procesal Penal), es evidente que ya venció (se dictó el veinte de enero del dos mil dieciséis) —no cabe tomar en cuenta la mitad de la pena impuesta, porque la consecuencia de amparar el recurso de casación es la anulación de las sentencias de mérito, luego, la causa debe retrotraerse a la etapa de investigación preparatoria—. Rige para esta solución, el artículo 273 del citado Código, que es del caso aplicar.

DECISIÓN

Por estas razones:

- I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por quebrantamiento del precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado Maximiliano Benites Rodríguez contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, del veintidós de junio del dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, del quince de febrero del dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: NULA la sentencia de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde:

declararon SIN proceso inmediato sin perjuicio de las diligencias de diligencias preliminares.

II. ORDENARON la Fiscalía Provincial de la Investigación.

III. DECRETARON por vencimiento del artículo 273 del Código de Procedimiento Penal, se comuniquen a los señores jueces y Piura sin auto de fe y se presente a la instancia respectiva, para i su excarcelación de prisión preventiva.

IV. DISPUSIERON que, seguido, se notifique.

V. MANDARON que, al origen, y las señoras juezas los señores jueces.

S.S.

SAN MARTÍN C. CHEZ ESPINOZA

institución,
se incurreó
ódigo. Ello
lecida en el

ni conve-
revistas en
pectiva del
nes radical.
r lo demás,
pnugnativa
ntencias de
un motivo
s lesivos del
es, elimina-
ensa el

icita que la
i inmediata
tualizar lo
o de junio
ato no trae
ión de esta
bre los pre-
te caso es el
ses. Como
es (artículo
tó el veinte
i impuesta,
i sentencias
aratoria—
icar.

cepto pro-
guez contra
il dieciséis,
el quince de
n sexual de
erapéutico,
demás que
ISTENTE
corresponde:

declararon SIN EFECTO todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, del veintiuno de enero del dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental, los informes o dictámenes periciales, las diligencias objetivas e irreproducible y en lo pertinente, de las actas que contienen las diligencias preliminares.

II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.

III. DECRETARON la inmediata libertad del encausado Maximiliano Benites Rodríguez por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal, ESTABLECIERON que el citado encausado i) no se comunique con la agraviada y su familia; ii) no se ausente de las provincias de Sullana y Piura sin autorización del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria competente; y, iii) se presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta sede Suprema.

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. Intervienen las señoras juezas supremas Sánchez Espinoza y Zavina Chávez Mella por vacaciones de los señores jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga y Jorge Luis Salas Arenas, respectivamente.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO/ BARRIOS ALVARADO/ PRÍNCIPE TRUJILLO/ SÁNCHEZ ESPINOZA/ CHÁVEZ MELLA

tificó, quién lo hizo y la detención policial consiguiente: estelar, en esa intervención, fue la declaración de la denunciante Mercedes Albuquerque Roa de Albán.

Estos son los hechos procesales relevantes y definidos en las sentencias de mérito. Por ende, sobre esa base es que debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y si en su actuación se vulneraron derechos básicos de carácter procesal del imputado, al punto que las sentencias de condena emitidas no pueden sostenerse por carecer de eficacia procesal.

Tercero: Que el artículo 446, numeral 1, literal a, del Código Procesal Penal, estatuye que el proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, "el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259". La norma de remisión (artículo 259 del citado Código), en el inciso tercero, dispone que existe flagrancia, y permite la detención por la Policía, cuando: "3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, [...], y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas producido el hecho punible".

En estos casos, como es obvio por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales —la flagrancia, como institución procesal, tiene un objetivo instrumental para facilitar la actuación de la autoridad policial o para instituir procedimientos simplificados y célere—, la interpretación de las normas que lo autorizan, por sus efectos, debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal.

Cuarto: Que la flagrancia es una institución procesal de carácter instrumental o medial, a cuyo amparo se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales (medidas de coerción o medidas instrumentales restrictivas de derechos) con fines de investigación del delito y, en su caso, poder instaurar procedimientos simplificados que dan lugar a una decisión célere. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino; y, como tal, debe cometerse públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra (evidencia o percepción sensorial del hecho delictivo), y que ante la realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del delincuente. La inmediatez que ello implica hacer patente el hecho delictivo —la flagrancia se ve, no se demuestra— y su comisión por el detenido, de suerte que como existe una percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, intuición o deducción. Se asume, por ello, que todos los elementos del hecho están presentes y que no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación del detenido [Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CJ-116, f. j. n.º 8-A del uno de junio del dos mil dieciséis].

Lo últimamente expuesto, de uno u otro modo, se recoge en el citado artículo 259, apartado 3 del Código Procesal Penal, más allá de la dudosa extensión en la captura del delincuente de hasta veinticuatro horas después del hecho delictivo. Se trata de la denominada *cuasi flagrancia*, en cuya virtud el delincuente sorprendido en plena comisión del hecho punible o cuando inmediatamente acaba de cometerlo —pero siempre en el mismo rea-

tro de los hechos— por diversos factores o circunstancias, logra huir de la escena del delito, no obstante lo cual ha sido reconocido o identificado por la propia víctima, por la policía o, en todo caso, por un testigo presencial —este último puede ser el acompañante del agraviado o un tercero que se encontraba por el lugar de los hechos—.

Ser testigo presencial del delito —verbigracia: víctima, policía, sereno u otra persona— importa que directamente y a través de sus sentidos expone acerca de lo que observó y esta observación está referida, precisamente, a la comisión de un delito. No cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado —su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas [*Diccionario del español jurídico*, Madrid: RAE-CGPJ, 2016, pp.1575 y 1576]—; y, por tanto, en tanto prueba indirecta —al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos—, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial.


Cabe acotar, desde ya, por su carácter de medio de prueba subsidiaria, sirve *i)* para identificar a la persona que realmente tiene conocimiento directo de las circunstancias sobre las que declara, *ii)* para valorar la credibilidad y habilidad de otro testigo —presencial o de referencia inclusive—, o *iii)* para probar la existencia o no de corroboraciones periféricas —por ejemplo, para coadyuvar a lo que sostiene el testigo único— (SSTSE del treinta de abril del dos mil trece y del treinta de setiembre del dos mil dos).

Quinto: Que en el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella con independencia de lo que mencionó la niña agraviada y del valor probatorio que puede otorgársele a su testimonio, lo cierto que el delito *sub judice* no puede calificarse de flagrante. Nadie, excepto la propia víctima, presenció la violación que ha sido objeto de denuncia, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y sentencia. Ni siquiera se recogió en ese acto, o inmediatamente después, algún vestigio material, todo queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de sus familiares —que afronta una problemática en orden a su veracidad y credibilidad—, y a la negativa del imputado, sin perjuicio de la prueba pericial recabada. Un caso como el aludido requiere de un elaborado análisis deductivo, de un riguroso análisis de la versión de la víctima, y de una actividad probatoria variada o diversa, tanto más *i)* si no se cuenta con vestigios materiales y fluidos corporales examinados pericialmente, *ii)* si la captura no se produjo en el mismo momento o instantes después de sucedido el hecho delictivo —a las veintidós horas del mismo, al día siguiente—, y *iii)* si el imputado niega los cargos, quien incluso está en la posibilidad de ofrecer, desde la perspectiva de un procedimiento más extenso, prueba documental y personal de descargo. Por lo demás, se está ante un delito especialmente grave, que está asociado a la pena más grave del sistema penal: cadena perpetua, por lo que por razones de estricta proporcionalidad no puede solventarse, sin prueba evidente derivada de la flagrancia, en un proceso célere y reducida actuación probatoria, como el inmediato [*Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CJ-116*, f. j. n.º 10, del uno de junio del dos mil dieciséis].

Sexto: Que, en consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivan dolo irrazonablemente al proceso inmediato. Se

pag. 252
la flagrancia se ve, no
se demuestra

obviando los elementos razonables de configuración de la flagrancia, en tanto, han dispuesto el trámite del proceso inmediato —tal es el asunto tratado por la Casación N° 842-2016-Sullana—.

Para la incoación del proceso especial de inmediato, en el supuesto regulado por el artículo 446.1, literal a) del CPP, modificado por el D. Leg. N° 1194, se necesita la configuración de la denominada *flagrancia clásica* y relativamente la *cuasi flagrancia*. En cambio, la *flagrancia extendida* ofrece dificultades debido a que no se sustenta en prueba directa o evidencia delictiva. 

8. Referencias bibliográficas

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUALIDAD JURÍDICA, "Cómo aplicar el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva", en *Actualidad Jurídica*, t. 266, Lima: enero del 2016.

FRANCO GONZALES, César Alejandro, "El beneficio de la confesión sincera en los supuestos de flagrancia delictiva presunta y su justificación en el proceso inmediato", en *Actualidad Penal*, n.º 31, Lima: enero del 2017.

GARCÍA CALIZAYA, Carmelo, "Acerca de los supuestos de aplicación del nuevo proceso inmediato (D. L. N.º 1194)", en *Actualidad Penal*, n.º 21, Lima: marzo del 2016.

GARCÍA RADA, Domingo, *Instituciones de derecho procesal penal. Obras completas*, t. I, 2.ª ed., Lima: Asociación civil "Mercurio Peruano", 2009.

HERRERA GUERRERO, Mercedes, "El carácter excepcional del proceso inmediato en el Decreto Legislativo N.º 1194. Especial referencia a los presupuestos materiales", en HERRERA GUERRERO, Mercedes (coord.), *El proceso inmediato*, Lima: Instituto Pacífico, 2017.

JAUCHEN, Eduardo, *Tratado de derecho procesal penal*, t. II, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2012.

MENDOZA AYMA, Francisco Celis, "La prueba en el proceso inmediato. Un enfoque metodológico", en *Ius in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, pp. 100-113. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

PARÍ TABOADA, Roger, "Consideraciones prácticas sobre el proceso inmediato", en *Ius in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, pp. 43-59. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

SALAS ARENAS, Jorge Luis, "El proceso inmediato", en *Ius in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, pp. 7-30. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

SALAS ARENAS, Jorge Luis, "Cuestiones problemáticas del proceso inmediato según el Decreto Legislativo N.º 1194", en REVILLA LLAZA, Percy (coord.), *El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción*, Lima: Gaceta Jurídica, 2016.

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, "La incoación del nuevo proceso inmediato: Reflexiones", en REVILLA LLAZA, Percy (coord.), *El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción*, Lima: Gaceta Jurídica, 2016.

aciones
)", en *Ius
ctualidad*
del 2016,
iLD>.

p. 65-75
en línea)

Séptimo: Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día se acordó por unanimidad dictar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Que, como ha quedado establecido en los fundamentos de hecho de la presente sentencia, es del caso determinar si se interpretó y aplicó correctamente los presupuestos legales que rigen la incoación del proceso inmediato reformado, previstos en el artículo 446 del Código Procesal Penal; y, por tanto, si correspondía dilucidar los cargos contra el encausado Benites Rodríguez en un proceso célere y abreviado como el inmediato. Es verdad que el auto que, aceptando el requerimiento de la Fiscalía Provincial, dispuso se siga la causa en la vía inmediata, no fue recurrido por el imputado. Sin embargo, no es posible sostener como regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. Cuando cuestiona sostenidamente —en apelación y casación de las sentencias de mérito— la licitud de la concreta incoación del proceso inmediato, en el que se compromete una garantía constitucional, vinculada al debido proceso, como es la “interdicción de ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley”, a que hace mención el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución, no es de recibo aceptar el principio de convalidación por omisión de cuestionamiento en el momento en que se advirtió su infracción. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150, literal d del Código Procesal Penal), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la ley para el desarrollo de un acto procesal —se circunscribe a los defectos no absolutos—.

Segundo: Que, según el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, del veintuno de enero del dos mil dieciséis, se declaró procedente ese proceso especial porque se estimó que el imputado Benites Rodríguez fue detenido en flagrancia delictiva. La Fiscalía Provincial acompañó a estos efectos la denuncia verbal, la declaración de la víctima y de su madre la declaración del imputado —quien negó los cargos—, actas de reconocimiento en rueda, fotografías, documentos y actas de inspección [requerimiento fiscal de fojas siete, del veinte de enero del dos mil dieciséis].

Es de precisar, como dato esencial, el mérito del acta denominada de “intervención policial”, de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, acompañada por el recurrente en esta sede y al que las sentencias de mérito han hecho mención. Allí se indica que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad policial se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, [...] *la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte [...] en un vehículo menor [...], siendo intervenido e identificado tratándose de la persona de Maximiliano Benites Rodríguez.*

En la sentencia de primera instancia, resumiendo la declaración de la madre de la agraviada, se anotó que “*lo reconoce porque su hija le dio las características [...]; estaba vestido con ropa azul y en la moto roja al momento en que ella lo observó*”. Asimismo, en la audiencia del juicio oral del cinco de febrero del dos mil dieciséis, se ratifica la forma cómo se iden-

la flagrancia se ve no
se demuestra

de la menor lo reconoce porque su hija le dio las características; encontrándose el acusado vestido con ropa azul y en una moto roja al momento en que ella lo observó.

El Tribunal Constitucional ha sostenido que capturar a una persona después de 10 horas de ocurridos los hechos no se verifica el requisito de inmediatez temporal o personal en la comisión del delito¹⁴.

En el caso materia de casación, además, existe ausencia de percepción directa de los hechos, ya que "[...] los policías captores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella"¹⁵.

Cabe recordar que la sindicación de víctimas y testigos, aunque sea en el más breve plazo, sigue siendo una sindicación sujeta a todos los inconvenientes que representa la precariedad de la precisión de nuestros sentidos, afectados, además, por el estrés, emociones y estímulos externos propios del evento traumático recién vivido¹⁶.

14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, *Expediente N.º 6142-2006-HC/TC*, Lima: 14 de marzo del 2007, ff. jj. n.ºs 5 y 6.

15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, *Casación N.º 842-2016-Sullana*, Lima: 16 de marzo del 2017, f.j. quinto.

16 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, "La incoación del nuevo proceso inmediato: Reflexiones", en REVILLA LLAZA, Percy (coord.),

Siendo así, al tramitarse el caso bajo las reglas de un procedimiento excepcional como el proceso inmediato, sin que se haya verificado el presupuesto requerido para su incoación, efectivamente se desvió al procesado del procedimiento preestablecido que es el común, derivándolo al proceso inmediato. En tal virtud, al dejarse de lado el artículo 139.3, segundo párrafo, de la Constitución, también se ha producido una grave vulneración al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en el extremo que señala:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella [...].

Conforme a los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, sobre la observancia de los tratados, la obligación de verificar la conformidad de nuestro derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva del *pacta sunt servanda* que vincula a las partes a cumplir todo tratado en vigor; así, también existe la prohibición de invocar el derecho interno para justificar su incumplimiento.

En suma, en la sustanciación del proceso penal contra Benites Rodríguez, el

El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción, Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 366.

Estado —el Ministerio Público que requirió, el juzgado de investigación preparatoria que declaró procedente la incoación de proceso inmediato, el juzgado penal colegiado que sentenció, y la sala penal de apelaciones que confirmó la sentencia—, debió propiciar condiciones óptimas para oír sus descargos con las debidas garantías, y otorgar las posibilidades para que prepare su defensa, por encima de cualquier simplificación procesal.

No solamente por el carácter excepcional del proceso inmediato, sino, también, porque la pena a imponerse era de cadena perpetua. El acusado involucrado en un tema de violación sexual, en agravio de una menor de edad, de por sí, ya es una persona vulnerable, derrotada moralmente; podrá ser calificado de “miserable”, “indeseable”, condenado, o despreciado por su víctima, por la población, con gran eco en los medios de comunicación. No por ello, el Estado puede consentir su propia actitud enfurecida y vengadora.

Ni la misma flagrancia clásica puede conducir automáticamente al proceso inmediato. La flagrancia existe para el policía que practica la detención, mas no así para el Ministerio Público o el Poder Judicial, que no presenciaron el hecho; lo que crea la necesidad de que se verifiquen actos de investigación que den cuenta no solo de la existencia de un delito sino también de que el imputado fue encontrado en la comisión del mismo. Así, a pesar de que exista flagrancia para quien practica la detención, vemos

la necesidad de que se practique actos de investigación que lo acredite de manera suficiente. Es importante tener presente que los elementos de convicción que se recaban producto de los actos de investigación son importantes para sustentar los requerimientos formulados por el Ministerio Público¹⁷.

CONCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE


Para la incoación del proceso especial de inmediato, en el supuesto regulado por el artículo 446.1, literal a) del CPP, modificado por el D. Leg. N.º 1194, se necesita la configuración de la denominada *flagrancia clásica* y relativamente la *cuasi flagrancia*. En cambio, la *flagrancia extendida* ofrece dificultades debido a que no se sustenta en prueba directa o evidencia delictiva.

7. Conclusiones

Uno de los supuestos más discutibles del proceso inmediato es la flagrancia delictiva, en la situación de las hipótesis introducidas por el vigente artículo 259 del CPP; esta realidad obedece a la amplitud de su contenido, que rebasa el concepto natural de flagrancia. Este contexto, en algunos lugares, hasta ha sugerido a los jueces y fiscales calificar un hecho ilícito como flagrante, inclusive

17 PARI TABOADA, ROGER, “Consideraciones prácticas sobre el proceso inmediato”, en *las in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, p. 45. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

obviando los e configuración c han dispuesto inmediato —ta la Casación N.º

Para la especial de inn regulado por e a) del CPP, mc N.º 1194, se n de la denomin relativamente cambio, la *flag* dificultades del ta en prueba d tiva. 

8. Referencia:

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, “Cómo en casos de flagrancia delictiva”, *Revista Jurídica*, 1

FRANCO GONZALEZ, “El proceso de flagrancia en el proceso penal”, n.º 31,

GARCÍA CALIZAYA, “Los supuestos de flagrancia inmediata (D. Leg. N.º 1194)”, *Revista Jurídica*, n.º 21,

GARCÍA RADA, DO, “El proceso penal”, Lima: Asociac 2009.

Número 34 • Año II
ISSN 2313-268X (impresión) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Además, al hacer lo contrario estaríamos contraviniendo lo dispuesto por el artículo VII.3 del Título Preliminar del CPP, en el extremo que señala que la ley que coacta el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes será interpretada restrictivamente.

En esta punto, es válido lo señalado por SALAS ARENAS, quien anota que la particularidad del ordenamiento procesal peruano radica en que se extiende los alcances de flagrancia que no pueden considerarse para el trámite del proceso inmediato que tiene un alcance excepcional, puesto que en los casos de flagrancia por identificación inmediata y presunta contenidas en los incisos 3 y 4 del artículo 259 del CPP, que establecen hipótesis de identificación en un lapso de 24 horas para el primero y el hallazgo del agente con efectos o instrumentos que indican una probabilidad de autoría o participación, faltando la inmediatez personal y temporal, quedando indicios razonables de la actuación del detenido, por lo que, en tales casos, razonablemente, no cabe el recorte del proceso a una mínima expresión y es preciso optar por un lapso en que el investigado pueda cuestionar la identificación no inmediata y la probabilidad atribuida¹⁰.

10 SALAS ARENAS, Jorge Luis, "Cuestiones problemáticas del proceso inmediato según el Decreto Legislativo N.º 1194", en REVILLA LLAZA, Percy (coord.), *El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia de elementos de convicción*, Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 51.

A su vez, MENDOZA AYMA sostiene que en casos de flagrancia, para la procedencia del proceso inmediato se requiere tres condiciones: i) la situación de flagrancia, ii) causa probable y iii) prueba directa. En ese orden, no procede el inicio del proceso inmediato, aún en supuesto de flagrancia, si la causa probable está configurada con prueba indirecta o indiciaria, pues por su celeridad el diseño normativo del proceso inmediato limita a las partes la producción amplia de prueba¹¹.

¿SABÍA USTED QUE?

El supuesto de flagrancia, por sí sola, para la instauración del proceso inmediato previsto en el artículo 446.1, literal a) del CPP no es absoluto; aun cuando concurra la flagrancia estricta, es posible concurrir al proceso común.

Ahora bien, ocurrido un hecho flagrante se debe verificar si la información, que configura una causa probable, es *directa* o *indirecta*. Si es *indirecta*, se debe obviar la incoación del proceso inmediato, pues *per se* no tiene fuerza acreditativa directa del hecho punible; esa información indirecta puede ser equívoca y servir de base informativa para probar, a su vez, la tesis opuesta

11 MENDOZA AYMA, Francisco Celis, "La prueba en el proceso inmediato. Un enfoque metodológico", en *Ius in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, p. 100. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

de la defensa. Para la procedencia del proceso inmediato, el caso debe ser fácil en el sentido que la información debe tener directa correspondencia con las proposiciones fácticas de la imputación del hecho punible; además, la información producida por las fuentes —en el contexto de la flagrancia— debe tener fuerza acreditativa suficiente y las fuentes deben ser fiables. Con la información *directa* y sus fuentes es suficiente para demostrar la realización del hecho imputado en el plenario del juicio inmediato. La mínima actividad de investigación, en situación de flagrancia, se circunscribe al acopio y aseguramiento de información inmediata y sus fuentes siendo innecesario un plazo para investigar bajo la formalización de la investigación¹².

En consecuencia, el supuesto de flagrancia, por sí sola, para la instauración del proceso inmediato previsto en el artículo 446.1, literal a) del CPP no es absoluto, aun cuando concurra la flagrancia estricta, es posible concurrir al proceso común.

Si bien es cierto, en principio, la flagrancia presunta legitimaría en la práctica la inmediata intervención y detención del imputado para una investigación exhaustiva de su posible participación en los hechos delictuosos; sin embargo, esta situación (de necesidad urgente de la intervención policial) no debe confundirse con la evidencia cierta y manifiesta de la responsabilidad penal

del intervenido, por cuanto, a las 24 horas de acaecido el hecho las notas propias de inmediatez personal e inmediatez temporal del investigado con el delito pueden ser inciertas, razón por la que no se puede pretender la procedencia sin más, del proceso inmediato¹³.

6. Aparente configuración de flagrancia en el caso *Benites Rodríguez*, materia de Casación N.º 842-2016-Sullana

En el caso tratado por la Casación N.º 842-2016-Sullana, expedida por la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, se grafica el uso incorrecto de la flagrancia delictiva al incorporar dentro de los alcances de la misma, hechos que no reúnen las características de inmediatez ni percepción directa.

Ello se advierte de los fundamentos de la referida casación, donde se señala que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad de la policía se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en un vehículo menor, siendo intervenido e identificado; todo esto, luego de 22 horas de ocurrido el hecho denunciado. Se especifica que la madre

12 MENDOZA AYMA, "La prueba en el proceso inmediato", ob. cit., pp. 109 y 110.

13 FRANCO GONZALES, César Alejandro, "El beneficio de la confesión sincera en los supuestos de flagrancia delictiva presunta y su justificación en el proceso inmediato", en *Actualidad Penal*, n.º. 31, Lima: enero del 2017, p. 243.

El artículo 446.1, literal a) del CPP, modificado por el D. Leg. N.º 1194, publicado el 30 de agosto del 2015, establece como uno de los supuestos para la incoación de proceso inmediato a la flagrancia delictiva. En ese sentido, señala que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del CPP.

¿SABÍA USTED QUE?

La *flagrancia extendida* comprende a varias hipótesis que [...] engloba a la denominada *flagrancia por identificación* del agraviado, testigo o equipos audiovisuales, y a la *flagrancia presunta*. Estos tipos de flagrancia dejan de lado los elementos de la percepción directa y a la inmediatez, pese a ello, sus propulsores, pretenden equipararlas a la flagrancia delictiva.

En efecto, el artículo 259 del CPP indica que la Policía Nacional del Perú puede detener, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 1) El agente es descubierto en la realización del hecho punible; 2) el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto; 3) el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con

cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas de producido el hecho punible, y 4) el agente es encontrado dentro de las veinticuatro horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

La flagrancia está vinculada al proceso inmediato, en la medida que habilita su incoación por constituir la evidencia delictiva, verificable suficientemente con los elementos de convicción existentes.

4. Manifestaciones de flagrancia delictiva según el Código Procesal Penal del 2004

En el originario artículo 259 del CPP (D. Leg. N.º 957) las manifestaciones de flagrancia delictiva se pueden agrupar hasta en tres o cuatro denominaciones: 1) la flagrancia tradicional o flagrancia propiamente dicha, 2) la cuasi flagrancia y 3) la flagrancia extendida.

La *flagrancia estricta* o denominada simplemente *flagrancia* comprende a la ejecución de un hecho delictivo en un determinado espacio, directamente percibido por un tercero. Esto es, la persona presente en el lugar observa directamente, de modo que frente a ella no existe duda de la comisión del hecho punible, por ello solo respecto a quien presencia el delito existe la flagrancia, mas no respecto a otras personas que no se encuentran en ese momento.

Como señala GARCÍA RADA, "el delito flagrante es el que tiene testigo presencial de su comisión; puede ser total, si vio íntegramente su cometido y parcial si solo vio parte"⁵.

En la *cuasi flagrancia* el agente es percibido inmediatamente después que culmina la ejecución del hecho; en esa situación, es detenido o huye del lugar siendo luego capturado, pero sin que le haya perdido de vista el tercero que presencié la ejecución del hecho.

En ese sentido, el equipo de investigación de actualidad jurídica sostiene que la cuasi flagrancia se presenta cuando el sospechoso inmediatamente después de realizar el hecho ilícito, emprende la huida y es detenido⁶. En otras palabras, una persona —por encontrarse aún dentro de los alcances de la flagrancia— puede ser detenida aun después que ejecutó o consumó la conducta delictiva, pero siempre y cuando no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la realización del hecho delictivo. Este concepto halla asidero en el artículo 259.2 del CPP, cuando se establece que incurrirá en flagrancia el agente que acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

Este segundo grado de flagrancia abarca desde el momento inmediato posterior a la comisión en consonancia con la persecución. Entonces, son dos las variables que han de coincidir: tiempo inmediato posterior a la ejecución y persecución ininterrumpida a quien huye⁷.

En cambio la *flagrancia extendida* comprende a varias hipótesis que, desde mi punto de vista, engloba a la denominada *flagrancia por identificación* del agraviado, testigo o equipos audiovisuales, y a la *flagrancia presunta*. Además, estos tipos de flagrancia dejan de lado los elementos de la percepción directa y a la inmediatez; pese a ello, sus propulsores, pretenden equipararlas a la flagrancia delictiva. En nuestra legislación, este tipo de flagrancia se encuentra previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 259 del CPP que alcanza los supuestos como identificación al agente por los testigos, víctima o equipos audiovisuales, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, o el hallazgo de indicios en sus alrededores, en su posesión o cuerpo del sujeto activo dentro de las 24 horas.

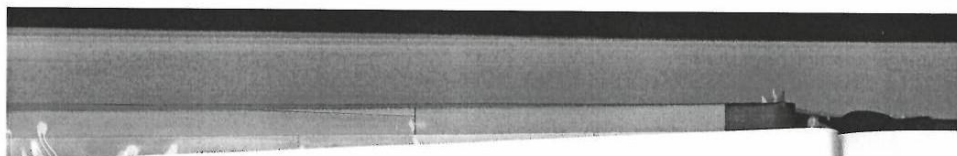
5. Incompatibilidad de flagrancia extendida como supuesto de incoación de proceso inmediato

Bajo el supuesto de flagrancia delictiva es posible incoar el proceso inmediato cuando concurren la flagrancia

5 GARCÍA RADA, Domingo, *Instituciones de derecho procesal penal. Obras completas*, t. I, 2.ª ed., Lima: Asociación civil "Mercurio Peruano", 2009, p. 130.

6 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUALIDAD JURÍDICA, "Cómo aplicar el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva", en *Actualidad Jurídica*, t. 266, Lima: enero del 2016, pp. 23 y 24.

7 JAUCHEN, Eduardo, *Tratado de derecho procesal penal*, t. II, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2012, p. 542.



Actualidad

Penal

ESPECIAL DEL MES | Carmelo García Calizaya

COM

propriadamente dicha o la cuasi flagrancia, debido a que los presupuestos materiales del proceso inmediato son: a) evidencia delictiva o prueba evidente y b) simplicidad del proceso.

Si bien el presupuesto de “prueba evidente” o “evidencia delictiva” se configura a partir de flagrancia delictiva, confesión sincera y delito evidente, no se puede partir de los tres o cuatro tipos de flagrancia antes anotadas. En lo que respecta a la flagrancia extendida, debido a que su estructura comprende a varias hipótesis y circunstancias que la hacen figura compleja, es inviable que pueda generar una prueba evidente para dar cabida a un proceso inmediato.

Por su parte, la *simplicidad* para instaurar el proceso inmediato, comprende a la viabilidad de los actos de investigación con la consiguiente rapidez en su trámite. Sin embargo, si el agente ha sido identificado por la víctima al momento de la comisión del hecho punible, y es encontrado unas horas después, tendríamos una serie de dificultades para la probanza de su autoría, pues hasta el momento solo habría la sindicación de la víctima, en consecuencia, el caso no presentaría la característica de *simplicidad* o lo que se denomina “ausencia de complejidad”.

Como puede apreciarse estos elementos no se condicen en el caso de flagrancia extendida porque en este tipo de flagrancia se otorga a un hecho ilícito la calidad de tal, solo en función a los indicios o por la simple sindicación de la víctima o testigos.

Es insostenible la flagrancia extendida como supuesto de incoación del proceso especial no solo porque se han perdido los requisitos para calificar la flagrancia —esto es, la inmediatez personal y temporal—, sino que al obviarse estas notas, no existen evidencias directas, y es por esa misma razón que se requiere de un plazo mayor para la investigación.

El proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable —aunque no irrazonablemente— las garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. En la medida que exista con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente⁸.

Cuando no concurren estos dos presupuestos, la celeridad propia de este procedimiento puede ir en desmedro de la justicia, y en este caso estaremos frente a una aplicación inconstitucional del proceso inmediato, al limitar irrazonablemente las posibilidades de defensa del imputado y la necesidad de esclarecer la verdad material en el proceso⁹.

8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CJ-116, Lima: 1 de junio del 2016, f. j. n.º 7.

9 HERRERA GUERRERO, Mercedes, “El carácter excepcional del proceso inmediato en el Decreto Legislativo N.º 1194. Especial referencia a los presupuestos materiales”, en HERRERA GUERRERO, *El proceso inmediato*, ob. cit., p. 91.

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes”.

3. Acerca de la flagrancia delictiva

Al respecto, el cuarto párrafo del fundamento jurídico n.º 2, de la resolución del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 00354-2011-PHC/TC, enseña: “[...] la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta la necesaria intervención policial”².

Además, el fundamento jurídico n.º 10, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 05423-2008-HC/TC, agrega: “[...]”

la flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso, por lo que solo se constituirá cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. La mera existencia de sospechas o indicios no es un elemento suficiente para constituir la flagrancia”³.

4. Acerca de la cuasi flagrancia

En la *cuasi flagrancia*, denominada también como *flagrancia presunta*, se tiene como presupuestos: i) la inmediatez personal y temporal, pues, el autor en ese momento, lugar y circunstancias, se encuentra físicamente presente y acaba de perpetrar el hecho punible, ii) la percepción sensorial directa por la misma víctima, la autoridad policial o terceras personas, que el autor instantes antes acaba de perpetrar el hecho punible, iii) la persecución sin interrupción, perpetrado el delito, el autor huye, produciéndose una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por terceros que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se sumaron a los perseguidores, y iv) la intervención del autor por el efectivo policial, o la aprehensión por la víctima o por terceros.

En ese sentido, amerita traer a colación el fundamento jurídico 3 de la jurisprudencia del Tribunal Consti-

2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Expediente N.º 00354-2011-PHC/TC, Lima: 28 de marzo del 2011, f. j. n.º 2.

3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Expediente N.º 05423-2008-HC/TC, Lima: 1 de junio del 2009, f. j. n.º 10.

Cita: Ojo: F.J. es fundamento jurídico
Tribunal Constitucional
Expediente N.º 00354-2011-PHC/TC, Lima: 28 de marzo del 2011, f. j. n.º 2.



COMENTARIO

Incompatibilidad de la flagrancia
extendida como supuesto de incoación
del proceso inmediato

A propósito de la Casación N.º 842-2016 Sullana

Carmelo García Calizaya*

Juzgado Penal Unipersonal de Lircay
Angaraes-Huancavelica

SUMARIO

1. Introducción.— 2. Descripción y trámite del caso.— 3. Flagrancia delictual como presupuesto de incoación de proceso inmediato.— 4. Manifestaciones de flagrancia delictiva según el Código Procesal Penal de 2004.— 5. Incompatibilidad de flagrancia extendida como supuesto de incoación de proceso inmediato.— 6. Aparente configuración de flagrancia en el caso *Benites Rodríguez*, materia de Casación N.º 842-2016-Sullana.— 7. Conclusión.— 8. Referencias bibliográficas.



RESUMEN

El autor analiza la Casación N.º 842-2016-Sullana, centrando su atención en el contenido de la flagrancia delictiva prevista en el vigente artículo 259 del CPP como presupuesto para una correcta instauración del proceso inmediato, cuya nota característica radica en su celeridad y reducida acción probatoria en comparación al proceso común.

Palabras clave: Proceso inmediato / Tipos de flagrancia / Flagrancia extendida.

Recibido: 15-04-17

Aceptado: 17-04-17

Publicado en línea: 02-05-17



ABSTRACT

The author analyzes the Cassation N.º 842-2016-Sullana, focusing his attention on the content of the criminal flagrancy contemplated in the current article 259 of the CPP as a presupposition for a correct establishment of the immediate process, whose characteristic note lies in its celerity and reduced probative action in comparison to the common process.

Keywords: Immediate process / Types of flagrancy / Extended flagrancy.

Title: Incompatibility of the flagrancy extended as an assumption of initiation of the immediate process. On purpose of the Cassation N.º 842-2016 Sullana.

* Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Ex defensor público de Yauri-Espinar (Cusco), juez titular penal unipersonal de Lircay-Angaraes (Distrito Judicial de Huancavelica).

1. Introducción

La flagrancia es una institución procesal de carácter instrumental o medial, a cuyo amparo se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales (medidas de coerción o medidas instrumentales restrictivas de derechos) con fines de investigación del delito y, en su caso, poder instaurar procedimientos simplificados que dan lugar a una decisión célere¹.

Al margen de múltiples usos que tiene la flagrancia delictiva, en el extremo que se ha establecido para la viabilidad del proceso especial (inmediato), como sostuvimos desde el momento en que entrara en vigencia el D. Leg. N.º 1194, solo la flagrancia estricta y cuasiflagrancia encajan en el supuesto del artículo 446.1, literal a), del CPP, de manera que debe excluirse la flagrancia extendida por no reunir los requisitos de percepción directa, y la inmediatez².

Como bien señala SALAS ARENAS:

Resulta obvio que el ámbito natural del proceso rápido sea compatible con la flagrancia directa o estricta y en menor entidad en la cuasi flagrancia, la discusión se asienta en los casos de flagrancia por identificación inmediata y flagrancia presunta, en tanto en estos supuestos no existe

un fuerte vínculo entre la percepción del hecho y el momento de detención policial, porque no hubo percepción ni persecución por parte del efectivo del orden y por el transcurso del tiempo entre la realización del delito y la detención del presunto autor, adquiriendo incluso lapsos en extremo amplios (24 horas), perdiendo la flagrancia su naturaleza temporal inmediata³.

En ese orden de ideas, la intención del presente trabajo es delimitar el contenido de la flagrancia delictiva prevista en el artículo 259 del CPP para la correcta instauración del proceso inmediato, a propósito de la Casación N.º 842-2016-Sullana; ello en consideración a que este proceso especial al ser célere y al suprimir algunas etapas, en comparación al proceso común, no comprometa derechos y garantías fundamentales que corresponden a toda persona humana sometida a un proceso penal, aun frente a cualquier justificación encubierta del legislador.

2. Descripción y trámite del caso

El 19 de enero del 2016, aproximadamente a las 11 de la mañana, en circunstancias que la menor de iniciales M. B. A. A., de 7 años de edad, se encontraba sola en su domicilio, en el Caserío Mallares, Calle Sáez Peña-Sullana, llegó Benites Rodríguez para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la menor se encontraba sola, le pidió que verificara la luz. En ese momento, la agarró de

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Casación N.º 842-2016/Sullana, Lima: 16 de marzo del 2017, f. j. cuarto.

2 GARCÍA CALIZAYA, Carmelo, "Acerca de los supuestos de aplicación del nuevo proceso inmediato (D. L. N.º 1194)", en *Actualidad Penal*, vol. 21, Lima: marzo del 2016, p. 97.

3 SALAS ARENAS Jorge Luis, "El proceso inmediato", en *Ius in fraganti. Revista informativa de actualidad jurídica*, año 1, n.º 2, Lima: agosto del 2016, p. 11. Recuperado de <bit.ly/2pGNiLD>.

los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó. Nuevamente le solicitó que prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así comenzó a tocarle todo el torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un dedo dentro de su vagina, acto que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito vaginal.

IMPORTANTE

Bajo el supuesto de flagrancia delictiva es posible incoar el proceso inmediato cuando concurren la flagrancia propiamente dicha o la cuasi flagrancia, debido a que los presupuestos materiales del proceso inmediato son: a) evidencia delictiva o prueba evidente y b) simplicidad del proceso.

Al día siguiente, 20 de enero del 2016, aproximadamente a las 9 horas —después de 22 horas de ocurrido el hecho—, en circunstancias que la menor agraviada y su madre se dirigían en un vehículo policial, conjuntamente con tres efectivos, a la Fiscalía provincial de Sullana, la segunda observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en una motocicleta, por lo que, ante su sindicación, la policía detuvo al imputado Benites Rodríguez.

El 21 de enero de 2016, el juez de la investigación preparatoria declaró procedente el proceso especial de inmediato contra el imputado Benites Rodríguez por estimarse la detención en flagrancia delictiva. Más adelante, mediante la sentencia del 15 de febrero del 2016, el acusado

fue condenado como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M. B. A. A., a cadena perpetua, así como al pago de S/ 5 000.00 soles por concepto de reparación civil. Dicho fallo fue confirmado mediante sentencia de vista del 22 de junio del 2016.

La defensa del sentenciado acudió en casación a la Corte Suprema de Justicia de la República. En esta instancia, a mérito de la Casación N.º 842-2016-Sullana, declararon nula la sentencia de vista recurrida e insubsistente la sentencia de primera instancia, y reponiendo la causa al estado que corresponde, declararon sin efecto todo lo actuado desde el auto de incoación de proceso inmediato y ordenaron se siga la causa conforme al proceso común y se remitan los actuados a la fiscalía provincial para la emisión de la disposición correspondiente.

3. Flagrancia delictual como presupuesto de incoación de proceso inmediato

El proceso inmediato tiene su razón de ser en la evidencia delictiva suficiente, o base indiciaria abundante, y en la ausencia de complejidad. Este es también el fundamento que presentan instituciones similares en el derecho comparado, por ejemplo, en el juicio directísimo e inmediato del Código de Procedimientos Penales italiano y el procedimiento para el enjuiciamiento rápido español⁴.

⁴ Véase, HERRERA GUERRERO, Mercedes, "Presentación", en HERRERA GUERRERO, Mercedes (coord.), *El proceso inmediato*, Lima: Instituto Pacífico, 2017, p. 7.

Karen Esteplani Gamboa Gonzales
Asistente Administrativo
Primera Fiscalía Superior Penal del Callao



Abril 2017 / N.º 34

DIRECTORES

José Luis Castillo Alva
Percy García Cervero
Raúl Pariona Arana
Pablo Talavera Elguera
Felipe Villavicencio Terreros

CONSEJO EDITORIAL

Mario Amoretti Pachas
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
José Neyra Flores
(Universidad de San Martín de Porres)
Victor R. Prado Saldarriaga
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Luis E. Roy Freyre
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
César San Martín Castro
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
Claus Roxin
(Universidad de Múnich, Alemania)
Bernd Schünemann
(Universidad de Múnich, Alemania)
Luis Gracia Martín
(Universidad de Zaragoza, España)
José M. Zugaldía Espinar
(Universidad de Granada, España)
José M. Asencio Mellado
(Universidad de Alicante, España)
Manuel Cancio Meliá
(Universidad Autónoma de Madrid, España)
Laura Zúñiga Rodríguez
(Universidad de Salamanca, España)
Olga Fuentes Soriano
(Universidad Miguel Hernández de Elche, España)
Mercedes Fernández L.
(Universidad de Alicante, España)
Diego-Manuel Luzón Peña
(Universidad de Alcalá, España)



INSTITUTO PACÍFICO

Actualidad Penal

Al día con el Derecho

PENAL • PROCESAL PENAL • PENITENCIARIO • CRIMINOLOGÍA

Especial

El proceso inmediato y la flagrancia delictiva
Comentarios a la Casación N.º 842-2016-Sullana

CONTENIDO

DERECHO PENAL - PARTE GENERAL

La participación necesaria del *extraneus* en el delito de colusión
Enfoque postpositivista principalista del concurso de normas penales

DERECHO PENAL - PARTE ESPECIAL

La determinación típica del robo con homicidio
Las contribuciones como elemento normativo del tipo del delito de exacción ilegal

DERECHO PROCESAL PENAL

El control de la valoración de la prueba en segunda instancia
Presunción de inocencia, medios de comunicación e investigación preparatoria
Consideraciones sobre el sobreseimiento y la doble conformidad

LITIGACIÓN ESTRATÉGICA

Las omisiones en las declaraciones previas

DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL

La constitucionalización del proceso
La protección de bienes culturales y la Corte Penal Internacional

CRIMINOLOGÍA / POLÍTICA CRIMINAL

La pertinencia de una futura tipificación del incesto

CONSULTAS • ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL •
ACTUALIDAD LEGAL • JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Indexada en:

latindex

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Actualidad Penal
Al día con el Derecho
PENAL • PROCESAL PENAL • PENITENCIARIO • CRIMINOLOGÍA

Publicación mensual del Instituto Pacífico
N.º 34, abril, 2017

Actualidad Penal es una publicación especializada en derecho penal-parte general, derecho penal-parte especial, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, derecho penitenciario, litigación estratégica, criminología-política criminal y temas afines. Está dirigida a los jueces, fiscales, abogados e investigadores jurídicos. La misión de **Actualidad Penal** es proporcionar una herramienta que contribuya con eficiencia y eficacia en el proceso de interpretación y aplicación de las normas penales, abordando las teorías consolidadas, a nivel nacional e internacional, que hayan servido como fundamento de los pronunciamientos jurisprudenciales y de las iniciativas legislativas en nuestro país.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Directores: José Luis Castillo Alva (Universidad Nacional de Trujillo) • Percy García Caverio (Universidad de Lima) • Raúl Pariona Arana (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • Pablo Talavera Elguera (Universidad de San Martín de Porres) • Felipe Villavicencio Terreros (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Editores jurídicos: Francisco R. Heydegger (Coordinador general) • Robin López Torres (Editor asociado) • Gustavo Arturo Zavala Julca (Editor asociado) • Liz Jazmin Carbajal Salas (Editor asociado) • José Carlos Quiquia Flores (Editor asociado)

Consejo editorial: **Nacionales:** Mario Amoretti Pachas (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • José Neyra Flores (Universidad de San Martín de Porres) • Víctor Prado Saldamiga (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • Luis E. Roy Freyre (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • César San Martín Castro (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • **Internacionales:** Claus Roxin (Universidad de Múnich) • Luis Gracia Bermid Schünemann (Universidad de Múnich) • José M. Zugaldia Martín (Universidad de Zaragoza) • José María Asencio Espinar (Universidad de Granada) • Manuel Cancio Mellado (Universidad de Alicante) • Olga Fuentes Soriano (Universidad de Miguel Hernández de Elche) • Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca) • Mercedes Fernández López (Universidad de Alicante) • Diego-Manuel Luzón Peña (Universidad de Alcalá)

Comité consultivo: Tomás A. Gálvez Villegas • Luis Lamas Puccio • Dino Carlos Caro Coria • Ramiro Salinas Siccha • Fidel Rojas Vargas • Alonso Peña-Cabrera Freyre • Víctor Cubas Villanueva • Luis M. Reyna Alfaro • José F. Palomino Manchego • Josué Pariona Pastrana • Julio Rodríguez Delgado • Germán Small Arana • Luis Iberico Castañeda • Vladimir Padilla Alegre • James Reátegui Sánchez • Mario Rodríguez Hurtado • Gonzalo Del Río Labarthe • Roberto Cáceres Julca • Aldo Figueroa Navano • Eduardo Oré Sosa

Internacionales: Gustavo A. Arocena (Argentina) • Carlos Mir Puig (España) • Miguel Díaz y García Conlledo (España) • Javier de Vicente Remesal (España)

INSTITUTO PACÍFICO

Alejandro Rojas Buleje (Presidente ejecutivo), Francisco R. Heydegger (Director de publicaciones), Jhonny Sánchez Reátegui (Jefe de pre prensa), Zuemily Pariasca Higa (Corrección de estilo), Luis Ruiz Martínez (Diagramación).

Actualidad Penal N.º 34

Edición: Abril 2017

Tiraje: 4650 ejemplares

Registro de Proyecto Editorial: 31501051700507

ISSN 2415-2285 (en línea), ISSN 2313-268X (impresa)

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2014-10327

Edición a cargo de:

© Instituto Pacífico S.A.C.

Primer número: Julio 2014

Jr. Castrovirreyna N.º 224 - Breña • Central: 619-3715

Impresión a cargo de:

Pacífico Editores S.A.C.

Jr. Castrovirreyna N.º 224 - Breña • Central: 330-3642 / 619-3720

Informes y ventas:

Jr. Castrovirreyna N.º 224, Breña, Lima, Perú • 6193717 / 6193728 / 3325766 • E-mail: ventas@aempresarial.com y distribuidores autorizados

Derechos Reservados, Decreto Legislativo N.º 822

Los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Instituto Pacífico S.A.C. no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores en sus artículos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta revista por cualquier medio o forma electrónica, incluyendo el sistema de fotocopiado, ya sea para uso personal o colectivo de distribución posterior sin la autorización escrita del Instituto Pacífico S.A.C. quedando protegidos los derechos de propiedad intelectual y de autor por la legislación peruana e internacional.

Correspondencia:

Escribanos a: actualidadpenal@institutopacifico.com.pe
Página web: www.actualidadpenal.com.pe

Créditos de los autores:

Por un criterio de uniformidad, debajo del nombre de cada autor se incluye su casa de estudios.

Actualidad Penal es una revista oficialmente indexada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex). Esto nos constituye en la primera revista penal indexada del Perú.

circunstancia
idencia apa-
la requisita,
limiento es
uede ocurrir
cientes para
ocupa en su
on el delito.
re la requisita
istir motivo
obtiene un
on ello con-
cia. En estos
to p rior
no resulte
itoria.

cia de que
una causa
x post. Así,
deben estar
on el requi-
s ocasiones,
asimilarse
igualmente
ón posterior
el resultado
de evaluarse
post, a favor
encia de los
intervi-
ción.
inguir entre
resunciones,
fecto de ga-
vención po-
la existencia
culpabilidad
resumir que
do positivo.
e una cierta

restricción a la libertad de movimiento y una afrenta directa a la intimidad de las personas. Es por lo anterior que a efecto de garantizar la legalidad de la intervención, y la existencia de los motivos suficientes, el juzgador debe realizar un análisis riguroso, profundo y completo *ex post* de las razones que motivaron la acción policial. A nuestro criterio, en el caso de la denuncia anónima se requiere una tarea de verificación por parte de la policía que le lleven a suponer que efectivamente hay fundamentos suficientes para presumir que la requisita es válida, de ahí que debe quedar claramente documentada de modo que permita la *adversariedad* a lo largo del proceso. Por último, es ilegítimo, según los parámetros establecidos, una detención con fines de identificación y que producto de ello se obtengan otras evidencias que vinculen con un hecho delictual, toda vez que no están presentes los datos objetivos previos que confirmen la acción y la urgencia de intervención.

3. Sospecha razonable y motivos suficientes

El análisis policial de las circunstancias se cumple *ex ante* fundado en un dato objetivo es decir en prueba indiciaria suficiente. De este modo, se requiere a nivel policial una apreciación razonable y fundada en la causa probable de delito así como la determinación de un indicio vehemente de culpabilidad. Debe recordarse que los indicios son conformados a partir de un estado de sospecha latente, de este modo, si no

existen indicios, jamás existirá sospecha. Ahora bien, a nivel judicial el juicio de control de la actuación policial se realiza *ex post*, descendiendo a la totalidad de circunstancias que rodeaban el caso, y ponderando su urgencia. Debe tenerse presente que los conceptos de sospecha y de motivos suficientes pesan sobre la subjetividad del agente, sobre su valoración de las circunstancias presentes; es una internalización valorativa eminentemente subjetiva, la cual necesariamente deberá ser controlable *a posteriori* por la autoridad judicial.

IMPORTANTE

Las actuaciones policiales [...] se encuentran limitadas al cumplimiento de la ley y la Constitución Política, rechazando de este modo cualquier acto arbitrario o ilegítimo. Ahí surge el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades policiales de intervención.

Por tanto, para el cumplimiento efectivo de una comprobación policial amparada en derecho se requieren dos requisitos: a) la *faz subjetiva*, que consiste en la valoración subjetiva que motiva el deber de actuar, esto es, el elemento subjetivo de discrecionalidad funcional donde el agente determina en su psiquis la existencia de una circunstancia justificada que lo autoriza a actuar; y, b) la *faz objetiva*, que a su vez requiere de la existencia de datos objetivos, reales, verificables, previos y corroborables que indiquen de modo

razonable la existencia de un delito y la necesidad de intervención. Aquí se descartan como posibles las sospechas, inclinaciones subjetivas o conjeturales. Este requisito es previo y prevalente al elemento subjetivo de intervención. En todo caso, a efecto de claridad, el control de la actuación debe fundarse en una ponderación de razonabilidad judicial, así se deben ponderar las circunstancias particulares del caso (inferencias razonables y específicas del caso concreto) y la necesidad urgente de intervención. Por último, debe adicionarse a ese control de razonabilidad, los principios de excepcionalidad y necesidad de la intervención.

¿SABÍA USTED QUE?

[Son] parámetros objetivos para llevar a cabo una actuación policial de forma válida y legítima: [...] a. Existencia de motivos previos de actuación, [...] b. Causa probable, [...] c. *Flagrancia delictiva*, [...] d. Motivo suficiente para presumir que se ocultan cosas relacionadas con el delito, [y] e. *Sospecha razonable*".

El "estado de sospecha" en todas sus variantes terminológicas policiales se fundan en la peligrosidad, propio de un sistema de derecho penal de autor, ámbito proscrito en un Estado democrático de derecho, de ahí que debe existir un coto a esas actuaciones deslegitimadoras.

4. Flagrancia y control de carreteras

Acerca del control de carreteras y los llamados "retenes policiales", el Voto N.º 14821-2010, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Costa Rica) desarrolla ampliamente este tema. Veamos:

El optar por un régimen democrático de derecho y no por un régimen autoritario, conforme lo hizo el Constituyente [...] impone a las autoridades públicas límites infranqueables en el ejercicio de sus potestades y deberes. Estos límites están definidos por el contenido esencial de los derechos, libertades y garantías fundamentales de las personas, previstos tanto en la Constitución Política, como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha establecido que los Estados tienen un poder limitado en su actuar en lo que se refiere a garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, por encontrarse condicionado por el deber de respeto a los derechos fundamentales de toda persona. Así, en la sentencia del 21 de setiembre del 2006, caso *Servellón García y otros vs. Honduras*, se señaló: "87. [C]on la finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos, el Estado legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos casos, la vida". Asimismo indicó: "[...] Por ello, una detención masiva y programada

de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria (Sentencia del 21 de septiembre del 2006, caso *Servellón García y otros vs. Honduras*). Asimismo, en la sentencia del 21 de julio de 1989, caso *Villalobos vs. Honduras*, la Corte esta-blece que "[...] no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos". Mas aún, la libertad de tránsito y el derecho a la intimidad sólo pueden limitarse o restringirse, en aquellos casos permitidos por ley y únicamente cuando sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional para alcanzar o tutelar bienes jurídicos trascendentes para la convivencia social. Si bien es cierto, de conformidad con la ley, la policía puede realizar controles para la identificación de las personas, averiguación de la condición migratoria, control fiscal, trasiego de especies vegetales o animales, entre otros, conforme lo ha señalado esta Sala (Sentencia N.º 2002-10309 de las 12:09, del 25 de octubre del 2002) no es posible que estos operativos se realicen de una forma indiscriminada y mucho menos que se coaccione u obligue a las personas para que permitan el acceso al interior de su vehículo, sin que exista *noticia criminal* o indicios comprobados de la comisión de un delito. Para proceder a la revisión del interior de un vehículo en este tipo de controles policiales, se requiere necesariamente del consentimiento libre y expreso del conductor, lo que implica que no puede ser coaccionado de forma alguna. El artículo 190 del Código Procesal Penal es claro al señalar que el juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en el objetos relacionados con el delito (el resal-

tado no es del original) [...] hay espacios que efectivamente quedan amparados por la protección de la intimidad sin constituirse en domicilio, como es el caso del interior de los vehículos automotores, automóviles o "pick up", que ya esta Sala ha admitido se constituye en un recinto privado, precisamente porque la noción de intimidad no puede desligarse de aquella referente al ámbito social en el cual vive y actúa el sujeto de derecho, sin embargo, no puede entenderse que el derecho a la intimidad de la vida privada sea ilimitado, pues no es un derecho absoluto, y como tal, existen ciertos casos en los cuales, por razones de interés público va a resultar constituido. No se pretende con ello indicar, que se pueda registrar cualquier vehículo y bajo cualquier consideración, pues la misma norma establece los presupuestos necesarios e indispensables bajo los cuales resulta su procedencia: "[...] siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en el objetos relacionados con el delito", por otro lado debe realizarse bajo el mismo procedimiento que se sigue en el caso de la requisa personal contemplada en el artículo 189, que dice en lo que interesa: "[...] antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. La advertencia e inspección se realizará en presencia de un resguo, que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas; y tampoco lo puede practicar cualquier, pues será el juez, el fiscal o la policía, lo cual ya había sido aceptado por esta Sala en Sentencia N.º 0522-98. La policía debe actuar conforme a protocolos específicos, donde se establezcan las condiciones, forma, presupuestos, etc., en que pueden realizarse controles como el que motivó este recurso. La vigilancia en carretera no constituye una actuación ilegítima o arbitraria en sí misma, pero debe estar necesariamente relacionada con la investi-

muy presente, que cada una de esas actuaciones entrañan una lesión a un derecho fundamental. Así, el control vehicular y la requisa personal violenta la intimidad; la detención, además de la libertad personal, el requerimiento constitucional de orden judicial previa.

De ahí que convenga enumerar una serie de parámetros objetivos para llevar a cabo una actuación policial de forma válida y legítima. Estas son las siguientes:

- a. *Existencia de motivos previos de actuación.* Fundada en datos objetivos, reales, ciertos, visibles, exteriorizados y corroborables.
- b. *Causa probable.* Cuando los hechos y circunstancias de conocimiento de los funcionarios que protagonizan el arresto y acerca de los cuales tienen ellos información razonablemente fidedigna, son suficientes en sí mismos para justificar que un hombre de prudencia razonable crea que se ha cometido o se está cometiendo un delito (véase el caso *Terry vs Ohio*, 1968).
- c. *Flagrancia delictiva.* Para que la actuación sea legítima, se requiere que las sospechas, indicios o datos sobre la actividad ilegal estén bien fundados. Así, en la flagrancia se sorprende a los sujetos con los objetos, efectos o instrumentos del delito.
- d. *Motivo suficiente para presumir que se ocultan cosas relacionadas con el delito.* Situación objetiva que descarta una actividad meramente caprichosa de la autoridad. En estos casos los motivos deben ser previos y de urgencia.

- e. *Sospecha razonable.* Debe sustentarse en datos concretos y objetivos, en este caso está referido a tareas de inteligencia, seguimientos o denuncias, que incriminen al sujeto con la realización del hecho delictivo.

En resumen, para resultar legítimo un procedimiento, el mismo debe estar fundado en un indicio fuerte de culpabilidad, no en la mera sospecha o subjetividad policial.

2. Flagrancia y requisa

La “flagrancia” se entiende como evidencia de un hecho delictivo, respecto a su autor. Se configura cuando existe un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible, que viene realizando o acaba de cumplir instantes antes, situación que amerita la urgente intervención de la policía. Se trata de una excepción al principio constitucional de reserva judicial para privar de la libertad en virtud de la urgencia de la situación y el cumplimiento de los requisitos de inmediatez personal —el delito se está cometiendo o que se haya cometido instantes antes— y temporal —que el presunto delincuente se encuentre en el lugar, en ese momento, en dicha situación, y con relación al objeto, a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo—.

Para que exista una flagrancia delictiva, se requiere la existencia de al menos el principio de *fumus commisi delicti* —atribución del delito, es decir, que de

forma previa, razonada e indiscutible, se impute un delito— y el *periculum libertatis*—necesidad de intervención para hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y descubrimiento del hecho—. Adicionalmente, debe cumplirse con la existencia de varios requisitos necesarios para su configuración: a) la percepción del hecho por la víctima, un tercero civil o un agente de policía; b) la individuación del responsable; c) el hecho delictivo; d) la inmediatez temporal de la actuación policial; e) la existencia de delito alguno de la persona intervenida y la actuación policial deviene en arbitraria.

IMPORTANTE

[L]os derechos fundamentales no son absolutos, ya que en determinados supuestos estos pueden ceder. La libertad de tránsito se puede ver reducida a partir de la existencia de un delito en flagrancia y la urgencia de intervención; ahí la acción del Estado tiene por finalidad la detención del responsable para asegurar la evidencia, evitar su fuga y decomisar los objetos o instrumentos utilizados para la realización del hecho ilícito.

En el Título II el Código Procesal Penal costarricense (en adelante CPP) describe una serie de institutos para comprobar de forma inmediata un hecho, así se tiene la “inspección de lugares” (art. 185 CPP)—requiere motivos suficientes de sospecha—, “inspección corporal” (art. 188 CPP)—requiere sospecha grave y fundada o absoluta del delito, es decir, que no era observable en un caso de flagrancia, si fue necesaria la requisita para descubrir la existencia del delito, es decir, que no era observable—

La flagrancia—como excepción que es—permite prescindir de un orden judicial para lesionar el derecho fundamental; sin embargo, se requiere la existencia de una comisión delictiva externa, reconocible por los sentidos. De este modo, es imposible hablar de una flagrancia cuando la comisión del hecho solo puede ser advertida como consecuencia de la requisita. No se está en un caso de flagrancia, si fue necesaria la requisita para descubrir la existencia del delito, es decir, que no era observable—

Causa probable

Señale la
requisa

necesidad—, y la “requisa” (art. 189 CPP), el “registro de vehículos” (art. 190 CPP), en cuya descripción establece la potestad de intervenir en tanto surjan motivos suficientes para presumir que alguien oculta objetos relacionados con el delito. Como puede colegirse con facilidad, para la inspección de lugares, requisas y registro de vehículos, el legislador estableció la necesidad de motivos suficientes, mientras que en la inspección corporal la descripción es más estricta, al requerir una sospecha grave y fundada o absoluta necesidad de intervención, conceptos que serán abordados *supra*. En el caso particular de la requisas, ZÚÑIGA MORALES establece que se trata de una trasgresión autorizada, aunque sea por un breve espacio de tiempo, de la libertad ambulatoria e implica en virtud de la revisión que se realiza, una vulneración autorizada de la intimidad (ZÚÑIGA MORALES, Sandra, *Revista Derecho Penal y Procesal Penal*, p. 428).

La “requisas” es una medida de coerción policial mediante la cual se examina el cuerpo de la persona o el ámbito de custodia de este a efecto de secuestrar cosas relacionadas con el delito. De este modo, por afectarse el derecho fundamental de intimidad, la requisas policial debe sustentarse en las condiciones previas o anteriores al procedimiento, es decir, que la existencia de motivos suficientes de ocultamiento provenga de datos reales, objetivos o independientes y concretos, establecidos a partir de indicios necesarios, indicios

contingentes suficientes. Circunstancia distinta ocurre cuando la evidencia aparece como consecuencia de la requisas, en aquellos casos el procedimiento es espurio. La requisas solo puede ocurrir cuando haya motivos suficientes para presumir que una persona ocupa en su cuerpo cosas relacionadas con el delito. Resulta absurdo sostener que la requisas resulta válida si pese a no existir motivo previo, producto de esta se obtiene un material incriminador, y con ello consolidar un hecho en flagrancia. En estos casos se ha verificado el delito posterior a la detención, de ahí que no resulte legítima la *recabación* probatoria.

Debe existir la exigencia de que la detención se sustente en una causa razonable y corroborable *ex post*. Así, los motivos de suficiencia deben estar estrechamente vinculados con el requisito de urgencia. En algunas ocasiones, los motivos previos pueden asimilarse a presunciones, las cuales igualmente están sujetas a la corroboración posterior a los indicios. De este modo, el resultado de la requisas no puede dejar de evaluarse como dato coadyuvante *ex post*, a favor de la verosimilitud o suficiencia de los motivos que fundaron la intervención. Conviene a estas alturas, distinguir entre motivos suficientes y las presunciones, datos, señales o indicios. A efecto de garantizar la pureza de la intervención policial es necesario demostrar la existencia de indicios vehementes de culpabilidad y motivos suficientes para presumir que la requisas arrojará un resultado positivo. La requisas policial presupone una cierta

restricción y una afren las persona: efecto de ga tervención, suficientes, análisis rigu *ex post* de l acción poli caso de la d una tarea d policía que tivamente l para presu de ahí qu document: *adversariae* último, es tros establ fines de id de ello se c vinculen c vez que no jetivos pre y la urgen

3. Sospecient

El an tancias se un dato indiciaria requiere a razonable de delito un indici Debe rec conforme sospecha

1. Derechos fundamentales

Existen una serie de normas supra-constitucionales que proscriben la injerencia arbitraria en la privacidad de las personas; véase, por ejemplo, el art. 12 de la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, el 17.1 del *Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas*, y el 11.2 de la *Convención Americana de Derechos Humanos*. De igual modo, se realiza una limitación al poder estatal en las posibilidades de detención y encarcelamientos arbitrarios, baste señalar el art. 7.3 del *Pacto San José*. Estas normas constituyen el norte para establecer la necesidad de procedimientos policiales para el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Sobre el ejercicio estatal y sus potestades de imperio para el aseguramiento de los fines propuestos, la *Corte Interamericana de Derechos Humanos* ha sostenido en el caso *Velásquez Rodríguez vs. Honduras* que: “no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos” y en el caso *Servellón García vs. Honduras*: “87. [...] una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria”.

Por su parte, a nivel costarricense, Sala Constitucional en el Voto N.º

10309-2002 dispuso: “las autoridades lesionan los derechos fundamentales al ordenar ejecutar revisiones a todos los individuos de forma indiscriminada”, y en el Voto N.º 14821-2010, que “la policía debe actuar conforme a protocolos específicos, donde se establezcan las condiciones, forma, presupuestos, en que puedan realizarse controles. La vigilancia en carretera no constituye una actuación ilegítima y arbitraria en sí misma, pero debe necesariamente estar relacionada con la investigación de un hecho delictivo y realizarse con criterios de razonabilidad”. Además, en la Sentencia N.º 15061-2011, estableció que “no se conculcan los derechos fundamentales si para el operativo, se encuentra debidamente fundamentada en la *noticia criminis*”. Por último, en el Voto N.º 1222-2011 se estableció la necesidad de contar con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, fundadas en el espacio temporal para realizar controles de carretera.

Resulta conocido que los derechos fundamentales no son absolutos, ya que en determinados supuestos estos pueden ceder. La libertad, el domicilio y hasta la libertad de tránsito se puede ver reducida a partir de la existencia de un delito en flagrancia y la urgencia de intervención; ahí la acción del Estado tiene por finalidad la detención del responsable para asegurar la evidencia, evitar su fuga y decomisar los objetos o instrumentos utilizados para la realización del hecho ilícito.

Las actuaciones policiales en todo caso se encuentran limitadas al cum-

plimiento de la ley y la Constitución Política, rechazando de este modo cualquier acto arbitrario o ilegítimo. Ahí surge el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades policiales de intervención.

¿SABÍA USTED QUE?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido [...] en el caso *Servellón García vs. Honduras*: “87. [...] una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria”.

Muchos pueden ser los supuestos fácticos donde la policía, considera necesario e imprescindible actuar de forma inmediata; sin embargo, no en todos encuentra una justificación válida jurídicamente. Así tenemos supuestos fundados en la experticia forense —“olfato policial”—, señales de criminalidad (indicios anfibológicos, datos no constatados, presunciones, fines preventivos, llamadas anónimas no sustentadas), actitud manifestamente nerviosa que conlleva una razón plausible de actuar por experiencia policial¹, sospecha delictual fundada en mera estimación

subjetiva (experiencia policial que podría estar fundada en la intuición, ocurrencia, estereotipo, presencia en sitio, exaltación del imputado entre otros).

No debe admitirse como válido en un Estado democrático de derecho recurrir actuaciones policiales fundadas en un *estado de sospecha*, proceso estereotipado mediante el cual se reducen las garantías judiciales de las personas para justificar un acto arbitrario de las autoridades públicas. El uso desmedido de la fuerza, propia de un sistema autoritario, se fundan en cliché de fórmulas tendenciosas, vagas e indeterminadas del argot policial como lo son actitud sospechosa, manifestamente nerviosa etc., prescindiendo de la necesidad de contar con el dato objetivo previo, señalado *supra*. Esta tendencia judicial de validación de tales actuaciones conllevará inexorablemente a un debilitamiento de las garantías y el establecimiento de “nuevos y modernos” términos que hagan justificar el acto abusivo; por ejemplo, para identificar personas, corroborar información confidencial, constar situación migratoria irregular, estimación de llamada anónima que reporta un hecho, sospecha de actuar ilícito por antecedentes policiales del inculpinado o incluso cuando de acuerdo con las circunstancias, así lo ameriten.

Dentro de las actuaciones policiales legalmente establecidas, de interés para ese artículo, se encuentran: la requisa, la inspección, la detención por hecho delictivo flagrante, el control policial de carreteras, entre otros. Debe tenerse

¹ Véase en igual sentido los Votos N.ºs 2014-1928, y 2016-130, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Seve la
requisa

Nivel internacional

Caso

Actualidad Penal es una publicación especializada en derecho penal-parte general, derecho penal-parte especial, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, derecho penitenciario, litigación estratégica, criminología-política criminal y temas afines. Está dirigida a los jueces, fiscales, abogados e investigadores jurídicos. La misión de **Actualidad Penal** es proporcionar una herramienta que contribuya con eficiencia y eficacia en el proceso de interpretación y aplicación de las normas penales, abordando las teorías consolidadas, y más modernas e internacionales, que hayan servido como fundamento de los pronunciamientos jurisdiccionales y de las iniciativas legislativas en nuestro país.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Directores: José Luis Castillo Alva (Universidad Nacional de Trujillo) • Percy García Cervero (Universidad de Lima) • Raúl Pariona Arana (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • Pablo Talavera Elguera (Universidad de San Martín de Porres) • Felipe Villavicencio Teneiros (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Editores jurídicos: Francisco R. Heydegger (Coordinador general) • Robin López Torres (Editor asociado) • Gustavo Arturo Zavala Julca (Editor asociado) • Liz Jazmin Carbajal Salas (Editor asociado) • José Carlos Quirigua Flores (Editor asociado)

Consejo editorial: **Nacionales:** Mario Amoretti Pachas (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • José Neyra Flores (Universidad de San Martín de Porres) • Víctor Prado Saldamiga (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) • Luis E. Roy Freyre (Universidad Nacional de Villa Stein (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)) • Javier Mellado (Universidad Nacional de San Marcos) • Soriano (Universidad de Miguel Hernández de Elche) • Bernd Schunemann (Universidad de Munich) • Luis Gracia Martín (Universidad de Zaragoza) • José M. Zugaldia Espinar (Universidad de Granada) • José María Asencio Mellado (Universidad de Alicante) • Manuel Cancio Fuentes Soriano (Universidad de Miguel Hernández de Elche) • Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca) • Mercedes Fernández López (Universidad de Alicante) • Diego Manuel Luzón Peña (Universidad de Alcalá)

Comité consultivo: Tomás A. Gálvez Villegas • Luis Llanas Puccio • Dño Carlos Caro Cona • Ramiro Salinas Siccha • Fidel Rojas Vargas • Alonso Peña-Cabrera Freyre • Víctor Cubas Villanueva • Luis M. Reyna Alfaro • José F. Palomino Manchego • José Perona Pastora • Julio Rodríguez Delgado • German Small Arana • James Reátegui Sánchez • Vladimir Padilla Alegre • Gonzalo Del Río Labarthe • Ricardo A. Brousset Salas • Roberto Cáceres Julca • Aldo Figueroa Navarro • Eduardo Oré Sosa

Internacionales: Gustavo A. Arocena (Argentina) • Carlos Mir Puig (España) • Miquel Díaz y Garria

INSTITUTO PACÍFICO

Alejandro Rojas Buleje (Presidente ejecutivo), Francisco Heydegger (Director de publicaciones), Johnny Sánchez Neátegu (Jefe de prensa), Zuemily Pariasca Higua (Corrección de estilo), Luis Ruiz Martínez (Diagramación).

Actualidad Penal N.º 33

Edición: Marzo 2017
Tiraje: 7100 ejemplares
Registro de Proyecto Editorial: 31501011700406
ISSN 2415-2285 (en línea), ISSN 2313-268X (impresa)
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2014-10327

Edición a cargo de:

© Instituto Pacífico S.A.C.
Primer número: Julio 2014
Jr. Castrovireyna N.º 224 - Breña • Central: 619-3715
Pacífico Editores S.A.C.
Impresión a cargo de:
Jr. Castrovireyna N.º 224 - Breña • Central: 330-3642 / 619-3720

Informes y ventas:

Jr. Castrovireyna N.º 224, Breña, Lima, Perú • 6193717 / 6193728 / 3325766 • E-mail: ventas@empresarial.com y distribuidores autorizados

Derechos Reservados. Decreto Legislativo N.º 822

Los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Instituto Pacífico no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores, ni se responsabiliza de las consecuencias de la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o forma electrónica, incluyendo el sistema de fotocopiado, ya sea para uso personal o colectivo de distribución posterior sin la autorización escrita del Instituto Pacífico S.A.C. quedando protegidos los derechos de propiedad intelectual y de autor por la legislación peruana e internacional.

Correspondencia:

Escribanos a: actualidadpenal@institutoapacifico.com.pe
Página web: www.actualidadpenal.com.pe

Créditos de los autores:

Por un criterio de uniformidad, debajo del nombre de cada autor se incluye su casa de estudios.

Actualidad Penal es una revista oficialmente indexada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex). Esto nos constituye en

PRESENTACIÓN

El número 33 de *Actualidad Penal* centra su atención en las últimas modificaciones producidas por los *Decretos Legislativos N.ºs 1298, 1307 y 1352*, publicadas a raíz de las facultades legislativas que el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo vía Ley N.º 30506 del 9 de octubre del 2016.

El Decreto Legislativo N.º 1352, *Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas*, es analizado por el Prof. Justo BALMACHE QUIRÓS, quien nos acerca al contexto en el que se emitió la Ley N.º 30424, resaltan los aspectos relevantes del proceso de su elaboración, contenido y modificaciones por los abogados WALTER PALOMINO RAMÍREZ y CECILIA MADRID VALERIO, quienes exponen de manera general los alcances de la Ley N.º 30424, y sus recientes adiciones realizadas por el D. Leg. N.º 1352.

El Decreto Legislativo N.º 1298, *Decreto Legislativo que modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 1957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia*, es analizado por el Prof. Francisco CELIS MENDOZA AYMA, quien subraya la necesidad de una adecuada aplicación de la audiencia del control de la legalidad de la detención en casos de flagrancia.

El Decreto Legislativo N.º 1307, *Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada*, es analizado por el Prof. Iván PEDRO GUEVARA VÁSQUEZ, quien reflexiona sobre el íntegro de las modificaciones introducidas por esta norma.

En la sección de DERECHO PENAL-PARTE GENERAL, el magistrado Guido CATTILLO LURA aborda la problemática nacida a raíz de la publicación de la ejecución vinculante recaída en el Recurso de Nulidad N.º 3864-2013-Junín, que establece la graduación de la pena de inhabilitación en proporción a la pena privativa de libertad, y la modificación producida por la Ley N.º 29758 al artículo 426 del Código Penal, que determina que la pena de inhabilitación sea de igual duración a la pena privativa de libertad. Por su parte, el abogado Augusto FERNANDO GALLEGOS MEJÍA revisa los orígenes y los fundamentos del delito continuado, buscando determinar cuáles fueron las motivaciones de su inclusión en nuestra legislación nacional.

En cuanto al apartado de DERECHO PENAL-PARTE ESPECIAL, el Prof. Alonso F.

marco de autoría y participación¹⁸ confieren a los operadores jurídicos criterios interpretativos de imputación válidos en el marco de estructuras organizacionales de la dimensión y complejidad que se tiene a la vista. Así, LUCIANI indica que la adopción de estándares eficaces de investigación, la suscripción de normas y convenciones internacionales, la agilización de mecanismos de cooperación interjurisdiccional y la sanción de leyes que reprimen con severidad las diferentes actividades del crimen organizado se constituyeron en formas de manifestación en las legislaciones de la generalidad de los países¹⁹. Este mismo autor señala que la sensación de inseguridad aqueja prácticamente a todos los ciudadanos del mundo frente al accionar de estos grupos organizados y ha llevado a que los países, en mayor o menor medida, extremen sus mecanismos de protección y, en primera línea, activen la reacción jurídico-penal²⁰. Vaya que dicha apreciación calza perfectamente en el estado actual de la política penal en el Perú, donde el contexto de inseguridad ciudadana que padecen nuestras ciudades ha encumbrado al derecho penal como la primera línea de intervención, en el marco de decisiones legislativas no necesariamente promocionadas por la racionalidad en la valoración principista, sino más bien

- 18 Autoría mediata en estructuras organizativas de poder, la coautoría en corporaciones criminales de mediana y pequeña envergadura, la coautoría no ejecutiva y la coautoría mediata.
- 19 LUCIANI, *Criminalidad organizada y trata de personas*, ob. cit., p. 11.
- 20 *Ibid.*, p. 12.

por el grado de percepción cognitiva de la población hacia el crimen.

IMPORTANTE

"Tranquilidad pública" y "orden público" son presentados como conceptos con un contenido equivalente, lo cual, sin embargo, quedaría mejor expresado por la idea "tranquilidad", ya que refleja en forma más acabada el aspecto de alarma colectiva que se considera fundamento de la punibilidad de la asociación ilícita.

Parafraseando a ESPINOZA DE LOS MONTEROS, la lucha contra el crimen organizado requiere cierta peculiaridad en tanto que no nos encontramos con las fórmulas habituales de delincuencia, sino que resulta ser algo más agresivo tanto por el *modus operandi*, como por su estructura misma²¹.

4. Los instrumentos jurídico-internacionales (tratados) frente a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción

La Convención de Palermo da patente a la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*, la cual declara en su prefacio lo siguiente:

La comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si

- 21 ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, "La lucha contra el crimen organizado en el borrador del Código Procesal Penal: el agente encubierto", art. cit., p. 560.

Sobre la
requisa

Nivel internacional
Caso

la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servir de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas.

La declaración es clara. Enfrentar eficazmente la delincuencia organizada transnacional supone, en primer plano, relativizar el viejo apotegma del principio de soberanía estatal, para dar paso a la justicia universal y a la cooperación jurídica internacional, el firme compromiso de eliminar las barreras legales existentes, los impedimentos jurídicos y así sentar las bases de una justicia penal internacional acorde a los ideales de justicia de la comunidad internacional, en irrestricto respeto a los derechos humanos, con ello del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Conforme a ello, se afirma que tras este Congreso de Naciones Unidas quedó asentado que, cuando se denomina "criminalidad organizada transnacional", se trata del fenómeno criminal que trasciende las fronteras de los territorios nacionales y, por tanto, transgrede las leyes de diversos Estados, o que tienen un impacto sobre

opción que tejer alianzas cooperativas internacionales de las Naciones Parte. Solo a partir de una visión así concebida es que pueden diseñarse modelos político criminales internacionales que puedan afrontar con cierto éxito, semejante desafío.

Pueden existir dos modalidades de transnacionalización: por un lado, que la actividad delictiva se expanda a más del territorio de un Estado; y, por otro, la existencia de alianzas entre entramados organizativos para repartir cotas de mercados y mercancías²³.

Líneas adelante se destaca lo siguiente:

Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional podremos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades.

La firma de la Convención en Palermo en diciembre del 2000 marcó un hito en el

fortalecimiento de nuestra lucha contra la delincuencia organizada. Insto a todos los Estados a que ratifiquen la Convención y sus Protocolos cuanto antes y a que pongan en vigor esos instrumentos sin demora.

La importancia de un instrumento internacional propiciado por Naciones Unidas, como la Convención de Palermo, queda patente por construir una base mínima común para agilizar la cooperación internacional²⁴. Como bien se dice, la Convención de Palermo es una respuesta clara al crimen transnacional. El nivel e intensidad del crimen internacional ha ido más allá de lo que los gobiernos y la población en general están preparados para aceptar. La convención es la piedra fundamental de una estrategia internacional en surgimiento para combatir el crimen organizado transnacional²⁵.

Por su parte, la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (UNCAC)—conocida como la Convención de Mérida—entró en vigencia desde el 14 de diciembre del 2005. Se encuentra compuesta por 126 Estados miembros, cuyos objetivos son los siguientes: adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes; fomentar la

cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción y, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Asimismo, declara que para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de estrategias en la materia.

IMPORTANTE

Bastaba con corregir los elementos constitutivos del tipo penal del art. 317 del CP y no acudir a una fórmula normativa artificiosa e inoficiosa como la prevista en el art. 317-B, "banda delictiva".

Los lineamientos de una política criminal internacional están servidos sobre la mesa, en el ámbito de las convenciones mencionadas, dando contenido a estipulaciones de obligatorio cumplimiento por los Estados parte, en lo que respecta a su aplicabilidad en los casos concretos y en lo concerniente a la armonización de los derechos positivos nacionales con dicha normatividad internacional. Señala LUCIANI que la estrategia internacional se centra en lograr que todas las naciones más o me-

23. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, "El concepto de orga-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

**IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE, TRANSITORIAS y ESPECIAL**

ACUERDO PLENARIO N° 3-2008/CJ-116

Concordancia Jurisprudencial
Art. 116° TUO LOPJ

ASUNTO: Correo de drogas, delito de TID y la circunstancia
agravante del artículo 297.6 del Código Penal

Lima, dieciocho de julio de dos mil ocho.-

Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y a instancia del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el IV Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. Para estos efectos se realizaron reuniones preparatorias sucesivas para delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse. Se decidió tomar como referencia la labor jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema en los dos últimos años judiciales y el conjunto de preocupaciones de la judicatura nacional, expresadas en decisiones recurridas, sobre aspectos jurídicamente sensibles del diario quehacer judicial. En tal virtud, con el apoyo de la Secretaría Técnica designada al efecto -órgano de apoyo encargado, asimismo, de la elaboración de los materiales de trabajo-, se definió la agenda del IV Pleno Jurisdiccional Penal, concretándose los temas, de derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. A su vez se designó a los señores Vocales Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el Vocal Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

Subsumir => incluir

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre la configuración típica de los transportadores de droga o correos de droga, conocidos como "Burriers", en el delito de tráfico ilícito de drogas, y su calificación en el tipo legal básico del artículo 296° del Código Penal o en la circunstancia agravada prevista y sancionada en la primera parte del artículo 297° del citado Código.

4°. En cumplimiento a lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. Dada la complejidad y singulares características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por mayoría absoluta de trece votos, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como ponente al señor VILLA STEIN y se incluyó al señor SAN MARTÍN CASTRO, quienes expresan el parecer del Pleno.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

6°. El inciso 6) del artículo 297° del Código Penal, en el texto establecido por el Decreto Legislativo número 982, del veintidós de julio de dos mil siete, que por lo demás respeta la norma que lo introdujo (parcialmente la norma originaria aprobada por Decreto Legislativo número 635, del ocho de abril de mil novecientos noventa y uno: artículo 297°.1), y, con una mayor identidad, la Ley número 26619, del nueve de junio de mil novecientos noventa y seis, aunque incorporó, conforme a la Ley número 28002, del diecisiete de junio de dos mil tres, el supuesto de "...dedicación a la comercialización de insumos para su elaboración", comprende, alternativamente, dos circunstancias agravantes referidas a la comisión del tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas: la primera, cuando el hecho es cometido por tres o más personas; y, la segunda, cuando el hecho es cometido por el agente en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o a la comercialización de insumos para su elaboración.

7°. Es materia de análisis la primera circunstancia que integra el sub tipo legal agravado de tráfico ilícito de drogas, esto es, cuando "el hecho es cometido por tres o más personas ...". Desde esta perspectiva, es de analizar si es posible subsumir dentro sus disposiciones la conducta de los denominados "correos de droga" o "burriers" (jerga que combina los vocablos "burro" y "courier").

Se trata de individuos que se desplazan usualmente por vía aérea o terrestre transportando droga -usualmente, cocaína, marihuana u opio- en sus bienes personales,

el hecho es cometido por
3 o mas personas

en paquetes adheridos al cuerpo, en cápsulas ingeridas previamente al inicio del viaje o en contenedores colocados en otras cavidades del cuerpo. Ello implica, por lo demás, reconocer la existencia de organizaciones o agrupación de personas que se dedican a captar personas, las cuales pasan, en algunas oportunidades, sin ser descubiertas por la autoridad pública -agentes de Aduanas, personal de seguridad de Aeropuertos y efectivos policiales de control de carreteras-.

Desde la experiencia criminalística, en muchas ocasiones, se detiene a esas personas sin que se logre identificar cabalmente a los que se dedican a reclutar personas con la finalidad de transportar droga o precursores y, en su caso, sin que se descubra la estructura y lógica de funcionamiento de las organizaciones criminales, que por lo general están detrás de ese acto de transporte delictivo.

8°. El presupuesto para determinar la punición de los "correos de droga" es el conocimiento que tienen de estar transportando droga o precursores -objeto material del delito- y que su conducta contribuye a difundir el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupeficientes o sustancias psicotrópicas: conciencia de ilicitud del transporte de tales bienes delictivos. Su conducta ha de ser dolosa -que incluye el conocimiento que dichas sustancias se distribuirán a terceros-, pues de lo contrario incurrirían en un error de tipo (JOSHI JUBERT, UJALA: *Los delitos de tráfico de drogas. Un estudio analítico del artículo 368° del Código Penal*, J. M. Bosch Editor, Barcelona, mil novecientos noventa y nueve, páginas ciento ochenticuatro).

Asimismo, y con carácter previo a la dilucidación de la aplicación de la referida circunstancia agravante prevista en el primer extremo del inciso 6) del artículo 297° del Código Penal y de cara al planteamiento inicial del problema objeto de análisis, resulta necesaria la intervención de tres o más personas en el planeamiento y ejecución del acto de transporte. Se requiere, entonces, que el agente pueda advertir la concurrencia en el hecho -en sus diversas facetas e indistintamente- de tres o más personas, de una red de individuos (a modo de ejemplo, y por lo común: quienes lo captan, luego le entregan la droga o precursores, a continuación lo ayudan a esconderla o le prestan asistencia, y, finalmente, la reciben en el lugar acordado). Debe acreditarse, por tanto, un concierto punible de tres o más individuos, entre los que debe encontrarse el agente en cuestión. Basta, en este caso, una simple consorciabilidad para el delito, una ocasional reunión para la comisión delictiva.

Como es obvio, el tipo legal siempre hace referencia al autor del hecho que criminaliza. Éste debe realizar la conducta penalmente prohibida. El supuesto de hecho de la norma básica: artículo 296° del Código Penal, desde los medios legalmente exigidos para la promoción, favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupeficientes o sustancias psicotrópicas, comprende los actos de fabricación o de tráfico, y éste último importa, dentro del ciclo que involucra, el transporte de las mismas o de precursores. El tráfico -enderezado a la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupeficientes o sustancias psicotrópicas- se refiere a todo acto de comercio, de negociación o de transferencia de bienes -delictivos en este caso-, y comprende las diversas actividades que le son inherentes, entre ellas las de distribución y de transporte, que en este último supuesto ha de entenderse el acto de desplazamiento de dichas sustancias de un lugar a otro, con independencia de la distancia, el medio utilizado y la forma de posesión.

El "correo de drogas", desde la tipología destacada en el fundamento jurídico 7° del presente Acuerdo Plenario, sólo interviene en el transporte, y es ajeno al núcleo de personas, integradas o no a una organización criminal, que lo captaron e hicieron

posible el propio acto de transporte. Su labor se circunscribe a trasladar, instrumentalmente, los bienes delictivos, sin interesar por cuenta de quien se realiza el transporte.

Así las cosas, el delito es una obra conjunta, realizada dentro de un plan común, de todos los que han participado en la preparación y en la ejecución del acto de transporte de bienes delictivos, conducta en la que obviamente está incurso el "correo de drogas". Este último es, por tanto, autor, más allá si, visto globalmente, existe de su parte un menor dominio cuantitativo en el hecho global. La conducta de tener la droga en su poder, con la finalidad de transportarla a otro lugar por encargo de un tercero o terceros, no puede ser calificada sino como autoría; la actividad del transportista, del "correo de drogas", aún cuando subordinada en el aspecto económico a la figura principal del titular del bien delictivo, no lo es desde el punto de vista jurídico atento a la amplitud del tipo legal. No se trata de un supuesto muy excepcional de favorecimiento al favorecedor, vale decir, de conductas auxiliares de segundo orden, periféricas, respecto de quien realiza un concreto acto de tráfico, que importaría calificarlo de cómplice secundario.

En tal virtud, desde los términos tan amplios establecidos por el tipo legal básico, todos los concertados para la actividad de tráfico de drogas —en este caso, de transporte— son autores. Basta el previo acuerdo entre los sujetos con independencia de cuál es el rol concreto a ejecutar por cada uno de ellos, siempre que su concreta conducta contribuya a promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

10°. Ahora bien, el sub tipo agravado examinado, cuando exige que el hecho se cometa por tres o más personas, debe ser interpretado desde los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por tanto, no sólo requiere el simple concierto de tres o más personas en el acto del transporte, que el "correo de drogas" —por ser tal— sea un coautor, pues de ser así perdería sentido o se vaciaría de contenido los supuestos de codeinencia, que están en la propia esencia o expresión criminológica de un delito como el de tráfico ilícito de drogas, y la regularidad y coherencia de la aplicación del tipo legal básico del artículo 296° del Código Penal.

Debe entenderse que la circunstancia agravante comprende necesariamente un nexo más intenso y efectivo del agente con los demás coautores en el acto de transporte y de tráfico, en general. El sujeto activo no sólo ha de realizar exclusivas labores de transporte ocasional del bien delictivo y a título individual (si en el acto de transporte, concertadamente intervienen tres o más personas, la conducta en cuestión será subsumida en el sub tipo legal agravado en cuestión) —ese el rol típico del "correo de drogas"—, sino que su intervención en el hecho total debe expresar y concretar un vínculo más intenso y reforzado con los titulares de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores, o con quienes están involucrados con cierta relevancia en todo el circuito de distribución de los mismos. El sujeto activo ha de estar involucrado o haber participado en otras fases o actividades distintas de las propias o específicas del acto singular de transporte, tales como (1) la obtención, en cualesquiera de sus variables y de manos de terceros, de los citados bienes delictivos, o (2) la determinación o ubicación autónoma de los que recibirían tales bienes; asimismo, en la realización de otras fases, esta vez no anteriores o inmediatamente posteriores al transporte, pero concomitantes, en tanto sean funcionales y de aportación no reemplazables al transporte: (3) actos de intermediación, (4) actos de guarda previa o almacenaje, (5) actos de aportación de personas o bienes instrumentales, entre muchas conductas de similar entidad valorativa.

El agente, en consecuencia, ha de haber realizado aquellas conductas que, además del mero acto de traslado de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores, significan un nexo más intenso, aún cuando ocasional, con los individuos que condicionan y están alrededor de la concreción o materialización del transporte, de suerte que permita concluir que su rol no es meramente periférico o marginal sino, al menos, de cierta entidad, en la finalidad y efectividad del transporte. En ese caso el agente ya no sería un mero "correo de drogas" sino un coautor incurso en el sub tipo agravado del inciso 6) artículo 297° del Código Penal, y como tal deberá ser sancionado.

11°. Lo expuesto, analizado en función a la exclusiva conducta del correo de drogas, no significa que si éste en concierto con otras personas -otras dos o más-, que realizan la misma conducta típica, llevan a cabo el referido acto de transporte como parte de un mismo acto delictivo o plan criminal, no deba aplicarse el sub tipo legal agravado del inciso 6) del artículo 297° del Código Penal. Por consiguiente, si en un acto de transporte de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores, intervienen, mediando concierto, tres o más burriers, deberán ser castigados con arreglo al inciso 6) del artículo 297° del Código Penal.

III. DECISIÓN

12°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad;

ACORDARON:

13°. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos siete a diez, la siguiente:

- 1) El "correo de drogas", según los lineamientos expuestos en el fundamento jurídico 7° del presente Acuerdo Plenario, sólo interviene en el transporte de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores; es ajeno al núcleo de personas, integradas o no a una organización criminal, que lo captaron e hicieron posible el desplazamiento de dichos bienes delictivos. Su labor se circunscribe a trasladar, instrumentalmente, los bienes delictivos, sin interesar por cuenta de quien se realiza el transporte.
- 2) El "correo de drogas" es un coautor del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 296° del Código Penal. Se requerirá, por cierto, que se cumplan los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo legal básico.
- 3) No es de aplicación al "correo de drogas" la circunstancia agravante prevista en el primer extremo del inciso 6) del artículo 297° del Código Penal, salvo lo señalado en el párrafo 11°. El simple concurso de tres o más personas en el acto de transporte de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores, no es suficiente para su configuración. El agente ha de estar involucrado o haber participado en otras fases o actividades distintas -anteriores, concomitantes y posteriores- de las propias o específicas del acto singular de

transporte. Estas actividades significan un nexo más intenso, aún cuando pueda ser ocasional, con los individuos que condicionan y están alrededor de la concreción o materialización del transporte.

14° PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del estatuto orgánico.

15° PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario Oficial "El Peruano".
Hágase saber.

Ss.

GONZALES CAMPOS

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

VALDEZ ROCA

ROJAS MARAVÍ

PONCE DE MIER

MOLINA ORDÓÑEZ

SANTOS PEÑA

VINATEA MEDINA

PRÍNCIPE TRUJILLO

PARIONA PASTRANA

ZECENARRO MATEUS

CALDERÓN CASTILLO

URBINA GANVINI

SE PUBLICO CONFORME A LEY

Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaria de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA

	C.	LEY N° 26332 (24.06.94): Incorporan en el Código Penal artículo referido a la penalización de la comercialización y cultivo de plantaciones de adormidera	774
	D.	LEY N° 26619 (30.05.96): Modifican artículo del Código Penal	777
	E.	LEY N° 27024 (25.12.98): Ley modificatoria del artículo 22 del Código Penal	778
	F.	LEY N° 27074 (26.03.99): Ley que modifica el artículo 397 del Código Penal	779
	G.	LEY N° 27817 (13.08.02): Ley que regula la penalidad de las formas agravadas de la microcomercialización de drogas	780
	H.	LEY N° 28002 (16.06.03): Ley que modifica el Código Penal en materia de tráfico ilícito de drogas	782
	I.	LEY N° 29009 (28.04.07): Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso	786
	J.	DECRETO LEGISLATIVO N° 982 (22.07.07): Ley que modifica el Código Penal.	788
XVI.		MODIFICATORIAS DE NORMAS PROCESALES PENALES EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
		DECRETO LEGISLATIVO N° 983 (22.07.07): Decreto Legislativo que modifica el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal y el nuevo Código Procesal Penal	800
XVII.		JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A.	REGULACIÓN DEL CULTIVO DE HOJA DE COCA	
		1. PLENO JURISDICCIONAL N° 0020-2005-PI/TC – 0021-2005-PI/TC (acumulados)	809
		2. PLENO JURISDICCIONAL N° 006-2008-PI/TC	878
	B.	PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN EN CASO DE DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
		EXP. N° 7624-2005-PHC/TC	922
	C.	PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO	
		EXP. N° 04750-2007-PHC/TC	931
XVIII.		PLENOS JURISDICCIONALES DE LOS VOCALES DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A.	SENTENCIA PLENARIA N° 2-2005/DJ-301-A: Sustitución de penas por retroactividad benigna. La aplicación de la Ley 28002	940
	B.	ACUERDO PLENARIO N° 3-2005/CJ-116: Delito de tráfico ilícito de drogas. Agravantes del tráfico ilícito de drogas	946
XIX.		EJECUTORIAS VINCULANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A.	RECURSO DE NULIDAD N° 1776-2004: Alcances sobre la conclusión anticipada de instrucción prevista en la Ley N° 28122	949
	B.	RECURSO DE NULIDAD N° 4052-2004: Tratamiento del concurso real retrospectivo para determinar la aplicación de la Ley N° 26320	952
	C.	RECURSO DE NULIDAD N° 130-2005: Establecen criterio para la adecuación de penas inferiores al mínimo legal aplicadas en casos de tráfico ilícito de drogas	954

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio relativo a los órganos de alta dirección, asesoramiento, control, apoyo, coordinación y procuraduría pública 586

3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0090-2002-IN-1101 (05.08.02.): Aprueban Directiva «Criterios de priorización y procedimientos para la asignación de bienes incautados por tráfico ilícito de drogas» 590

4. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 1290-2003-IN-1101 (02.08.03): Aprueban Directiva sobre «Normas y procedimientos para retiro, pesaje, embarque, traslado e incineración de drogas decomisadas por tráfico ilícito de drogas» 593

5. DIRECTIVA GENERAL Nº 006-2004-IN-1104 (17.04.04): Normas y procedimientos para la venta por subasta pública de joyas y valores decomisados por tráfico ilícito de drogas 601

6. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 1040-2007-IN (30.12.07): Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior 609

D. MINISTERIO DE JUSTICIA

1. DECRETO SUPREMO Nº 39-94-JUS (23.07.94): Dictan normas que regulan el procedimiento a seguir para la incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 614

2. DECRETO SUPREMO Nº 43-94-JUS (03.11.94): Modifican el Decreto Supremo Nº 39-94-JUS, mediante el cual se dictó normas que regulan el procedimiento de incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 617

3. DECRETO SUPREMO Nº 020-2002-JUS (25.05.02): Modifican artículos del Decreto Supremo Nº 039-94-JUS, que regula el procedimiento para la incautación de bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 619

4. RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Nº 008-2009-JUS/CDJE (19.02.09): Precisan competencias de la Procuraduría Pública especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas y de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio 621

E. PODER JUDICIAL

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 023-STP-TID (09.08.97): Disponen que magistrados de Sala Superior Especializada en delito de tráfico ilícito de drogas expidan copias de sentencias a procesados 623

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 018-2001-P-CSJL (13.01.01): Establecen disposiciones para el trámite de procedimientos materia de la Ley Nº 27379, sobre medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares 625

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 029-2001-P-CSJLI-PJ (19.01.01): Precisan alcances de artículo de resolución que estableció disposiciones para el trámite de procedimientos materia de la Ley Nº 27379, sobre medidas excepcionales de limitación de derechos 628

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 073-2001-P-CSJL/PJ (24.02.01):
Disponen que jueces penales especiales conozcan denuncia y proceso penal derivados de investigación preliminar con medida excepcional de limitación de derechos, prevista en la Ley N° 27379 630
5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 157-2003-CE-PJ (10.12.03):
Aprueban Reglamento del Registro de bienes incautados por la comisión de los delitos aduaneros, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la administración pública 631

F. MINISTERIO PÚBLICO

1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1071-95-MP-FN (16.11.95): Aprueban Circular referida al proceso de terminación anticipada en tráfico ilícito de drogas 636
2. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO N° 435-97-MP-FN-CEMP (21.05.97): Disponen que fiscales superiores, provinciales penales y/o mixtos sigan conociendo la tramitación y juzgamiento de casos a que se refieren los artículos 298 y 299 del Código Penal 642
3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 655-2003-MP-FN (08.05.03): Dictan disposiciones relativas a la reestructuración de diversas fiscalías con la denominación de fiscalías provinciales de prevención del delito del distrito judicial de Lima 644
4. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1364-2004-MP-FN (06.10.04): Establecen competencia por especialidad de fiscalías respecto al delito de lavado de activos previsto en la Ley N° 27765 647
5. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1662-2004-MP-FN (03.12.04): Precisan competencias de fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas 649
6. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1456-2005-MP-FN (06.07.05): Reestructuran jurisdicciones de fiscalías especializadas contra el tráfico ilícito de drogas a nivel nacional y aprueban la Directiva N° 007-2005-MP-FN 651
7. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 1486-2005-MP-FN (15.07.05): Reconforman sedes de las fiscalías provinciales especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas y crean pool de fiscales adjuntos en fiscalías especializadas de Lima y Callao 656
8. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 729-2006-MP-FN (15.06.2006): Aprueban el Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados 658
9. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 042-2007-MP-FN-JFS (10.09.07): Aprueban el Reglamento de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada 678
10. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 225-2007-MP-FN (19.02.07): Dictan disposiciones referentes a fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios y en tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos 683

11. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 333-2007-MP-FN (17.03.07): Convierten fiscalías en fiscalías superiores y provinciales especializadas de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, con competencia a nivel nacional 684
12. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 705-2007-MP-FN (27.06.07): Excluyen determinados casos de la competencia material de las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas de Lima y Callao que serán de conocimiento de las fiscalías provinciales penales o mixtas correspondientes 687
13. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 830-2008-MP-FN (24.06.08): Disponen que la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada conozca procesos en trámite por delitos de tráfico ilícito de drogas en modalidades agravadas y la distribución de procesos por delitos de corrupción de funcionarios 689
14. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 048-2009-MP-FN (20.01.09): Convierten despacho fiscal en Cuarta Fiscalía contra la criminalidad organizada con competencia a nivel nacional 691

G. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF - PERÚ)

1. LEY Nº 26702 (09.12.96): Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (artículos relevantes) 693
2. LEY Nº 27693 (12.04.02): Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF Perú 695
3. LEY Nº 28306 (29.07.04): Ley que modifica artículos de la Ley Nº 27693 712
4. DECRETO SUPREMO Nº 018-2006-JUS (25.07.06): Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú 729
5. LEY Nº 29038 (12.06.07): Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF - Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de fondos de pensiones 753

H. EMPRESA NACIONAL DE LA COCA (ENACO)

DECRETO LEY Nº 22370 (06.12.78): Gobierno aprueba la Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca 759

I. COMITES DE AUTODEFENSA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 741 (12.11.91): Reconocen a comités de autodefensa como organizaciones de la población para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad 765

XV. NORMAS MODIFICATORIAS DEL CÓDIGO PENAL SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

- A. DECRETO LEY Nº 25428 (11.05.92): Incorpora los artículos 296-A y 296-B a la Sección II, Capítulo III del Título XII, del Código Penal 768
- B. LEY Nº 26223 (20.08.93): Modifican el Código Penal respecto a la aplicación de la cadena perpetua en el delito de tráfico ilícito de drogas o de narcoterrorismo 771

NORMATIVA PERUANA EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
--

ÍNDICE

I.	NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	9
II.	TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL PERÚ EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A. CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES. Aprobada por Resolución Legislativa Nº 15013 (16.04.64)	10
	B. CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1971. Aprobado por Decreto Ley Nº 22736 (24.10.79)	42
	C. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988. Aprobada por Resolución Legislativa Nº 25352 (26.11.91)	64
	D. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE 2000. Aprobada por Resolución Legislativa Nº 27527 (08.10.01)	95
III.	DECISIONES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A. DECISIÓN 505: Plan andino de cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos	127
	B. DECISIÓN 602: Norma andina para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	136
IV.	ARTÍCULOS VIGENTES DEL CÓDIGO PENAL REFERIDOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A. PARTE GENERAL	150
	B. PARTE ESPECIAL	152
	1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA	152
	2. DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA	156
	3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	157
	4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	158
	5. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS	159
V.	NORMAS PROCESALES PENALES VIGENTES REFERIDAS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Ley Nº 9024 (23.11.39)	160
	B. CÓDIGO PROCESAL PENAL. Decreto Legislativo Nº 638 (27.04.91)	166
	C. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Decreto Legislativo Nº 957 (29.07.04)	167
VI.	NORMAS QUE PROHÍBEN EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	
	A. DECRETO LEY Nº 22095 (02.03.78): Ley de represión del tráfico ilícito de drogas	173

- B. DECRETO LEY Nº 22926 (13.03.80): Extenderán sanciones a los infractores de las normas de erradicación y sustitución de cultivos de coca 197
 - C. DECRETO LEGISLATIVO Nº 122 (15.06.81): Ley sobre tráfico ilícito de drogas 201
 - D. DECRETO LEGISLATIVO Nº 824 (24.04.96): Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas 206
 - E. LEY Nº 26600 (08.05.96): Ley que sustituye el vocablo narcotráfico por tráfico ilícito de drogas en diversas leyes y decretos legislativos 217
 - F. LEY Nº 27634 (16.01.02): Ley de modificación de los artículos 41 y 68 de la Ley de represión al tráfico ilícito de drogas Nº 22095 218
 - G. LEY Nº 28400 (27.11.04): Ley que precisa los alcances de la primera disposición transitoria y derogatoria de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional 220
- VII. NORMAS SOBRE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS PARA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**
- A. LEY Nº 27379 (21.12.00): Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares 221
 - B. DECRETO LEGISLATIVO Nº 988 (22.07.07): Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27379, que regula el procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones fiscales preliminares 228
- VIII. NORMAS QUE REGULAN LA FACULTAD DEL FISCAL PARA INTERVENIR COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**
- A. LEY Nº 27697 (12.04.02): Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional 232
 - B. DECRETO LEGISLATIVO Nº 991 (22.07.07): Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27697, Ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional 237
- IX. NORMAS SOBRE PÉRDIDA DE DOMINIO COMO SANCIÓN POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**
- A. DECRETO LEGISLATIVO Nº 992 (22.07.07): Decreto Legislativo que regula el proceso de pérdida de dominio 240
 - B. DECRETO SUPREMO Nº 010-2007-JUS (21.10.07): Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 992, que regula el proceso de pérdida de dominio 249
 - C. DECRETO SUPREMO Nº 012-2007-JUS (18.11.07): Modifican el Reglamento del D. Leg. Nº 992, que regula el proceso de pérdida de dominio, aprobado por D.S. Nº 010-2007-JUS 256
- X. NORMAS SOBRE BENEFICIOS EN PROCESOS PENALES POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS**
- A. LEY Nº 26320 (02.06.94): Dictan normas referidas a los procesos por delito de tráfico ilícito de drogas, establecen terminación anticipada y beneficio 259
 - B. LEY Nº 27378 (21.12.00): Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada 262

C.	LEY Nº 28122 (16.12.03): Ley sobre conclusión anticipada de la instrucción en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y microcomercialización de droga, descubiertos en flagrancia con prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera	274
D.	DECRETO LEGISLATIVO Nº 987 (22.07.07): Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada	277
XI.	NORMAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS	
A.	LEY Nº 27765 (27.06.02): Ley penal contra el lavado de activos	279
B.	LEY Nº 28355: (06.10.04): Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley penal contra el lavado de activos	282
C.	DECRETO LEGISLATIVO Nº 986 (22.07.07): Ley que modifica la Ley Nº 27765, Ley penal contra el lavado de activos	287
XII.	NORMAS SOBRE INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS	
A.	DECRETO SUPREMO Nº 021-98-ITINCI (21.12.98): Establecen normas referidas al control y fiscalización de los insumos químicos óxido de calcio, kerosene e hipoclorito de sodio	290
B.	DECRETO SUPREMO Nº 022-98-ITINCI (22.12.98): Dictan normas aplicables a las actividades de usuarios, productores, exportadores e importadores de productos e insumos químicos fiscalizados	292
C.	DECRETO SUPREMO Nº 001-99-IN (21.01.99): Establecen procedimiento para la detección de insumos químicos que son utilizados para la elaboración de drogas ilícitas	294
D.	DECRETO SUPREMO Nº 004-2000-AG (24.03.00): Prohíben uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca	296
E.	DECRETO SUPREMO Nº 023-2001-SA (22.07.01): Aprueban Reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria	298
F.	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 1096-2001-IN-1101 (10.09.01): Aprueban Directiva de normas y procedimientos para comercialización de productos e insumos químicos decomisados por tráfico ilícito de drogas y/o excedentes de empresas	329
G.	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0299-2004-IN-1101 (01.03.04): Modifican Directiva Nº 002-2001-IN/1105 relativa a normas y procedimientos para comercialización de productos e insumos químicos decomisados por tráfico ilícito de drogas o excedentes de empresas	335
H.	RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS Nº 000332-2004-SUNAT-A (09.07.04): Aprueban procedimiento de control de mercancías restringidas y prohibidas (párrafos relevantes)	337
I.	LEY Nº 28305 (29.07.04): Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados	371
J.	DECRETO SUPREMO Nº 053-2005-PCM (28.07.05): Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28305 - Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados	390

- K. DECRETO SUPREMO N° 084-2006-PCM (23.11.06): Modifica el Decreto Supremo N° 053-2005-PCM - Reglamento de la Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados 448
 - L. LEY N° 29037 (12.06.07): Ley que modifica la Ley N° 28305, Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados, modifica los artículos 296 y 297, y adiciona el artículo 296-B al Código Penal, sobre delito de tráfico ilícito de drogas 462
 - M. DECRETO SUPREMO N° 092-2007-PCM (19.11.07): Aprueban Normas Reglamentarias a la Ley N° 29037 que modifica la Ley N° 28305 - Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados 478
 - N. LEY N° 29251 (09.07.08): Ley que modifica la Ley N° 28305, Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados, modificada por la Ley N° 29307 515
- XIII. NORMAS SOBRE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS**
- DECRETO LEGISLATIVO N° 753 (12.11.91): Ley de Bases de la estrategia integral de desarrollo alternativo para erradicar el tráfico ilícito de drogas con la participación de la población 518
- XIV. NORMAS SOBRE ENTIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE DROGAS**
- A. FUERZAS ARMADAS**
- 1. LEY 24150 (07.06.85): Establecen normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, en todo o en parte del territorio 526
 - 2. DECRETO LEGISLATIVO N° 734 (12.11.91): Facultan a los miembros de las Fuerzas Armadas para que puedan ingresar a los establecimientos penales en caso de acciones de la delincuencia terrorista 530
- B. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS – DEVIDA**
- 1. LEY N° 27629 (11.01.02): Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 824 532
 - 2. DECRETO SUPREMO N° 032-2002-PCM (11.05.02): Aprueba Reglamento de organización y funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – Ley 27629, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 824 535
 - 3. LEY N° 28003 (18.06.03): Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 824 558
 - 4. DECRETO SUPREMO N° 044-2003-PCM (24.04.03): Autorizan a DEVIDA el establecimiento de programas de reducción gradual y concertada de las plantaciones de coca 561
 - 5. DECRETO SUPREMO N° 101-2003-PCM (31.12.03): Modifican artículos del Reglamento de la Ley N° 27629 relativo a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 564
- C. MINISTERIO DEL INTERIOR**
- 1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 001-IN-OFECOD-F (18.3.97): Reglamento de administración de bienes incautados por tráfico ilícito de drogas de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas 567
 - 2. DECRETO SUPREMO N° 001-2002-IN (23.03.02): Incluyen procedimientos y servicios de la Oficina de Control de Drogas en el Texto